

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

División de Estudios de Estado y Sociedad

Doctorado en Ciencias Sociales



Los mecanismos de influencia de los poderes fácticos en el Estado Mexicano: el caso de la discusión de las reformas a la *Ley Federal de Radio y Televisión*

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES**

PRESENTA

ISRAEL TONATIUH LAY ARELLANO

DIRECTOR DE TESIS:

DR. JORGE ALONSO SÁNCHEZ

GUADALAJARA, JALISCO, MARZO DE 2009

Índice

Introducción	4
Capítulo 1. Conceptos.	6
El concepto de democracia	8
La posdemocracia y la democracia post-liberal	12
La democracia deliberativa	14
Sociedad civil, tercer sector y grupos de interés	16
Los poderes fácticos como concepto	22
Los conceptos aplicados a esta investigación	25
Aspectos metodológicos	28
Capítulo 2. Antecedentes	42
Los orígenes de la radiodifusión en México	42
La <i>Ley de Comunicaciones Eléctricas</i> de 1926	44
Los inicios de la industria televisiva	48
La <i>Ley Federal de Radio y Televisión</i> de 1960	49
La televisión después de la aprobación de la LFRT	53
La participación de los ciudadanos y la conformación de la sociedad civil	57
La <i>Ley Federal de Telecomunicaciones</i>	61
El Proyecto de <i>Ley de Comunicación Social</i> de 1995	63
La reforma a la <i>Ley Federal de Cinematografía</i> en 1998:	
Un acercamiento claro al ejercicio de la democracia deliberativa	69
Capítulo 3. La Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos, los siete grupos de trabajo y la discusión en la sociedad civil	
Cronograma de la primera etapa	72
La mesa de diálogo para la reforma integral de la Legislación	

de los medios electrónicos	73
El decreto del 10 de octubre de 2002 y la iniciativa ciudadana	78
La iniciativa ciudadana en el Senado	84
La convergencia tecnológica y el <i>triple play</i>	90

Capítulo 4. La segunda iniciativa de reformas y la influencia de los poderes fácticos de los medios electrónicos de comunicación

Cronograma de la segunda etapa de discusión	93
La iniciativa de reforma a la LFRT y a la LFT de 2005	94
<i>Excurso</i> sobre el acceso a la información pública en la Cámara de Diputados	102
Los afectados: la radiodifusión comunitaria, indígena, educativa, cultural, comercial de Amplitud Modulada (AM), y de Frecuencia Modulada (FM)	106
El proceso de discusión interno y externo: desplegados, opiniones, chantajes y encuestas	113
La negociación al interior del PRI y del PAN	122
La aprobación de la minuta en comisiones	127
La sesión del 30 de marzo de 2006	129
La reforma paralela	135

Capítulo 5. La acción de inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad, la discusión y el fallo de la Corte	137
Un año después: se reanuda el debate y comienza la <i>guerra sucia</i>	140
La SCJN y la acción de inconstitucionalidad	145
La discusión en el Pleno de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad	150

Capítulo 6. Las discusiones posteriores al fallo de SCJN

La reforma electoral de 2007	160
El Grupo Plural para la Nueva Reforma a la LFRT y a la LFT	164
La reforma energética	167
El <i>Frente nacional por una nueva ley de medios</i>	170

Las nuevas propuestas para reformar la LFRT y la LFT	171
Epílogo: Sucesos y discusiones sobre medios, democracia y poderes fácticos	173
Conclusión general	180
Índice de abreviaturas	188
Anexo 1	191
Anexo 2	193
Anexo 3	195
Anexo 4	198
Anexo 5	200
Anexo 6	202
Anexo 7	203
Anexo 8	205
Anexo 9	206
Anexo 10	207
Anexo 11	210
Anexo 12	213
Bibliografía	215
Versiones estenográficas	219
Ponencias	221
Artículos en revistas especializadas	223
Otras fuentes	224
Páginas Web	224
Entrevistas	225
Material hemerográfico	226

Introducción

Los medios electrónicos de comunicación, sobre todo la televisión, son esenciales para el desarrollo de la democracia, porque a través de estos debe fluir la información que permita a los ciudadanos contribuir en la construcción de una sociedad mejor. La legislación en materia de radio y televisión fue expedida en el año de 1960. Aliados al régimen, a los medios se les permitió crecer y amasar poder, siempre y cuando mantuvieran fidelidad al gobierno. Quizás por esta razón durante cuarenta años no hubo ningún cambio sustancial en la legislación.

El cambio de partido político en el gobierno, en el año 2000, abrió la puerta para llevar a cabo una reforma integral en la materia, por lo que la discusión para este proceso inició con la creación de una mesa a la que sus integrantes operaron a través de mecanismos de democracia deliberativa. Sin embargo, debido a los múltiples intereses opuestos en este tema, el debate tomó un camino complejo.

El objetivo de la presente investigación es describir y analizar el proceso para reformar la legislación de medios, la forma en que los poderes fácticos intervinieron, y su impacto en la democracia. Para lograr esta meta, el documento se divide en seis capítulos. En el primero se aborda una descripción teórica de los conceptos que se utilizan, así como una descripción de los pasos metodológicos que se siguieron para construir la investigación. El segundo capítulo trata acerca de los antecedentes históricos de la radio y la televisión y de su legislación, así como de un breve recuento de cuando los grupos de la sociedad civil comenzaron con una participación más activa en busca de incidencia en la agenda pública.

El capítulo tres reseña la primera etapa de esta discusión, esto es, desde la conformación de la *Mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos*, de su desintegración, las causas, la continuación de los trabajos, y la presentación de un anteproyecto de ley entregado al Senado de la República, y su proceso legislativo como iniciativa en esta cámara. El capítulo cuatro describe la presentación, en la Cámara de Diputados, de una iniciativa diferente para reformar la *Ley Federal de Radio y Televisión* y la *Ley Federal de Telecomunicaciones*, su discusión y aprobación, su paso al Senado de la República, los foros y consultas que se suscitaron, su aprobación y las causas de ésta.

Una tercera etapa en este proceso se detalla en el capítulo cinco, donde se señala la controversia constitucional presentada por 47 senadores de la LIX Legislatura, y la discusión de esta, un año después, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El último capítulo comenta las discusiones posteriores al fallo de la Corte, así como de las reformas en otras materias que tocan la cuestión de los medios, de la democracia y de los poderes fácticos, así como de los diversos intentos, de diferentes intereses, para subsanar los huecos dejados por la declaración de anticonstitucionalidad de los artículos y parte de estos en la *Ley Federal de Radio y Televisión* y la *Ley Federal de Telecomunicaciones*. Finalmente, se presenta una conclusión que resume este proceso de discusión.

Capítulo 1

Conceptos

Los resultados de la elección presidencial del año 2000 en nuestro país marcaron un *partaguas*, ya que después de más de setenta años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), había sido derrotado en las urnas por el Partido Acción Nacional (PAN). Tras este triunfo, el nuevo Presidente de la República y su partido se jactaron de haber alcanzado la democracia, y hablaron del desmantelamiento del viejo régimen. En el tema de los medios de comunicación, el gobierno se propuso una reforma integral a su legislación. Esta aparente voluntad de cambio llevó a integrar una mesa de diálogo, en donde estuvieron representados el gobierno, los industriales del ramo, el poder legislativo y la sociedad civil, sin embargo, la discusión se extendió por más de cinco años, dejando al descubierto no sólo la radicalización de los intereses en este sector, sino las prácticas de los medios de comunicación para mantener sus privilegios, lo que incluyó la influencia y dominio sobre el gobierno mismo.

Al realizar esta investigación, se observó que los conceptos que se utilizarían para sustentarla: democracia deliberativa, poderes fácticos y sociedad civil, se podían apreciar en dos dimensiones: primera, la perspectiva teórica, la cual llevó a una multiplicidad de acepciones sobre estos; y segunda, el nivel empírico, en donde los actores del proceso utilizaban los conceptos como palabras transparentes, esto es, en la creencia que todos entendían lo mismo. El objetivo de este primer capítulo es definir tales conceptos.

Todo el proceso está descrito a partir del tercer capítulo, aunque para el contexto de los conceptos teóricos es necesario señalar una línea cronológica de los acontecimientos de la discusión:

Primera etapa

- Marzo de 2001, se instala la *Mesa de diálogo para la reforma integral de los medios electrónicos*.
- Octubre de 2002, Se suspenden los trabajos formales de la *Mesa*, aunque los grupos de la sociedad civil continúan, unilateralmente, el debate.
- Diciembre de 2002, los grupos de la sociedad civil terminan la redacción de un anteproyecto para reformar la *Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT)*, el cual entregan a un grupo de senadores, quienes días después la presentan al Pleno como iniciativa de ley.

Segunda etapa

- Noviembre de 2005, debido a un nulo avance en la discusión de la iniciativa de ley para reformar la LFRT en el Senado de la República, se presenta una iniciativa diferente en la Cámara de Diputados para reformar la LFRT y la *Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT)*.
- Diciembre de 2005, la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados es aprobada por unanimidad.
- Marzo de 2006, tras tres meses de debate, la Minuta que contiene la reforma a la LFRT y a la LFT, es aprobada por mayoría en el Senado de la República.
- Mayo de 2006, cuarenta y siete senadores de la LIX Legislatura presentan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tercera etapa

- Mayo de 2007, la SCJN comienza el debate sobre la acción de inconstitucionalidad.

El concepto de democracia

En la actualidad existen diversas concepciones sobre la democracia (electoral, representativa, delegativa, participativa, directa, deliberativa, etc.). Así mismo, teóricos de suma relevancia han dedicado gran parte de su obra al debate de este concepto, tales como Alexis de Tocqueville (1998) Joseph Schumpeter (1947), Norberto Bobbio, entre otros. Giovanni Sartori señala que el término democracia aparece por vez primera en Herodoto, y su significado etimológico es: poder (kratos) del pueblo (demos) (Sartori, 1992: 27).

Jorge Alonso Sánchez, al hacer un recuento sobre este concepto, señala que en la antigüedad pensadores como Cicerón la consideraban como la peor forma de gobernar. Con el paso del tiempo esa forma fue vista con aspectos tanto positivos como negativos (Alonso, 1998: 9-10). Jorge Alonso está de acuerdo con Atilio Borón, cuando señala que si Aristóteles pudiera examinar los gobiernos actuales no los calificaría como democracias, sino como oligarquías o plutocracias. En el caso mexicano, señala Jorge Alonso, “con el declive del presidencialismo vino el auge de la partidocracia (...) y por su parte, los medios electrónicos de comunicación fueron conformándose en una mediocracia que supeditaba a la partidocracia” (Alonso, 2007: 2). Esta situación, como se verá en los posteriores capítulos, tuvo gran relevancia en la discusión de las reformas.

Robert Dahl define a la democracia “como el sistema político entre cuyas características se cuenta su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos” (Dahl, 1993: 13). De acuerdo con Dahl, algunos de los requisitos que haya democracia son los siguientes: Oportunidad para el ciudadano de formular preferencias, de manifestar las preferencias y recibir igualdad de trato por parte del gobierno en las ponderaciones de las preferencias. Para lograr

estos tres requisitos se requieren como garantías institucionales: libertad de asociación, de expresión, de voto, para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo, elegibilidad para la cosa pública, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales, e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias (Dahl, 1993: 15).

David Held en su libro *Modelos de democracia*, aborda este concepto desde dos bloques: los clásicos y los contemporáneos. Dentro del primer bloque se encuentra la democracia clásica; el republicanismo, con sus variantes desarrollista y protector; la democracia liberal, con sus variantes democracia protectora y desarrollista; y la democracia directa. En el segundo bloque se encuentran la democracia elitista competitiva, la democracia legal, y la democracia participativa (Held, 2002: 22).

Víctor Manuel Durand Ponte afirma que “las democracias electorales son aquellas en las cuales se realizan elecciones libres y equitativas, pero donde el Estado de derecho no es pleno, la justicia es deficiente, impera la corrupción, hay abusos de autoridad, etc., mientras que en las democracias plenas la parte electoral está dentro de un Estado de Derecho y los ciudadanos gozan de todos los derechos civiles, políticos, sociales y culturales” (Durand, 2007: 159-160). Para Klaus Bruhn Jensen la democracia es “una constante conversación de solución de problemas, la cual reconoce tanto los desacuerdos como la necesidad de reglas y procedimientos para resolver dichas diferencias, de modo que puedan tomarse decisiones y proceda una acción colectiva” (Jensen, 2007: 66). Por su parte, Enrique Serrano (Serrano, 2000) señala que la democracia, lejos de ser un principio de reconciliación, representa una forma de organización del conflicto social, concepción abierta que reconoce la tensión insuperable entre la realidad institucional (el ser) y su dispositivo simbólico (el deber ser).

El sociólogo francés Alain Touraine, retoma el concepto de democracia de Norberto Bobbio, y la define por tres principios institucionales: “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado a tomar decisiones y mediante qué procedimientos; un régimen es más democrático cuanto una mayor cantidad de personas participa directa o indirectamente en la toma de decisiones; y las elecciones a hacer deben ser reales” (Touraine, 2000: 17). Para este académico, existen tres dimensiones de la democracia: respeto a los derechos fundamentales, ciudadanía y representatividad de los dirigentes. Así mismo, de estas tres dimensiones, se desprenden tres tipos de democracia, de acuerdo a la que prevalece sobre las otras dos:

“El primer tipo da una importancia central a la limitación del poder del Estado mediante la ley y el reconocimiento de los derechos fundamentales. El segundo tipo da la mayor importancia a la ciudadanía, a la Constitución o a las ideas morales o religiosas que aseguran la integración de la sociedad y dan un fundamento sólido a las leyes. El tercer tipo insiste más en la representatividad social de los gobernantes y pone la democracia, que defiende los intereses de las categorías populares, a la oligarquía, ya se asocie ésta a una monarquía definida por la posesión de privilegios o bien a la propiedad del capital. (Touraine, 2000: 46)

Es posible preguntarse sobre las fuerzas y debilidades de estos tres modelos en diversas situaciones históricas, pero es más importante reconocer que el modelo democrático no tiene una forma central y que no puede dejarse atrás la yuxtaposición de los tres modelos, que poseen en común los mismos elementos constitutivos, pero no atribuyen a todos la misma importancia, lo que crea grandes diferencias entre la democracia liberal, la democracia constitucionalista y la democracia conflictiva pero define también el espacio dentro del cual se construyen todos los ejemplos históricos de democracia” (Touraine, 2000: 48)

En el año 2004, Guillermo O'Donnell coordinó la investigación para el *Informe sobre la cuestión democrática en América Latina* realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). O'Donnell señala que un régimen democrático es aquel en donde se llevan a cabo elecciones limpias, decisivas y rodeadas de libertades políticas (O'Donnell (I), 2004: 22-23). Este concepto de democracia se refiere en primer lugar a la democracia como una forma de organización de la sociedad. Esta visión se sustenta en cuatro ideas principales: El ser humano como sujeto portador de derechos; la sociedad organizada de modo que garantice el ejercicio y promueva la expansión de la ciudadanía; las elecciones libres y competitivas, junto con la vigencia del estado de derecho, como condición necesaria, aunque no suficiente, de la democracia; y la especificidad histórica de los pueblos latinoamericanos en sus procesos de construcción de la nación (O'Donnell (II), 2004: 30).

Lo anterior lleva a la democracia más allá del simple derecho y ejercicio del sufragio, al señalar diversas formas de participación social, lo que conduce a un acercamiento entre el Estado y la sociedad en el ámbito de la toma de decisiones. De manera empírica se ha observado que si bien la democracia, al menos en el caso mexicano, había alcanzado una confiabilidad en el ámbito electoral, muchos otros mecanismos no fueron tomados en cuenta, o fueron menospreciados. Esto no significa forzosamente una involución o un retroceso para la democracia nacional, sino que, desde una postura particular, existen diversas concepciones o estadios de la democracia que coexisten en un mismo tiempo y espacio. Es el caso de la posdemocracia, la democracia post liberal, y la democracia deliberativa.

La posdemocracia y la democracia post-liberal

Para Colin Crouch la democracia se define cada vez más en el sentido de democracia liberal; ésta destaca la participación electoral como la actividad política más importante que pueden realizar los ciudadanos, otorga una amplia libertad a los grupos de presión para que desarrollen sus actividades, y crea una comunidad política que no interviene con la economía capitalista. Por otro lado, “la democracia prospera cuando existen más oportunidades de que una gran parte de las personas corrientes intervengan activamente en el diseño de la agenda pública” (Crouch, 2004: 10) El ver la democracia liberal con esta visión, señala Crouch, conlleva a una concepción que va más allá de este concepto.

La aprobación que se le otorga a la democracia liberal por parte de los ciudadanos, aunque éstos mantengan un papel inactivo, y sólo respondan a los llamados que se les hace, lleva al auge de lo que Crouch ha denominado como posdemocracia, en donde no hay participación pública activa, y por lo tanto el poder va cediendo ante los grupos de presión empresariales. “El concepto de posdemocracia nos ayuda a describir aquellas situaciones en las que el aburrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos intereses de una minoría cuentan mucho más que el conjunto de las personas corrientes a la hora de hacer que el sistema político las tenga en cuenta.” (Crouch, 2004: 35) De esta manera, Crouch asemeja a la posdemocracia con una parábola, en donde una línea cruza dos veces una coordenada, pero en distinto punto, en otras palabras, la posdemocracia, aunque con gran influencia de la democracia liberal, puede concentrar características incluso de una época

predemocrática o no democrática¹. En la posdemocracia las empresas pasan de simples organizaciones a concentradoras de poder. De acuerdo con Crouch, cuanto más poderosa se vuelve la empresa, más poderosos se vuelven los individuos que ocupan posiciones estratégicas al interior de ésta, “y este poder tiende a acrecentarse a medida que el gobierno le cede la gestión de sus propias funciones y se inclinan ante la superioridad de sus conocimientos.” (Crouch, 2004: 71)

Crouch señala que el desorden que impera en la democracia hace que la política se esté convirtiendo, una vez más, en asunto de elites cerradas. Aunque en sintonía con lo que señala el ex senador Felipe Vicencio Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), esto ya sucedió en México, justamente con el caso que aquí se analiza. Lo que puede mostrar que hay varios elementos del modelo posdemocrático, confirmado por la aplicación de una política cerrada a ciertos grupos, el creciente poder político de las empresas, y el que gobierno y partidos, incluidos los de izquierda como señala Crouch, “se han convertido en algo endógeno al problema del poder de las elites empresariales” (Crouch, 2004:153)

En cuanto a la Democracia post-liberal, ésta tiene como primera característica la solidez de la democracia liberal. A partir de esto, se expanden entonces los derechos de participación a las organizaciones de la sociedad civil, en distintos aspectos de la agenda pública (cultura, política, asistencia social, etc.). De acuerdo con Benjamín Arditi, autores como Claus Offe y Philippe Schmitter han señalado que en esta esfera de organizaciones se da un segundo circuito de la política. Schmitter propone otorgar financiamiento público a esas asociaciones, e incluso, en opinión del propio Arditi, debería implementarse el voto por Internet, el pago a los electores que acudan a votar y la universalización del sufragio, incluso a los recién nacidos.

¹ Crouch pone un ejemplo bastante sencillo en la página 36 de su libro de posdemocracia.

En este sentido, la democracia post-liberal es un proyecto de maximización de la democracia liberal, y no una idea, puesto que algunos de sus elementos, como el financiamiento específico a algunas asociaciones, se llevan a cabo específicamente en España. En la lógica de este modelo, se desarrolla el concepto de tercer sector, el cual, como se verá más adelante, limita el de sociedad civil.

La democracia deliberativa

Jon Elster compiló varios ensayos acerca del concepto de democracia deliberativa. En general, se puede decir que esta “es la toma de decisiones a través de la discusión entre ciudadanos libres e iguales. La renovación de su vigencia se debe a la influencia de Habermas, quien señala que la idea de democracia gira en torno a la transformación y no en torno a la mera acumulación de ideas.” (Elster, 1998: 13) Según Elster, “desde su nacimiento, la democracia por medio de la deliberación fue considerada tanto en forma positiva como negativa. Algunos sostenían que la discusión mejoraría la toma de decisiones, y otros, en cambio, que llevaría a adoptar malas resoluciones” (Elster, 1998: 14).

Aunque las concepciones compiladas por Elster difieren en las bondades y alcances, concuerdan en lo siguiente: “el concepto incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes: esta es la parte democrática. Así mismo concuerdan en que incluye la toma de decisiones por medio de argumentos ofrecidos por y para los participantes que están comprometidos con los valores de racionalidad: esta es la parte deliberativa.” (Elster, 1998: 21) Una de las debilidades vistas a este

modelo, en opinión de Elster, es que “Las decisiones importantes suelen ser tan urgentes que no puede permitirse discutir las en forma interminable. Por otro lado, las decisiones menos importantes no justifican las deliberaciones prolongadas (...) La deliberación no solamente es el debate, sino que se justifican las ideas mediante la argumentación.” (Elster, 1998: 23)

César Cansino, por su parte, ofrece un esquema muy didáctico: “el proceso de deliberación pública debe hacerse de forma argumentativa, por medio de un intercambio regulado de información y de razones. Asimismo, las deliberaciones deben ser incluyentes y públicas, ya que todos los afectados deben de formar parte de la discusión, deben ser libres de cualquier coerción exterior o interior que pudiese implicar un prejuicio hacia el otro interlocutor, pues todos tienen derecho a hablar, pero también la obligación de escuchar.” (Cansino, 2007: 290)

Jorge Alonso argumenta que “la democracia deliberativa, al abrir una discusión pública sobre las más diversas políticas, posibilita la construcción de espacios de negociación y de formación de consensos fundados. Una democracia “dialógica” no es simplemente una extensión de la democracia liberal, sino la creación de formas de intercambio social que reconstruyen solidaridades sociales” (Alonso, 1998: 19). Adicionando lo señalado por este autor, se afirma que una de las características del concepto de democracia deliberativa que utilizamos en esta investigación es que no es una concepción totalmente distinta de la democracia liberal o un estadio distinto de ésta, sino un mecanismo que bien puede embonar en ella. Como un dispositivo de participación social está vigente, aunque es importante señalar que para algunos autores puede tener rasgos negativos, y para otros positivos, situación de la cual no están exentos los otros modelos y estadios de la democracia.

Una de las críticas a este modelo discursivo de la democracia deliberativa la hace Elster, al señalar que Habermas no ofrece ninguna justificación para esta práctica, y da por hecho que en

las democracias los problemas se deben resolver mediante la discusión. “Muestra, en particular, cómo en la discusión siempre se presuponen normas implícitas de verdad proposicional, corrección normativa y veracidad.” (Elster, 2001: 26) También Elster extiende su crítica a Cohen, ya que éste también apunta a un objetivo similar, presuponiendo que la deliberación efectiva se desarrolla en el razonamiento público entre participantes libres e iguales. Ante esto Elster hace el siguiente comentario: “Uno podría preguntarles a Cohen y a Habermas si sus argumentos tienen algún correlato en la discusión política real.” (Elster, 1998: 26)

Como respuesta a lo anterior, se puede señalar que al ser la democracia deliberativa un instrumento de discusión entre los actores involucrados en determinada temática, deben existir dos componentes esenciales: los individuos “libres e iguales” que tienen el conocimiento para entrar en la discusión, y la voluntad de los legisladores para escucharlos e incorporar tales argumentos a un proceso parlamentario (o a una política pública, si se trata del poder ejecutivo). Ambas condiciones se han logrado en diversos proyectos legislativos en México, que precisamente han iniciado en una discusión pública entre ciudadanos que luego presentan sus propuestas al órgano legislativo².

Sociedad civil, tercer sector y grupos de interés

Comúnmente se le ha denominado sociedad civil a un determinado grupo de ciudadanos organizados, cuyos objetivos se presumen fuera de la esfera del Estado y del mercado. Otra situación que comúnmente sucede es que se autodenominan como sociedad civil los grupos de

² Un ejemplo se describirá en el capítulo 2.

empresarios. Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (2006) definen al tercer sector como una “multiplicidad de organizaciones sociales, individuos voluntarios, fundaciones e institutos empresariales que desarrollan actividades con fines públicos”. La crítica de estos autores hacia este concepto se amplía al señalar que “el concepto de tercer sector despolitiza la vida pública, borra las diferencias, crea ausencia de proyectos políticos, de intereses distinguibles y de valores y de culturas distintas”.

Mario Roitter en su ensayo titulado *El tercer sector como representación topográfica de la sociedad civil*, argumenta que el concepto de tercer sector fue acuñado en los Estados Unidos. La idea de sector surge porque las asociaciones u organizaciones sociales, sin importar su estatus jurídico, se pueden concebir como sector, ya sea por los servicios que ofrecen, proyectos políticos o intereses, de esta manera trabajan en un espacio diferenciado al Estado y a las empresas. Pero el resurgimiento de la idea de sector, señala Roitter, es un subproducto del neoliberalismo, presentado como alternativa a la acción estatal y como la propia esencia de la sociedad civil.

Dentro del estudio del Tercer sector, y sobre todo en Estados Unidos y Europa, la investigación se inclinó hacia las organizaciones no lucrativas que prestaban servicios de bienestar. Desde esta perspectiva, el objetivo de estas organizaciones era la caridad. Pero la denominación de Tercer sector hace referencia también a una gama de organizaciones como “hospitales de comunidad, universidades privadas, clubes sociales y deportivos, organizaciones profesionales, cooperadoras escolares, centros comunitarios y vecinales, núcleos informales de ayuda mutua, entidades de defensa de derechos humanos, organizaciones de defensa de consumidores, cámaras empresariales, fundaciones empresarias; entre otras.” (Roitter, 2005: 35)

Para Santos, el tercer sector es “la denominación, residual e imprecisa con la que se intenta dar cuenta de un vastísimo conjunto de organizaciones sociales que se caracterizan por no ser ni

estatales ni mercantiles, es decir, todas aquellas organizaciones sociales que, siendo privadas, no tienen fines lucrativos y que, aunque responden a unos objetivos sociales, públicos o colectivos, no son estatales.” (Santos, 2005: 68) Para este autor, en muchos países el tercer sector se encuentra a menudo vinculado con los sindicatos, por otro lado, señala Santos, “en los países periféricos y semiperiféricos, las limitaciones del Estado de bienestar, las vicisitudes de la democracia y los procesos que dieron lugar al tercer sector, hicieron que sus relaciones con el Estado fueran mucho más inestables y problemáticas” (Santos, 2005:85)

En el caso particular de México, se podría afirmar que el corte ideológico de quienes ostentaron el poder a partir del segundo cuarto del Siglo XX, llevó a impulsar agrupaciones en los sectores campesino, obrero, popular e incluso militar, aunque también se dio auge a la organización de empresarios y cámaras patronales. Fue este segundo bloque y no el primero, el que tuvo el reconocimiento como sociedad civil en México, aunque sus intereses fueran más particulares que públicos.

Roitter señala que el concepto de *organizaciones de la sociedad civil* es utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para este autor, sociedad civil es un espacio en donde participan las asociaciones que proyectan su acción hacia la construcción de ciudadanía participativa y otros actores sociales individuales que se constituyen en referentes sociales o que conforman colectivos transitorios o permanentes. En este espacio simbólico, continúa Roitter, se construye poder y se hace política en diálogo o en enfrentamiento con el poder político y el poder económico.

Dagnino, Olvera y Panfichi argumentan que “las nociones de ciudadanía, sociedad civil y de participación formuladas por el proyecto neoliberal expresan una misma intención

despolitizadora y, por lo tanto, son portadoras de lo que se podría llamar una visión minimalista de la política. (...) La sustitución del término sociedad civil por el de tercer sector, al lado del mercado y del Estado, indica la nueva función y designa el intento de retirar de la sociedad civil su papel como constitutiva del terreno de la política, ahora otra vez condensado en la sociedad política. El tercer sector refuerza una concepción estatista del poder y de la política, precisamente contra la cual se dirigió la visión de sociedad civil del proyecto democrático, al confrontar al monopolio del Estado y de la sociedad política en el ejercicio de la política y del poder. (Dagnino, 2006: 64)

De acuerdo con Benjamín Arditi, la sociedad civil

Es la esfera de interacción social entre el Estado y la economía, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y la forma de comunicación pública. Esta definición es parte de lo que los autores han llamado la teoría de las tres partes, que plantea que dentro de la sociedad encontraremos grupos específicos que mantienen el control de las relaciones estatales y económicas. Por ello estos grupos son llamados sociedad económica y sociedad política, esferas que son complementadas con la esfera civil de la sociedad: la sociedad civil. (Arditi, 2005: 50)

Carlos Chávez Becker menciona que hay tres usos sobre este concepto: primero, el que surge a finales del Siglo XVII y se refería a las instituciones no estatales con miras capitalistas; segundo, el concepto anterior cambia a mediados del Siglo XIX, dirigido a un capitalismo pujante y la búsqueda de valores democráticos; y tercero, se convierte en una unidad analítica independiente, diferenciada del estado y del mercado. Chávez cita el concepto de sociedad civil de Alexander, quien lo define como “una esfera solidaria en la cual cierta clase de comunidad universalizada viene a definirse y, hasta cierto punto, a reforzarse” (Chávez, 2005: 49)

Chávez habla de tres componentes centrales del concepto de sociedad civil, desde una perspectiva habermasiana: “Las instituciones que garantizan las libertades y derechos políticos, individuales y sociales, así como la libertad de asociación para defenderse del Estado y del mercado” (Chávez, 2005: 49), “El conjunto de movimientos y asociaciones que actúan en el seno de la sociedad y que se preocupan permanentemente por el análisis, la crítica, la elaboración y la aplicación de las políticas públicas”; y “una cultura política anclada en una diversidad de espacios públicos, favorable a la tolerancia y al respeto mutuo y proclive a una relación crítica con el Estado y el mercado” (Chávez, 2005: 50)

En uno de los documentos anexos del *Informe sobre la democracia en América Latina*, realizado por el PNUD, Juan E. Méndez conceptualiza a las organizaciones independientes de la sociedad civil como entidades creadas espontáneamente por grupos de ciudadanos para defender intereses colectivos no necesariamente propios. El autor señala que a través de las organizaciones independientes de la sociedad civil los ciudadanos participan más cotidianamente de la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y el control de los actos del gobierno (O'Donnell (I), 2004:131-132).

Méndez afirma que en América Latina las políticas públicas se diseñan e implementan con escasa o nula participación de la sociedad, y que se desdeña el aporte de los que saben dentro de ellas si no están afiliados a los partidos políticos o contratados por el Gobierno (O'Donnell (I), 2004: 133). Más adelante Méndez señala “La movilización de la sociedad civil aportará a la calidad de la democracia si consigue concitar atención sobre problemas urgentes y galvanizar a la opinión de manera de producir cambios en las aspiraciones de las mayorías. La participación a través de partidos políticos que gocen de credibilidad y legitimidad ayudará a canalizar esas aspiraciones hacia los lugares institucionales donde se toman las decisiones.” (O'Donnell (I), 2004: 133).

Méndez aclara que las organizaciones sociales tienen el límite obvio de su carácter sectorial, pero esto puede convertirse en una virtud si se le entiende como especialización y experiencia. Estas organizaciones tampoco pueden ser medidas por su “representatividad”: no aspiran a representar a ningún número de ciudadanos ni sector alguno, por lo que ésta categoría no puede aplicárseles. Su mérito, en todo caso, está en la calidad de la información con que cuentan a partir de su experiencia en sus temas, en su capacidad para divulgar esa información, en el rigor con que la analizan y en la validez empírica de las propuestas que formulan (O'Donnell (I), 2004:134).

Luis Aguilar Villanueva señala cuatro aspectos sobre la sociedad civil mexicana. Destaca en el último de ellos “la reivindicación de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas trascendentes mediante la creación de las instituciones políticas de consulta y elección (referéndum, plebiscito, iniciativa popular) y/o a participar en la elaboración de políticas públicas en sus fases de planteamiento, diseño, puesta en práctica, evaluación, reproducción, mediante variadas formas de intervención de las organizaciones sociales” (Aguilar, 2007: 195)

Por otro lado, los grupos de la sociedad civil también pueden definirse como grupos de interés. Si bien Evelina Dagnino define estos como aquellos que defienden intereses particulares, aunque éstos sean colectivos, mientras que la sociedad civil defiende intereses que se pretenden públicos³, también, como señala Méndez, debido a la particularización o especialidad del grupo o diversos grupos, éstos tienen un interés particular en la materia, sin que se entienda por esto el sentido lucrativo o la cuestión económica. Otra acepción señala que los grupos de interés son asociaciones formadas por personas, organizaciones o entidades privadas que se reúnen para perseguir determinados objetivos comunes. Este concepto clasifica a los grupos en dos criterios: de acuerdo al tipo de objetivos que persiguen; y según la situación del grupo con respecto al

³ Seminario de Investigación, Doctorado en Ciencias Sociales, Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (Ciesas) Occidente, 27 de noviembre de 2006.

gobierno. De acuerdo a esta definición, los grupos ejercen su influencia movilizandolos recursos (económicos, mediáticos, organizativos), mediante actividades de persuasión (campanas de difusión informativa, de movilización, etc.), actividades económicas (financiación de revistas, mecenazgos, patrocinios de actividades artísticas, fundaciones, becas, etc.), y actividades jurídicas.⁴

Ahora bien, todo grupo de interés tiene la capacidad para poder llevar sus demandas a la agenda pública, aunque algunos de ellos adquieren y concentran tanto poder que no sólo son capaces de hacerse escuchar por el gobierno, sino que logran influir en él y dirigir tanto la discusión de la agenda pública como las decisiones que se tomen en ésta, por lo que se convierten en un poder fáctico.

Los poderes fácticos como concepto.

En el contexto de la discusión de la reforma a la LFRT y a la LFT en el Senado de la República, los legisladores que buscaban la deliberación de la minuta, y por ende, en contra de su aprobación directa, acusaban a los *poderes fácticos* de controlar el proceso. Se referían a las televisoras, principalmente a Televisa⁵. Fátima Fernández señala que “Fáctico viene de *factum*, hecho. Si lo unimos a la palabra poder, su significado apunta hacia la supremacía fundada en actos, en fuerza, en dominio y, como dice la Real Academia en su segunda acepción, fáctico significa “basado en

⁴ http://www.wikilearning.com/los_grupos_de_interes_y_los_movimientos_sociales-wkccp-6273-42.htm

⁵ Aunque existe un oligopolio televisivo en México, con dos televisoras, Televisa y TV Azteca, en realidad quien controló el proceso a favor de sus intereses fue la primera. Por lo que se debió haber señalado “poder fáctico” en singular y no en plural.

hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario”. El poder fáctico tiene existencia real, aunque todavía no tenga acta de nacimiento en la teoría política”.

Fernández afirma que “más cerca de lo que hoy se entiende por poder fáctico estaría lo que hace 40 años, y referido a México, se calificó como poderes reales en contraposición a los poderes formales. En aquellos años, González Casanova, en *La democracia en México*, asoció a los poderes reales con instituciones que, sin tener poder formal, influyen directamente en la decisión gubernamental y cuya acción política era ajena a la teoría euroamericana de la democracia. Encontró cuatro tipos: a) los caudillos y caciques regionales y locales, b) el ejército, c) el clero, d) los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros. Con los años estos poderes se han precisado” (Fernández, 2007).

Al respecto, Jacqueline Peschard señala que “hoy nos referimos a los poderes fácticos para nombrar a aquellos que sin ser parte del cuadro institucionalizado del poder, tienen la fuerza para condicionar el ejercicio de la acción del Estado mexicano, cuando no para amenazarlo o neutralizarlo”. Una vez que la autora define los poderes fácticos, ejemplifica con las grandes televisoras y con el narcotráfico” (Peschard, 2006). Por su parte, María Amparo Casar señala que los poderes fácticos han crecido bajo el amparo y el mismo consentimiento del Estado (Casar, 2006).

Por su parte, O'Donnell identifica, en el *Informe sobre la democracia en América Latina*, a los grupos económicos, los empresarios, el sector financiero, el narcotráfico y los medios de comunicación, como los principales actores de los poderes fácticos. Estos grupos de interés, señala O'Donnell, funcionan como poderosos *lobbies*. El sector financiero y los medios en la última década han constituido los principales grupos de interés que limitan el poder de decisión de los gobiernos (O'Donnell (III), 2004:159).

Ahora bien, si el poder fáctico es entendido como ese poder que se ejerce de hecho, por encima de la autoridad del Estado, es necesaria una clasificación de los actores que lo llevan a cabo. El ejercicio de un poder fáctico es ilegal al no estar atribuido en el orden constitucional, sin embargo, los actores que lo ejercen sí pueden ser clasificados en dos bloques: legales e ilegales. Las empresas transnacionales, los empresarios y los medios de comunicación quedarían agrupados en el primer tipo, mientras que el narcotráfico y el crimen organizado estarían en el segundo. Los primeros ejercen influencia y sus acciones, se supone, están supeditadas al estado de derecho, esto es, que el Estado puede actuar para regularlas y castigarlas (o incluso permitir las). Sin embargo, los del primer grupo actúan no sólo fuera del estado de derecho, sino en una confrontación directa en contra del Estado, incluso sobre los del primer bloque.

En cuanto a los medios de comunicación, su poder fáctico consiste en la manipulación de la información, influyendo directamente en la percepción de los ciudadanos. Esto no es una situación simple, ya que pueden influir de manera importante en cuestiones de trascendencia, como en la creación o aplicación política pública, o el ambiente electoral. Esta última fue la razón más importante para que la clase política mexicana aceptara la imposición de la redacción de la reforma a la LFRT y LFT.

De acuerdo con Javier Esteinou, las diferencias entre los poderes públicos y los poderes mediáticos son las siguientes:

Poderes públicos	Poderes mediáticos
Actúan representando los intereses colectivos de la nación y del bien común.	Representan intereses particulares o personales.
Su legitimidad proviene de una elección democrática por el pueblo a través de voto en las urnas, a excepción del Poder Judicial, que es designado por el Poder Ejecutivo con ratificación del Senado de la República.	Su poder lo adquieren mediante la concentración económica y tecnológica.
Ideología de la democracia y del Estado moderno.	Libertad empresarial y libertad de expresión.
Constitución política y el estado de derecho.	La forma y el control de transmisión de la realidad cotidiana.
Tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) con personalidades y sedes concretas.	Poderes informales que se encuentran en todas partes.
Poderes independientes entre ellos.	Forma monopólica.
Obligados a procesos de transparencia y rendición de cuentas (El Ejecutivo por lo menos una vez al año al Poder Legislativo).	No se someten a ningún procedimiento de rendición de cuentas.
Se renuevan periódicamente. Poder Ejecutivo: seis años; Poder Legislativo: Diputados 3 años, Senadores seis años; Poder Judicial: 15 años ⁶ .	No se renuevan periódicamente y la concesión es hereditaria.
Le dan forma institucional al Estado.	Tratan de sustituir a los poderes formales y señalan que el Estado moderno es prescindible para gobernar, y sólo es reconocido como una entidad para administrar.

Fuente: (Esteinou, Javier, 2008)

⁶ Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación duran quince años, sin embargo, debido a que ésta es la primera Corte luego de las reformas de 1994 -que redujeron el número de sus integrantes- se estableció un sistema de sustitución escalonada, concluyendo en sus funciones bajo el siguiente calendario: 30 de noviembre del 2006: Ministro Juan Díaz Romero. 30 de noviembre del 2009: Ministro Mariano Azuela Güitrón y Ministro Genaro David Góngora Pimentel. 30 de noviembre del 2012: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 30 de noviembre del 2015: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, Ministro Juan N. Silva Meza y Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas (www.scjn.gob.mx).

Los conceptos aplicados a esta investigación

Los conceptos que se han descrito son los pilares teóricos de esta investigación. Para los fines de la misma, se entenderá como *democracia deliberativa* los mecanismos del proceso de discusión.

Idealmente se desarrollarían a través de cuatro etapas:

Primera. Las condiciones que contextualizan la discusión dentro de una historia, política, cultura, economía, país o región determinado. En general, se trata de un recuento histórico crítico el cual ha llevado a cierta evolución del fenómeno en cuestión.

Segunda. La discusión entre individuos, quienes acuerdan los mecanismos de diálogo y comunicación, para poder llevar el debate de este tema de interés público a la agenda legislativa o del Poder Ejecutivo.

Tercera. Los mecanismos creados por el legislativo para atender las demandas que emanan directamente de los grupos de la sociedad civil. Aunque de acuerdo con la teoría de Habermas, la participación de las organizaciones sociales debe quedar al margen de la propuesta que se ha de discutir en el legislativo, en nuestro país, en los casos empíricos en donde se han utilizado mecanismos de democracia deliberativa, las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la temática y los grupos de interés, han participado en esta etapa a través del cabildeo, por lo que se llega a la cuarta etapa, denominada contexto de decisión (Lay, 2005).

En este contexto los legisladores, o los funcionarios gubernamentales (en el caso de que se trate la consulta o reforma de una política pública) escuchan los argumentos de todos aquellos expertos que opinan en la materia bajo un mecanismo previamente establecido, y con el objetivo

de tener todos los elementos y disipar dudas, para que se pueda llegar así a la redacción de un dictamen, abarcando, ahora sí, la fase del *output* de Habermas (Habermas, 1998:407-408).

En cuanto a *sociedad civil*, ésta debe entenderse como un concepto marco y no como un ente monolítico. Más bien se refiere a diversos grupos de individuos (*grupos de la sociedad civil u organizaciones de la sociedad civil*) cuyos objetivos son públicos y se diferencian de las acciones que emprende el Estado y el mercado. Estos grupos, diferentes entre sí, mantienen objetivos particulares en una meta unidireccional, o un propósito con una serie de objetivos encaminados a uno general. Su carácter de homogeneidad no se deriva porque todos sus integrantes sean iguales o pertenezcan a un mismo gremio, sino por el objetivo común que se fija y los mecanismos que se siguen para alcanzarlo.

Finalmente, los *poderes fácticos* deben ser entendidos como aquellos entes que desafían al poder institucional, y que bajo diversos mecanismos minan la acción y respuesta del Estado, aunque utilicen las vías institucionales principalmente a través del cabildeo, no significa que recurran a prácticas legítimas, sino que también presionan y chantajea, de la manera necesaria para alcanzar sus objetivos. El poder fáctico que tratamos en esta investigación se manifiesta en los medios electrónicos de comunicación, representados principalmente por Televisa.

Aspectos metodológicos

Como conclusión de la investigación sobre el análisis del proceso de la *iniciativa de ley de la industria cinematográfica* de 1998 (Lay, 2005), se sostuvo que la democracia deliberativa era un mecanismo eficaz para alcanzar consensos y para incorporar los argumentos de la sociedad civil a la discusión legislativa. El seguimiento a la aplicación de mecanismos de este tipo, así como sus resultados, fue uno de los principales objetivos en el planteamiento del proyecto de investigación en este posgrado. El caso que ahora se analizaría sería un proceso que incluía aspectos de democracia deliberativa pero que habían sido desplazados por intereses empresariales a través de sus poderes fácticos. De esta manera se justificó el análisis del proceso de la discusión de la reforma a la LFRT.

Cuando se inició la investigación, en enero de 2005, la discusión de la *iniciativa ciudadana* se encontraba estancada en el Senado de la República. Después, a finales de ese año se presentó una iniciativa diferente en la Cámara de Diputados, para reformar no sólo la LFRT, sino también la LFT, la cual fue aprobada en su respectivo proceso legislativo. Paradójicamente, una iniciativa en materia de radio y televisión había sido congelada en el Senado de la República, mientras que otra en el mismo rubro y con la incorporación de la temática de telecomunicaciones había sido aprobada en la Cámara de Diputados en menos de dos semanas ¿Por qué había sucedido esto? porque quienes frenaban el tema en una Cámara, eran quienes la impulsaron en la otra ¿Por qué? Porque ellos también requerían una legislación actualizada para continuar con su evolución, y con lo que no estaban de acuerdo era el compartir su poder con los grupos de la sociedad civil. De esta manera, Televisa impulsó un proyecto que le beneficiaba casi de forma exclusiva. El

camino que siguió la discusión de la minuta en el Senado mostró que esta empresa no sólo influyó en el poder legislativo, sino que también lo hizo en el Poder Ejecutivo Federal.

En el análisis del proceso en el Senado, surgieron preguntas como: ¿Qué pasó en el proceso legislativo? En las comisiones de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) y de Comunicaciones ¿Quiénes apoyaron la iniciativa? ¿Quiénes no la apoyaron? ¿Hubo debate? ¿Qué se dijo? ¿Cómo cabildeó Televisa? ¿Cuál fue la postura general de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y de sus agremiados? ¿Cómo respondieron los grupos de la sociedad civil? La hipótesis que surgía era que los poderes fácticos habían influido al Estado mexicano.

El caso empírico de esta investigación obligó a que la metodología de la misma iniciara definiendo los conceptos teóricos, aunque una de las principales dificultades fue la dispersión de la multiplicidad de acepciones, aunque más tarde se reflexionó en que se trataban de conceptos políticos, tal y como lo indica Weldon (1953), ya que estas palabras describen un aspecto del comportamiento humano y la forma de organización para resolver un problema en particular. De esta manera, se optó por realizar una descripción general de los mismos, para después, tomando en cuenta cada uno de los contextos de las etapas, definir de qué manera se habrían de utilizar.

Por las características del fenómeno mismo, la presente investigación se define como cualitativa, ya que se trata del análisis y explicación de un caso empírico, a través de conceptos acotados. Siguiendo a Olvera, “este estudio puede constituir un recurso metodológico descriptivo” (Dagnino, 2006: 76), ya que se trata de explicar la relación entre el poder fáctico de los medios electrónicos y los poderes del estado.

Esta investigación tiene características exploratorias, descriptivas, y explicativas. Exploratorias porque, si bien como se verá más adelante, la radio y la televisión son temas de interés sobre todo

para quienes estudian comunicación, comparativamente su relación con la democracia, y sobre todo con la democracia deliberativa, así como con los poderes fácticos, ha sido abordada en menor escala. La segunda característica es descriptiva porque sigue todo el proceso de discusión desde su génesis en 2001 hasta el año 2008. Así mismo, tiene un carácter explicativo, pues trata de nexos causales específicos entre las acciones de los grupos protagonistas y las decisiones de los poderes públicos en este tema.

Después de la aprobación de la minuta por mayoría de los senadores el 31 de marzo de 2006. La hipótesis parecía haber sido probada con la simple aprehensión de lo que sucedió a lo largo de este proceso, aunque la entrevista a actores fundamentales, como Felipe Vicencio y Dulce María Sauri, revelaron que esa aparente influencia del poder fáctico de Televisa no era tan simple, sino que más bien fue un acuerdo que por un lado beneficiaba a los candidatos presidenciales Felipe Calderón Hinojosa (PAN), Roberto Madrazo Pintado (PRI) y Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como a diversos diputados, de todos los partidos, y senadores del PRI y del PAN que en el proceso electoral de 2006 eran candidatos a algún puesto de elección popular.

Aún con la reflexión anterior, en ese momento se decidió que la hipótesis no cambiara, pues lo importante era explicar ese mecanismo de influencia a través de la negociación de intereses mutuos. Se entendió que no sólo se trataba de la aplicación de un mecanismo de democracia deliberativa, la anulación de éste y de las diversas voces de grupos de la sociedad civil, y la influencia de Televisa; sino que se estaba observando cómo un gobierno emanado de un partido de oposición, con un discurso democrático, cedió ante el poder fáctico de Televisa por un interés de conservación del poder (electoral), a través de prácticas predemocráticas.

Sin embargo, con la resolución de la SCJN, y el acontecimiento legislativo de 2007, con la discusión de la reforma electoral, se presentaron indicios de que tales poderes fácticos no eran superiores a los poderes del Estado, sino que había una graduación, ya que a más cerca un periodo electoral, los medios electrónicos tienen mayor influencia, pero en periodos no electorales, se repliegan. Este fenómeno, más que enunciar una hipótesis nueva, se puede considerar como una veta de estudios para la posterioridad.

Sobre la recolección de la información, ésta se llevó a cabo en dos rubros: documental y testimonial. La información documental fue recolectada del seguimiento y cobertura que le dio la prensa escrita y revistas especializadas. Esto en virtud de que como un hecho reciente, no había una bibliografía específica del tema, incluso, son pocos los autores que han escrito sobre la legislación de radio y televisión. Uno de estos es Raúl Cremoux (1982), en cuyo texto *La legislación mexicana en radio y televisión*, se hace una lectura comentada de la LFRT de 1960, del *Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica, relativo al contenido de las transmisiones en radio y televisión*, del 4 de abril de 1973, del *Acuerdo Presidencial por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios el pago de impuestos con algunas modalidades*, del 31 de diciembre de 1968, y del *Acuerdo Presidencial por el que se constituye una comisión intersecretarial de radiodifusión*, del 21 de agosto de 1968.

Sobre el tema de esta investigación, en febrero de 2009 sólo existía el libro coordinado por Javier Corral y Pablo Arredondo (2007), el cual más que un texto redactado *ad hoc*, es la memoria de un seminario sobre el tema, que se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y

Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara a principios de octubre de 2007⁷. En tres libros se incluyen algunos capítulos o párrafos del tema. En el libro de Francisco Hernández y Guillermo Orozco (2007), se dedican menos de dos cuartillas a la *Ley Televisa*, además de esta breve mención, la información en esos párrafos contiene inexactitudes⁸. En el libro colectivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) (Vega, Portillo, Repoll, 2007), se encuentran dos artículos del tema de la legislación de medios. El primero, escrito por Alma Rosa Alva de la Selva, en donde se abordan las principales aportaciones de la iniciativa ciudadana presentada al Senado de la República en diciembre de 2002; y el segundo, redactado por Gabriel Sosa y Rodrigo Gómez, que describe un resumen de la discusión de la reforma a la LFRT en el periodo de 2005 a 2007. El tercer libro es el de Sergio Aguayo (2009), que en uno de sus apartados aborda “El caso de la ‘Ley Televisa’ en la Suprema Corte”, en donde en once páginas describe cómo fue abordada la discusión de la acción de inconstitucionalidad⁹, en tres noticieros: *Hechos* de TV azteca, *El Noticiero con Joaquín López Dóriga* de Televisa y *Once Noticias* de Canal 11, de acuerdo a las variables de objetividad y oportunidad.

⁷ En mayo de 2008, se tuvo conocimiento de que un texto sobre el tema, coordinado por Alma Rosa Alva de la Selva y Raúl Trejo Delarbre, se encontraba en prensa.

⁸ El texto señala “Después del decretazo y de un tiempo para reponerse de la sorpresa, de nuevo se vuelve a la mesa de negociaciones para continuar consensuando las reformas a la *Ley Federal de Radio y Televisión*” (Hernández, 2007: 72). Pero en realidad son las organizaciones de la sociedad civil que participan en la mesa alterna quienes recuperan los trabajos y los continúan, sin el aval de los integrantes de la mesa oficial. Continúa el texto “se logra una propuesta que es llevada a la Cámara y rechazada”, aquí, además de no señalar a qué Cámara (se lleva al Senado) no es verdad que se rechaza, pues se presenta en el Pleno por Javier Corral y Raymundo Cárdenas y luego se traba por casi tres años. De hecho, cuando se presenta la iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados, el dictamen del Senado se abandona, pero nunca se presenta ni mucho menos se rechaza. Después señala: “Un Diputado del PRI, Miguel Lucero Palma hace enmiendas y somete una versión a la Cámara el 22 de noviembre de 2005, que a nadie realmente convenció y que afortunadamente tampoco pasó en la Cámara”. Este es quizás el error más grave en este pequeño texto, pues la iniciativa que presenta Lucero Palma junto con Javier Orozco se aprueba el 1 de diciembre de ese año por unanimidad, lo que da origen a la Ley Televisa. El texto, además señala a Javier Corral y a Felipe Vicencio como diputados, cuando eran senadores.

⁹ Aunque en el texto se señala controversia constitucional (página 48), cuando se trató de una acción de inconstitucionalidad.

En cuanto a la prensa escrita, ésta no sólo fue un medio de información, sino que también fungió como un contrapeso a la radio y a la televisión, en el sentido de brindar información más plural acerca del proceso. La opinión de personajes académicos, así como de políticos y funcionarios del rubro, fueron publicados principalmente en los diarios de circulación nacional: *El Universal*, *La Jornada* y *Reforma*, así como en los de circulación local: *Mural*, *El Informador*, y *Público*.

Las revistas que le dieron un seguimiento completo a la temática, fueron la *Revista Etcétera*, la revista *Zócalo*, y en menor medida la revista *Proceso*, en donde fueron publicados artículos y ensayos tanto de académicos como de políticos. Por otro lado, en la página web de Javier Corral Jurado (www.javiercorral.org), primero como senador y después como académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)¹⁰, se ha especializado en la temática, aglutinando artículos, ensayos, notas hemerográficas, y archivos de audio y video, sobre el proceso y las consecuencias del mismo, lo que facilitó la tarea de búsqueda y recolección de información en gran medida.

La información testimonial fue planeada en tres etapas. Aunque ésta no es una investigación etnográfica, la entrevista fue una herramienta fundamental. En la primera etapa el objetivo fue aproximarse a la concepción del actor sobre el proceso en sí. En la segunda etapa, se procedió a indagar sobre las cuestiones, tanto en el transcurso en la Cámara de Diputados como en el Senado, que no habían sido explícitas en el seguimiento que hacían los medios impresos de comunicación. En esta etapa resaltó la coyuntura del proceso electoral federal del año 2006, y cómo éste influyó de una u otra manera, para que tanto los diputados como los senadores

¹⁰ La AMEDI es una organización civil especializada en la temática de derecho a la información y comunicación. En el contexto de la reforma a la LFRT y a la LFT, ha propugnado por una democratización de los medios. Así mismo, pretende ser el espacio académico e intelectual para el debate sobre este tema.

decidieran su postura y la tendencia de su voto. Finalmente, en la tercera etapa, se completó la información en los huecos que subyacen a lo largo de todo el proceso.

Debido a que la investigación gira en torno a una reforma en materia federal, la mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en la Ciudad de México, sede de los poderes federales; de las organizaciones sociales que han intervenido; de los académicos que han participado; y de los principales grupos de radio y televisión involucrados (tanto públicos como privados). No sólo los concesionarios y permisionarios de las radios y televisoras comunitarias, educativas y culturales que se opusieron al contenido de la minuta, sino que también hubo emisoras comerciales que no estuvieron de acuerdo con la reforma.

Los actores entrevistados fueron los siguientes: Los senadores (en ese momento) Javier Corral Jurado (PAN), Felipe Vicencio (PAN) y Dulce María Sauri (PRI); Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Beatriz Solís Leere, académica de la UAM, Alma Rosa Alva de la Selva, catedrática de la UNAM; Aleida Calleja, representante jurídica de la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias (AMARC); Andrea Zambrana, Secretaria de Estudio y Cuenta del Ministro Salvador Aguirre Anguiano; y el Senador Santiago Creel Miranda.

Además de los artículos y ensayos publicados por académicos en diversos medios impresos, fue conveniente revisar la discusión sobre el tema en el ámbito de los gremios universitarios o instituciones que aglutinan a los investigadores o profesionales, principalmente del área de las ciencias de la comunicación y el derecho. De la amplia gama de estas asociaciones que operan en el país, se decidió conocer la postura sobre la reforma y el proceso en general, en tres de ellas.

Las dos primeras están inmersas en el ámbito de las ciencias de la comunicación: la AMIC¹¹, y el CONEICC¹². Y la tercera, que está más ligada al derecho, ésta es la AMEDI.

En el campo de la comunicación, autores como Enrique Sánchez Ruiz aseveran que en México, así como en Latinoamérica, los estudios en ésta área han sido realizados en un gran porcentaje sobre el dominio de los medios de difusión masivos, sus orígenes, su relación con el poder, y su influencia social (Sánchez, 2005). Desde la perspectiva de la línea de investigación de las metodologías y teorías, Raúl Fuentes Navarro señala que un interés particular en este asunto es el análisis sociológico que se realiza desde dentro del mismo campo académico de la comunicación, y la influencia que logra. Sobre todo, cita diversos trabajos elaborados por él mismo, en donde aborda esta problemática del campo académico y el conocimiento analítico que se tiene sobre éste (Fuentes, 2005). La esencia de este tipo de estudios radica precisamente en el tipo de investigaciones que se deben llevar a cabo desde la comunicación y el valor y uso para la sociedad que se genere con éstas; esto es, se supone una utilización crítica de los elementos teóricos, metodológicos y epistemológicos en el contexto local, nacional o regional.

Son indiscutibles las aportaciones académicas, teóricas y metodológicas que diversos profesores investigadores han dado al campo de los estudios de la comunicación en México, por otra parte,

¹¹ De acuerdo con los principales objetivos, desde su fundación en 1979, la AMIC discute problemas comunicacionales y analiza los enfoques teóricos en este campo en conferencias y seminarios. Resalta que se afirma que “A lo largo de su trayectoria ha mantenido vinculación con organizaciones sociales diversas, y una presencia constante en el debate público sobre la reglamentación del derecho a la información (...)” (AMIC, 2006). De los múltiples objetos de estudio emanados desde la comunicación, la AMIC los ha agrupado en las siguientes líneas de investigación: Comunicación política, comunicación y educación, comunicación y estudios socioculturales, comunicación y género, comunicación y jóvenes, comunicación organizacional, comunicación intercultural, discurso y semiótica, economía política, estudios de recepción, estudios sobre medios, estudios sobre periodismo, historia de la comunicación, metodología y teorías, nuevas tecnologías y sistemas de información, políticas de comunicación, y sociedad civil y participación ciudadana.

¹² El CONEICC es una asociación civil que agrupa desde 1976 a las instituciones y los individuos dedicados al desarrollo académico de los estudios sobre la comunicación en México.

se ha reconocido por estos mismos académicos, que un gran porcentaje de esas investigaciones se han realizado desde una sola perspectiva, y se ha dejado de lado la multidisciplinariedad. Enrique Sánchez Ruiz es uno de los académicos que ha tenido que hacer uso de esta herramienta, y en sus investigaciones sobre la comunicación y su relación con la democracia, ha tenido que utilizar conceptos políticos, sociológicos y hasta antropológicos (Sánchez, 2005).

Por ejemplo, en el texto *Medios de comunicación y democracia*, Sánchez Ruiz justifica el interés del análisis sobre la democracia en términos de la comunicación, y hace especial énfasis en el carácter personal que, en especial en las ciencias sociales, envuelve al investigador con su objeto de estudio. El autor hace referencia también, que al definir conceptos como el de democracia, más que aducir datos de la experiencia o casos existentes, se alude a aspectos utópicos, por lo que el autor considera que debe haber un adecuado equilibrio entre la teoría, evidencia empírica y una postura ética apropiada. Sánchez Ruiz escudriña el concepto de democracia, desde su acepción histórica, hasta las reflexiones modernas sobre el mismo. Es aquí donde da pie para introducir la relación entre democracia y los procesos de comunicación y de información, con lo que a su vez se llega a la concepción de democracia deliberativa.

Por otro lado, como señaló la académica Margarita Puente Munguía, en su participación en el XVIII Encuentro Nacional de la AMIC, realizado en Morelia, Michoacán en junio de 2006, todo estudio de comunicación conlleva desde aspectos sociopolíticos, hasta de psicología social; pero esta situación no es tomada en cuenta en los planes de estudio de las carreras de comunicación, donde omiten materias como el derecho, o en su caso, en las licenciaturas en ciencias jurídicas, no se llevan materias de comunicación. El resultado: muchos abogados no conocen, ni les importa, la legislación en comunicación, ni muchos comunicólogos se sienten atraídos por el

derecho, por lo que tampoco aprecian, en este caso, la legislación en materia de radio y televisión.

Lo sorprendente no es la afirmación de la académica, sino el haber observado, en ese Encuentro, que no sólo los estudiantes carecen de ese instrumento multidisciplinario, sino que esta situación parece también estar presente en un gran porcentaje de investigadores pertenecientes a la AMIC. Si bien la mayoría de los investigadores y asistentes a ese encuentro comentaban en los pasillos sobre lo preocupante que era la aprobación de la *Ley Televisa*, tal inquietud se manifestó escasamente en las ponencias presentadas¹³, aunque si se dedicó una mesa plenaria a este tema (la cual tuvo poca concurrencia), en donde participaron Raúl Trejo, Alma Rosa Alva de la Selva, Beatriz Solís, Javier Esteinou, y el entonces senador Felipe Vicencio Álvarez.

En cuanto a las cuatro ponencias, en sólo una se incluye argumentación teórica. El autor José Cisneros Espinosa,¹⁴ analizó este fenómeno desde la perspectiva conceptual de *bloque histórico* de Antonio Gramsci, para explicar lo acontecido en la discusión de las reformas a la LFRT y LFT. Donde utilizó conceptos como legalidad, legitimidad, bloque histórico, hegemonía, clase dirigente, sociedad política, clases subalternas y sociedad civil.

En el resto de las ponencias se hizo referencia a la radio; al Consejo Ciudadano de la Comunicación, como órgano regulador; y a la conversión tecnológica. El trabajo presentado por Lenin Martell¹⁵ emprendió un análisis de las razones históricas que llevaron a la aprobación de la

¹³ En el Encuentro AMIC 2006, se presentaron 130 ponencias. En la mesa de Estudios sobre medios, se presentaron cuatro ponencias dedicadas al tema de la reforma a la LFRT y a la LFT, que porcentualmente sólo fueron el 3%.

¹⁴ Profesor investigador de la Universidad de las Américas, Cholula, Puebla, Coordinador de la maestría en comunicación pública de esa Universidad.

¹⁵ Profesor investigador de la Facultad de Ciencias políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vicepresidente de la AMIC 2005-2007.

llama *Ley Televisa*, y cómo afecta a la radio no comercial. Javier Esteinou¹⁶ habló de la necesidad de un órgano regulador para vigilar la observancia de la ley, señalando así mismo las posiciones a favor y en contra que se postularon y difundieron en la discusión pública en el Poder Legislativo, especialmente en el Senado de la República, durante los años del 2003 al 2005. Gabriel Sosa¹⁷ explicó la cuestión de la convergencia tecnológica y la necesidad de la aprobación de la reforma en su término, por parte de Televisa.

Aunque un gran porcentaje de las líneas de investigación que tiene la AMIC requieren una visión multidisciplinaria, el matiz unidimensional en la que parecía estar siendo analizado el fenómeno (la participación de consejo ciudadano, los orígenes históricos o la convergencia tecnológica), es de suma importancia, pero no pareció haber una investigación tendiente al análisis de la reforma en sus aspectos políticos y democráticos. El Encuentro se llevó a cabo tan sólo dos meses después de la aprobación de la reforma, y puede entenderse que los trabajos aceptados para su discusión se entregaron algunos meses antes, pero también es cierto que el fenómeno no surgió el 22 de noviembre de 2005, sino tres años antes.

En el XIX Encuentro de la AMIC, realizado en el mes mayo de 2007 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, sorpresivamente ninguna ponencia abordó las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Solamente Javier Corral, en su calidad de presidente de AMEDI, abordó aspectos relacionados con la acción de inconstitucionalidad presentada un año atrás ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El XX Encuentro, que se celebró en el mes de mayo de 2008, se enmarcó en un contexto diferente al de la edición anterior, pues desde mediados de 2007 el Senado de la República había

¹⁶ Profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

¹⁷ Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

conformado un Grupo Plural para una nueva reforma de medios electrónicos, lo que de nuevo, a partir de febrero de 2008, había suscitado diversas reacciones en torno a los actores del proceso (ver capítulo 6). En este Encuentro se presentaron tres ponencias relacionadas a la legislación en radio y televisión, tres sobre televisión pública, tres a la radio comunitaria, dos más a la radio pública, y una a la indigenista, así como otras tres a la sociedad civil.

Por su parte, la AMEDI realizó en el mes de noviembre de 2006, el Séptimo Congreso Nacional de Derecho a la Información, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El primer día se dedicó al régimen jurídico de la radio, televisión y telecomunicaciones. Participaron en las diversas mesas organizadas, investigadores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, del Tecnológico de Monterrey, y ex funcionarios de la *Comisión Federal de Telecomunicaciones* (COFETEL). Participaron también la diputada federal Rocío Morgan (Secretaria Técnica de la Comisión de RTC de la LX Legislatura), así como Javier Corral y Felipe Vicencio.

En el mes de septiembre de 2007, la AMEDI junto con la Universidad Autónoma Metropolitana y la Fundación Konrad Adenauer, llevaron a cabo el diplomado sobre fundamentos jurídicos de la comunicación, en cuyos siete módulos se abordaron los temas de: Fundamentos constitucionales de la comunicación social; disposiciones reguladoras de la comunicación; régimen de concesiones de un servicio público; la política gubernamental en materia de comunicación social; la transparencia y el acceso a la información en la administración pública; nociones generales de derecho comparado; y los procesos y experiencias para la transformación del marco jurídico de la comunicación en México.

El CONEICC realizó su XIV Encuentro Nacional los días 17 y 18 de octubre de 2007, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Pero aún cuando habían transcurrido cuatro meses desde que la SCJN había invalidado los artículos pilares de la *Ley Televisa*, no se presentó ninguna

ponencia, excepto la mía (Democracia deliberativa y poderes fácticos: la discusión de la Reforma a la LFRT). Otras temáticas que se abordaron en torno a la relación medios de comunicación, Estado y democracia, fueron presentadas por Javier Esteinou Madrid (Los medios de información electrónicos y la formación del Estado Mediático en México) y Armando Zavaris Vidaña (La televisión Pública en México y su papel en el ejercicio democrático).

Sobre las entrevistas, se puede afirmar que, en medida considerable, la información en torno al fenómeno de estudio es empírica, por lo tanto sujeta a las fuentes testimoniales. En general tanto políticos como académicos accedieron a emitir su testimonio sobre este proceso, pero no se pudo realizar una entrevista por ningún medio a dos actores importantes en este proceso: el primero, César Raúl Ojeda (PRD), Senador de la República en la LIX Legislatura. Y en segundo lugar a Ernesto Velásquez, director de TV UNAM y presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México durante el proceso de la reforma a la LFRT.

Lo anterior constituye una desventaja cuando se analiza un fenómeno tan contemporáneo, que además de los testimonios de sus propios actores, sólo cuenta con un seguimiento periodístico, y con muy poco análisis y debate académico, como se ha descrito. Por esta razón, la información de segunda mano, o manejada a través de la prensa no puede cumplir a cabalidad los objetivos académicos de esta investigación, y por ello mismo también, surgieron diversas dudas que sólo a través de los testimonios pudieron haber sido despejadas.

El proceso de discusión de la Reforma a la LFRT y a LFT terminó en junio de 2007 con el fallo de la SCJN. Sin embargo, continuaron otros procesos legislativos no solamente relacionados con esta materia, sino con la libertad de expresión, la democracia y los poderes fácticos. Tales como el debate de la reforma electoral y de la reforma energética. Finalmente, esta investigación se cerró la segunda semana del mes de febrero de 2009, aunque no hubo una razón metodológica

para puntualizar la fecha, sino que prácticamente mientras la investigación se encontraba en revisión por parte de los lectores, asuntos de relevancia sobre la temática fueron surgiendo. El siguiente capítulo describe los antecedentes de la industria de la radio y la televisión, su legislación, así como los esbozos de las primeras participaciones de los grupos de la sociedad civil y la gestación del poder fáctico, principalmente de Televisa.

Capítulo 2

Antecedentes

El rubro de la historia de radio y la televisión en nuestro país es quizás uno de los campos más explotados en la investigación de la comunicación en México. Autores como Fátima Fernández (1982, 2007) Fernando Mejía Barquera (1989), Cristina Romo (1990), Florence Toussaint (1998), Sánchez Ruiz (2005 y 2007), Francisco Hernández Lomelí (2007) y, entre muchos autores más, han descrito en diversos textos no sólo la evolución de estas tecnologías, sino los mecanismos de fusión y estrategias para el crecimiento del sector, así como la explicación de las causas por las que llegaron a adquirir el poder que hoy tienen. Aunque no es el objetivo de este capítulo profundizar en la historia de la radio y la televisión en nuestro país, sí es importante, para los fines de esta investigación, reseñar los puntos más destacables de estas industrias.

Los orígenes de la radiodifusión en México

De acuerdo con Patricia Ortega, el gobierno posrevolucionario de los años 20 no contaba con los medios económicos necesarios para desarrollarla, “así que buscó mantener el control jurídico y administrativo e impulsar sobre todo la participación del capital privado, otorgando las concesiones de la radiodifusión a los particulares para su explotación comercial” (Ortega, 2006: 114). Cristina Romo señala que cuando se inició formalmente la radiodifusión en 1921, no había una clara consciencia del uso y los objetivos de las emisoras, la venta de los aparatos había sido la motivación para que Raúl Azcárraga estableciera la CYL, primera radiodifusora autorizada

formalmente, “conceptos como ‘emisión cultural’, ‘educación’, ‘radio estatal’ no estaban en la mente de los pioneros; en el cuadrante sólo se podía encontrar la información, las transmisiones de música y las charlas informales” (Romo, 1990: 13). Mejía Barquera (1989) señala que el presidente Álvaro Obregón impulsó un sistema de radiodifusión mixto, esto es, mantener un bloque de radiodifusoras a cargo del Estado, cuyo objetivo sería presentar servicios noticiosos, información meteorológica y propaganda oficial; mientras que las radiodifusoras privadas presentarían noticias y conciertos y podrían obtener recursos con la comercialización de anuncios. De acuerdo con este autor, el primer permiso para otorgar una estación comercial se dio en 1923.

En mayo de ese año, la Liga Central Mexicana de Radio (LCMR) entregó al Presidente de la República un proyecto de reglamento para regir el funcionamiento de las estaciones de radio, en donde las emisoras se clasificaban de la siguiente manera: “a) estaciones del gobierno, que se dedicarían a ‘servicios oficiales’; b) estaciones comerciales, que estarían destinadas a transmitir ‘mensajes privados mediante remuneración’; c) estaciones de servicio público, que transmitirían ‘especialmente programas educativos y de entretenimiento general incluyendo toda clase de información de interés público; d) estaciones de aficionados, manejadas por personas que se dedican al estudio, experimentación e investigación de la radio.” (Mejía, 1989: 36)

El mes de junio, el gobierno implantó un impuesto de doce pesos al año para los propietarios de aparatos receptores, a lo cual la LCMR se opuso, “sin embargo, a pesar de ser muy criticado, el impuesto no fue derogado durante el gobierno de Obregón y el Presidente se encargó de responder a la LCMR las causas de esa negativa. En su respuesta, Obregón anunciaba a los

radiodifusores que había pedido informes a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y encontraba totalmente justificado el impuesto” (Mejía, 1989: 37).¹⁸

La Ley de Comunicaciones eléctricas de 1926

El 23 de diciembre de 1925 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para facultar al Ejecutivo Federal, Plutarco Elías Calles, para que fuese éste quien expidiera la *Ley de Radiocomunicación* en la República¹⁹. El decreto apareció publicado en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el 2 de febrero de 1926. De acuerdo con Rosalía Velázquez, el Presidente decretó la ley el 24 de abril de ese mismo año, con un cambio en el nombre, al denominarla *Ley de Comunicaciones Eléctricas*, la cual constó de 92 artículos. Los más importantes de esa legislación contenían lo siguiente:

El Artículo 2 en que se establece que todas las comunicaciones eléctricas dependen de la Federación. El 7° que dice que corresponde a la Federación el cumplimiento de las obligaciones que la concesión y las disposiciones federales impongan al concesionario, declaración de caducidad de la concesión, revocación de permisos, expropiación por causa de utilidad pública, especificar las contribuciones o impuestos sobre las instalaciones, sus dependencias y capitales empleados en ellas y toda cuestión de carácter administrativo que se relacione con las instalaciones, su servicio o explotación.

¹⁸ El autor no menciona cuándo y quién deroga este impuesto.

¹⁹ "Ciudadanos secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso Federal.- Presentes. "Por acuerdo del ciudadano presidente de la República y para los efectos constitucionales correspondientes, me permito enviar a ustedes adjunto iniciativa de ley, con el fin de que se faculte al Ejecutivo de la Nación para expedir la Ley de Radio comunicación en la República. "Reitero a ustedes mi distinguida consideración. "Sufragio Efectivo. No Reección. - México, D. F., 21 de diciembre de 1925.- P. A. del secretario, el oficial mayor, G. Vásquez Vela." Diario de los Debates, Cámara de Diputados, 23 de diciembre de 1925.

El artículo 10 en que se otorga a la Federación el derecho de clausurar las estaciones en caso de guerra internacional o alteraciones del orden público. El Artículo 11 donde se especifica que sólo los mexicanos podrán ser operadores de comunicaciones eléctricas y el 15 que encarga a la Secretaría de Comunicaciones el determinar la clasificación de las instalaciones inalámbricas, los servicios a que estarán destinados, las longitudes de onda que deberán usar, los lugares en que se deben ubicar, las condiciones técnicas de los aparatos, las cuotas que causarán las diferentes estaciones y el horario en que deben de operar.

El Artículo 25 donde se dice que las concesiones para establecer instalaciones de comunicaciones eléctricas sólo se otorgarán a mexicanos o a sociedades constituidas conforme a las Leyes Mexicanas. El Artículo 26, que trata un punto interesante, el de que ninguna concesión se otorgará en condiciones de competencia para la Red Nacional o que pueda constituir un monopolio en favor del concesionario.

El Artículo 44 donde se establecen ocho causas para que se de fin a la concesión, las cuales son: Que el concesionario no principie y termine las instalaciones dentro de los plazos fijados en la concesión; que se modifique el trazo o los circuitos de las instalaciones sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones; que no pague las cuotas o que defraude al erario; que suspenda injustificadamente el servicio público; que traspase la concesión del Ejecutivo; y, por último, que se enajene la concesión o algún derecho en ella contenido o cualquier accesorio de la instalación a algún gobierno extranjero o que se admita a éste como socio.

El Capítulo VII trata exclusivamente sobre las instalaciones difusoras y de investigación científica y está constituido por cuatro artículos que van del 63 al 66. En el Artículo 63 se definen las instalaciones radiodifusoras como aquellas que se establezcan para la divulgación de conferencias, conciertos y noticias varias de interés general. En el Artículo 64 se da la definición de las estaciones y el 66 establece que la instalación y uso de aparatos receptores quedará a disposición de la Secretaría de Comunicaciones.

El Artículo más importante de este apartado es el 65 en que se aclara que las radiodifusoras deben acatar las leyes que amparan a los compositores, autores y artistas. Este aspecto no se había tomado en cuenta en el Reglamento de 1923 y fue originado por la necesidad de regular las relaciones entre los artistas y las radiodifusoras (Velásquez, 2007).

Esta *Ley de Comunicaciones Eléctricas* fue subsumida, junto con la *Ley sobre Ferrocarriles*, *Ley de Caminos y Puentes*, el *Código Postal* y *Ley de Aeronáutica Civil*, en la *Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte*, del 31 de agosto de 1931 (la que posteriormente fue reformada en 1932 y en 1940), en donde se conformó como el libro quinto, referente a las comunicaciones eléctricas.²⁰

El 18 de septiembre de 1930 se inauguró la radiodifusora XEW, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, con 5,000 watts de potencia, lo que le permitió un alcance no sólo en México, sino en otros países. Poco después, la XEW se convirtió en filial de la *National Broadcasting Corporation* (NBC). En el gobierno de Lázaro Cárdenas, el General Francisco J. Mújica, quien en ese periodo fungía como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas propuso reformar la *Ley de Vías Generales de Comunicación*, para “establecer un impuesto por el derecho de recepción (similar al que se cobra en Europa), que debían pagar los propietarios de aparatos radio-receptores. Esta disposición tenía como objetivo obtener fondos para la instalación de un número mayor de estaciones culturales” (Ortega, 2006: 118). La propuesta no prosperó.

En julio de 1948, durante el II Congreso de la *Asociación Interamericana de Radio* (AIR), se llegó al acuerdo, entre otros, de igualar la legislación sobre radiodifusión en el hemisferio, por lo que plantearon doce bases:

1. La radiodifusión debe ser considerada como una actividad de *interés público* y de finalidad cultural y recreativa.
2. La radiodifusión *no constituye un servicio público* ni puede ser monopolizada por el Estado o por otras personas de derecho público o privado.
3. Las normas que protegen la libertad de expresión en la prensa deben regir ‘con igual rigor e intensidad’ a la radiodifusión.
4. El control que el Estado ejerza sobre la radiodifusión debe limitarse a: a) evitar o sancionar la interferencia de las transmisiones; b) comprobar los casos de *abusos* de la libertad de expresión; c) verificar la efectiva utilización de las frecuencias asignadas

²⁰ Con la entrada en vigor de la *Ley Federal de Radio y Televisión* en 1960, este libro quedaría parcialmente derogado. Ver Ley General de Vías de Comunicación vigente (www.camaradediputados.gob.mx).

a los concesionarios, pudiendo cancelar las concesiones cuando no se respeten las especificaciones técnicas incluidas en las mismas.

5. La sanción por *abuso* de la libre expresión en la radiodifusión corresponderá sólo al Poder Judicial.

6. En el caso de que un concesionario viole alguna disposición de tipo administrativo o técnico que cause suspensión o cancelación de la concesión, podrá apelar al Poder Judicial.

7. La censura en las transmisiones sólo podrá establecerse en los casos graves de guerra o de ‘conmoción interna’ y no podrá subsistir después de la terminación de tales situaciones.

8. El Estado sólo podrá utilizar las frecuencias asignadas a particulares en los casos siguientes: a) para transmitir boletines oficiales, meteorológicos, relativos a la navegación marítima o aérea o similares; b) para ‘transmitir órdenes o noticia destinadas a mantener o restablecer el orden, la seguridad o la salubridad públicas amenazadas o alteradas’; c) cuando, en circunstancias excepcionales, las autoridades deseen dirigirse a la nación para tratar cuestiones de interés general o para conmemorar grandes acontecimientos nacionales.

9. Las concesiones deberán otorgarse por tiempo indeterminado.

10. Los concesionarios de las estaciones no serán responsables de los abusos de la libertad de expresión que se cometan a través de dichas estaciones. Solamente lo serán cuando dichos abusos sean cometidos ‘por personal permanente de la estación’ o cuando las personas que cometan el abuso expresen el contenido de materiales o documentos suministrados por la estación.

11. La radiodifusión deberá gozar de los mismos beneficios que en el terreno de la *legislación fiscal* se otorgan a las instituciones culturales o de utilidad pública. Asimismo, la tenencia de aparatos receptores no deberá causar impuestos, ni tampoco los causará la importación de transmisores, receptores, refacciones, piezas en general destinadas a construir, reparar y conservar las estaciones de radiodifusión.

12. En ningún caso las emisoras del Estado o de otras personas jurídicas de derecho público realizarán propaganda comercial o competirán de cualquier modo con las emisoras privadas en el campo de la publicidad. (Mejía, 1989: 126)

De acuerdo con Fernando Mejía Barquera, estas 12 bases de la AIR quedaron integradas a la LFRT de 1960.

Los inicios de la industria televisiva

En el gobierno de Miguel Alemán Valdés y antes de iniciar la televisión en México, el Presidente comisionó al escritor Salvador Novo y al ingeniero Guillermo González Camarena para investigar sobre los sistemas de televisión tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, con el objetivo de escoger el que habría de adoptarse en nuestra nación. Novo se inclinó por el sistema público de Inglaterra y González Camarena por el estadounidense. Finalmente, Miguel Alemán decidió otorgar el uso comercial de esa industria, quizás porque su tendencia era más favorable hacia la iniciativa privada. Posteriormente su hijo, Miguel Alemán Velasco, sería accionista principal en Televisa²¹. Por otro lado, Francisco Hernández señaló, en un primer momento, que “la posibilidad de poder elegir entre el modelo estadounidense o británico fue, al parecer, tan sólo como un propósito de legitimación” (Hernández, 2007: 83).

²¹ Años después de que el Presidente Miguel Alemán Valdés le otorgara la concesión a Emilio Azcárraga Vidaurreta para operar el Canal 2, en la nómina de accionistas de Televisa figuró el nombre de Miguel Alemán Velasco (*La Jornada*, 27 de noviembre de 1999). Según su propio testimonio, el licenciado Beteta le vendió sus acciones del canal 4 de Telesistema Mexicano, ahí emprendió la realización de filmaciones y cosas de cine. la participación de sus acciones aumentaron hasta ser uno de los principales socios de Televisa e incluso, dar pie a que se formara la Industria de la Radio y la Televisión. cuando se le invitó a ser candidato a gobernador de Veracruz, “pensé que no era justo ni honesto tener una empresa de telecomunicaciones tan poderosa; además de que conocía los deseos de Emilio Azcárraga (Milmo) sobre quién debería dirigir la empresa a su muerte. Así que (en 1990) mi hijo y yo vendimos nuestras acciones”. (<http://www.quien.com/quien/2007/142/los-75-anos-de-migule-aleman/>).

El pago por la venta de sus acciones a Miguel Alemán como a Rómulo O’Farrill, quien también renunció al Consejo de Administración, redundó en una fuerte deuda para el consorcio, que se vio obligado a colocar a la venta pública, vía la Bolsa de Valores, un paquete accionario equivalente a 20% de su capital social, con el fin de captar recursos frescos provenientes de nuevas fuentes de financiamiento, para pagar deudas y desarrollar proyectos. Así, la oferta de acciones de TELEvisa se realizó en las bolsas de valores de México y Nueva York en diciembre de 1991. (<http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc83/expansion.html>), por lo que todo el control de Televisa quedó en manos de Emilio Azcárraga Milmo.

En entrevista en enero de 2007 (www.javiercorral.org, 1 de febrero de 2007), Miguel Alemán señaló que su interés fundamental era “producir y vender contenidos”, así como participar en la adquisición de Satélites Mexicanos (Satmex), cuya subasta fue cancelada posteriormente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así mismo, regresó a los negocios en 2005 con su compañía de aviación Interjet, que compete con Volaris, propiedad de Televisa.

Así, en la década de los 50 empiezan a operar las estaciones de televisión en México: el canal 4 (XHTV), señal concesionada a Rómulo O’Farrill, comienza transmisiones el 27 de julio de 1950. El canal 2 (XEW) de Emilio Azcárraga Vidaurreta hace su primera transmisión el 21 de marzo de 1951. Finalmente el canal 5 (XHGC) inicia el 10 de mayo de 1952. Casi tres años después, el 25 de marzo de 1955, los tres canales se fusionan en una sola empresa, denominada Telesistema Mexicano. Finalmente, en 1958 se otorgó el permiso de operación al Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que inició sus transmisiones en marzo de 1959.

La Ley Federal de Radio y Televisión de 1960

En la década de los 50 hay un mayor desarrollo de la televisión, por lo que es necesario adecuar la legislación. De acuerdo con los diarios de debate de la Cámara de Diputados, el entonces legislador federal Juan José Osorio Palacios, integrante de la XLII Legislatura, presentó, el 30 de noviembre de 1954, una iniciativa para crear la *Ley Federal de Radiodifusión*. Ese proyecto se quedó congelado en las Comisiones Unidas de Industria de la Radio y Televisión y de Vías Generales de Comunicación. Dos legislaturas después, en la XLIV, Juan José Osorio repitió como diputado y solicitó ante el pleno de la Cámara el día 6 y posteriormente el día 11 de noviembre de 1958, que se llevara a cabo el estudio y dictamen de la iniciativa que había presentado cuatro años atrás.

El 10 de noviembre de 1959, los diputados Moisés Ochoa Campos, Esperanza Téllez Oropeza, Roberto Gavaldón Leyva, Arturo Llorente González, Jesús Ortega Calderón, Antonio Lomelí Garduño, Rafael Espinosa Flores, Antonio Castro Leal, Juan José Osorio Palacios presentaron

ante el pleno la iniciativa de *Ley Federal de Radio y Televisión*. A ésta se adhirieron los diputados José Luis Martínez Rodríguez y Rubén Marín y Kall. El 3 de diciembre de ese mismo año se presentó a primera lectura el dictamen de la Segunda Comisión de Gobernación sobre el proyecto de *Ley de Radio y Televisión*. El 7 de diciembre se dio la segunda lectura. En esta sesión, se dispensó la lectura del articulado, se discutió y aprobó en lo general, aunque diversos artículos fueron apartados para su discusión particular.

Durante los días 8 y 9 de diciembre se discutió sobre los artículos apartados, pero el debate fue más por cuestión de forma que de fondo, aunque dicha discusión se enmarcó en un sentido nacionalista²². Finalmente, el dictamen es aprobado por unanimidad de los 89 legisladores presentes. La minuta se envió al Senado para sus respectivos efectos constitucionales, donde se recibió en la sesión del 15 de diciembre de 1959, turnándose a las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Segunda Sección de Estudios Legislativos. El 24 de diciembre se presentó el dictamen de primera lectura y el día 26 se realizó la segunda lectura y la discusión, en donde fueron modificados diversos artículos²³, reduciendo el dictamen de 131 a 105 artículos, por lo que la minuta se regresó a la Cámara de Diputados, donde se retornó a comisiones el día 28 de diciembre y se aprobó sin discusión por unanimidad de los presentes (123 votos) el día 31. Posteriormente, se publicó en el DOF el 19 de enero de 1960.

Antonio Castro Leal, quien fue diputado federal miembro de la *Comisión Dictaminadora* de la LFRT, señaló en un artículo, nueve años después, que los legisladores se habían sentido traicionados por el Senado, pues éste había reformado, en la minuta, algunos de los puntos que se consideraban importantes, tales como el tiempo máximo total diario para anuncios, en donde los

²² Ver Diario de los debates, Cámara de Diputados, 8 y 9 de diciembre de 1959.

²³ Ver Diario de Debates Senado de la República, 26 de diciembre de 1959, páginas 20-32.

diputados habían establecido un tiempo total fijo, mientras el Senado había cambiado la redacción a “la propaganda comercial deberá mantener un prudente equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación” (Castro, 1969: 29).

Otro punto fue que los diputados habían exigido que durante una hora diaria se encadenaran todas las estaciones de radio y televisión, para un servicio público del gobierno, sin embargo, el Senado agregó la frase “la hora podrá ser continua o discontinua”, por lo que se dividió en cinco minutos o menos y se repartió a lo largo del día. Un tercer punto fue que la minuta establecía el Consejo Nacional de Radio y Televisión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tenía representación de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, y Salubridad y Asistencias, así como de la industria de la radio y la televisión y los trabajadores, tenía como objetivo principal “elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones” (Castro, 1969, 29), pero a través de los años nunca operó. Aunque no lo afirmó, Castro Leal aludió que estas modificaciones en el Senado se habían hecho por influencia de las empresas de radio y televisión.

Incluso con lo anterior, en los dictámenes de comisiones de ambas cámaras prevalece el sentido nacionalista de que el Estado debe tener el dominio directo sobre el espacio radioeléctrico. Se destaca que en la página 3 de la iniciativa de ley ya se habla de libertad de expresión como responsabilidad del Estado, así como la reserva de las concesiones a los ciudadanos o sociedades mexicanas. Se puede observar también que las multas van de los 500 a los 50 mil pesos.

A partir de la entrada en vigor de la LFRT, la radiodifusión en México se divide en dos grandes bloques, concesionada y permisionada. Existe la idea de que en el primero se encuentran todas aquellas estaciones de radio y de televisión comercial, las cuales son privadas, y en el segundo bloque se encuentran las educativas, culturales, comunitarias y aquellas sin fines de lucro, aunque

esto no es así. Existen estaciones de radio, como algunas agrupadas en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que son concesionadas, así como el Canal 22 de la Ciudad de México²⁴; mientras que algunas radios comunitarias son privadas. Así mismo, de acuerdo con Cristina Romo, existe la radio universitaria, la estatal, la indigenista, la independiente y la agrupada en el IMER (Romo, 1990).

El 31 de diciembre de 1968, aparece publicada en el DOF la *Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos*, en donde se creaba un tributo del 25% para las ganancias de la industria de la radio y la televisión²⁵. Según la CIRT, esta imposición se debía al disgusto del gobierno con los medios por la difusión de la verdad sobre los acontecimientos de 1968, pero de acuerdo con Raúl Trejo tal actitud no había sido así, pues “contrasta con los numerosos testimonios que existen acerca de la parcialidad de los medios electrónicos, que callaron ante la represión al movimiento estudiantil e incluso la respaldaron” (Trejo, 2002). Tras una negociación entre concesionarios y gobierno, el gravamen se redujo al 12.5%, además de que éste podía ser entregado en especie, esto es, tiempo aire a disposición del Estado. De esta manera, el 27 de junio de 1969, Díaz Ordaz emite el *Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión, el pago del impuesto que se indica, con algunas modalidades*, el cual es publicado en el DOF el 1 de julio de 1969²⁶. El 4 de abril de 1973, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se publicó el *Reglamento de la Ley Federal de*

²⁴ El concesionario es Televisión Metropolitana S. A. de C. V.

²⁵ De acuerdo con Raúl Cremoux (1982: 136), sólo los ingresos de radio y televisión en el Distrito Federal en 1975, ascendían a 438'541, 197.50 pesos.

²⁶ Raúl Cremoux señala que en 1976 el tiempo total de transmisiones de televisión en el Distrito Federal había sido de 26,581.86 horas, por lo que el tiempo disponible para el Estado fue de 3,308.95 horas, de las cuales sólo aprovecharon 156.14 horas, esto es, cerca del 5% del total que podían utilizar (Cremoux, 1982: 143).

Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica, relativo al contenido de las transmisiones en radio y televisión.

Aunque varios académicos señalan que la LFRT de 1960 era “a modo” para los radiodifusores, se puede constatar en el debate legislativo de su creación, la expedición del reglamento, así como en las posteriores reformas que se trataba de una “ley dura” para estos empresarios, cuya aplicación o no fue independiente de lo señalado en ese ordenamiento. En 1970 se reforman los artículos 17 y 19, concernientes a las concesiones. En 1974 se reforman los artículos 101, 103, 104, y se adiciona el 104 bis, los cuales tratan sobre las sanciones. En 1980 se reforman los artículos 9, fracción II, 18, 19 y 30 fracción III, que tratan sobre las competencias y las concesiones. En 1982 se adiciona la fracción II al artículo 10, así como la fracción IV al artículo 11; se adiciona el artículo 59 bis, así como un párrafo a los artículos 65 y 67, que señalan acerca de las competencias y la programación. En 1986 se adiciona el artículo 106, sobre sanciones. En el año 2000 adiciona la fracción VIII al artículo 11 y se deroga la fracción III del artículo 10, que corresponden a la jurisprudencia y a las competencias.

La televisión después de la aprobación de la LFRT

Hacia finales de la década de los 60 surgió un nuevo canal privado, el 13, que le fue concesionado a Francisco Aguirre. Sin embargo, éste no pudo competir contra Telesistema Mexicano, y el Gobierno Federal tomó control de él en el año de 1972. Por estas fechas, se fortaleció la empresa Televisión Independiente de México (TIM), del Grupo Monterrey y dueña del canal 8 de México, el cual sí representó una competencia a Telesistema Mexicano. De igual

manera, en 1972 se creó la Televisión Rural de México (TRM) “con lo que se conformaron las primeras estructuras para el desarrollo de la televisión regional y el antecedente de lo que más tarde llegó a ser la red nacional de televisión del Estado mexicano” (Ortega: 123). En 1973 se emitió el reglamento de la LFRT. En este mismo año, después del consenso entre los magnates de la televisión y con el beneplácito del mismo gobierno de Echeverría, ambas empresas se fusionaron para dar origen así a la empresa Televisión Vía Satélite SA, o mejor conocida como Televisa. El mecanismo que los empresarios utilizaron para convencer al Presidente de la República, fue la presentación de la llamada *fórmula mexicana*. De acuerdo con Francisco Hernández, ésta consistía en que cada canal tendría una programación específica para los diversos públicos, así el Canal 2 se dedicaría a la información y las clases medias; Canal 4 a las clases populares de la ciudad de México; Canal 5 transmitiría programación infantil y series extranjeras; Canal 8 sería una ventana de la televisión del interior del país; y el canal 13, del gobierno, a la divulgación de la cultura.

A partir de la década de los 70 se fue ampliando la cobertura de canal 13 en el país, lo que culminaría en 1983 con la apertura del sistema estatal de televisión Imevisión, al cual se incorporó la red de estaciones de TRM; ésta cedió parte de las instalaciones y del equipo a los gobiernos de los estados. “Durante el sexenio lopezportillista los televidentes mexicanos pudieron apreciar claramente en la pantalla dos perspectivas diferentes y aun opuestas, más que sobre los acontecimientos cotidianos domésticos, sobre algunos internacionales, en especial sobre lo que estaba ocurriendo en los países centroamericanos y del caribe” (Hernández, 2007: 44-45). Bajo la coordinación de Imevisión, señala Hernández, quedaron integradas las estaciones repetidoras, unidades de producción y redes de televisión pertenecientes al Poder Ejecutivo.

A partir de 1979, diversas comunidades indígenas fueron dotadas de radiodifusoras²⁷ a cargo del Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con la finalidad original de establecer medios de comunicación en sus respectivos idiomas.

En el mes de abril de 1982, inicia transmisiones el Canal 22, aunque con alcance limitado al Valle de México, este fue auspiciado por varios años por TRM. En 1985 se creó la Red Nacional de Canal 7, la cual se formó las 99 repetidoras de lo que había sido TRM” (Ortega, 2006: 141). De esta manera, la red gubernamental contaba con 147 repetidoras: 48 de canal 13 y 99 de canal 7. Para 1988 esta red nacional representaba una cobertura mayor a la de la televisión privada, sin embargo, en 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari comenzó su privatización, la cual se concretó en 1993. En este proceso participaron cuatro empresas privadas: La corporación de medios de comunicación (Medcom), GeoMultimedia, Radiotelevisora del Centro S.A. de C.V., y Grupo Cosmovisión. La ganadora fue Grupo Radiotelevisora del Centro, de la familia Salinas Pliego, la cual pagó el equivalente a 645 millones de dólares (de ese año), propuesta 30% arriba de la del siguiente mejor postor. Con la venta de Imevisión el Estado prácticamente se deshacía de sus canales de televisión.

En 1994 se creó la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales, que aglutinó a la mayoría de los sistemas de medios regionales, pertenecientes a los gobiernos de los estados y o universidades públicas. El 1 de noviembre de 2005 ésta se reestructura para dar origen a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, fortaleciendo el objetivo de la mejora continua de la radio y la televisión públicas, a través del

²⁷ Ver anexo 1.

establecimiento de vínculos de cooperación entre sus miembros e instituciones afines tanto nacionales como internacionales.²⁸

En el año 2000 se creó el Canal del Congreso “como órgano del Poder Legislativo para difundir ampliamente las actividades legislativas y parlamentarias de las cámaras de Diputados y Senadores y como un medio para coadyuvar a la información, discusión y análisis de los hechos de la realidad nacional relacionados con la labor legislativa del Congreso” (*Diario Oficial de la Federación*, 2005: 18 de mayo).

El 29 de mayo de 2006 fue inaugurado el Canal Judicial, a través del cual se transmiten las sesiones del pleno de Ministros de la SCJN, sesiones del Tribunal Electoral, audiencias relevantes, el Noticiero Judicial, el Resumen Semanal, reportajes, Mesas de opinión y Barra Universitaria, todos estos con especialidad en el rubro jurídico. De todos los medios, el Canal del Congreso y el Canal Judicial están restringidos, en estos momentos, a la televisión de paga²⁹.

A partir del 28 de mayo de 2007, entró al aire la señal comercial del canal 28 (el cuál sólo se puede sintonizar en el Valle de México), de la empresa Cadena Tres. Originalmente esta frecuencia (XHRAE-TV, Canal 28) le había sido concesionada a Raúl Aréchiga Espinoza, quien además de ser radiodifusor también es el dueño de la aerolínea Aerocalifornia, pero por problemas en esta empresa, que llevaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a suspenderla el 2 de abril de 2006³⁰, Aréchiga Espinoza tuvo que negociar la venta del canal 28 con Olegario Vázquez Raña dueño de Grupo Imagen, que controla el periódico *Excélsior* y una

²⁸ <http://www.lared.org.mx>

²⁹ Se entiende por televisión de paga, aquellos sistemas de cable, satelital, u otro medio de transmisión de imágenes, que cobra por la prestación de este servicio, el cual sólo puede ser recibido por el suscriptor.

³⁰ Aerocalifornia reinició operaciones el 26 de junio de 2006, pero volvió a ser suspendida el 23 de julio por un adeudo de 259 millones de pesos por concepto de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano.

red de radio. De acuerdo con Gabriel Sosa, la operación de traspaso se tasó en 126 millones de dólares³¹.

Finalmente, el día 29 de abril de 2008, la Presidencia de la República anunció la inauguración de su propio canal a través de Internet y por televisión de paga, aunque en 2008 sólo se transmitió un programa de noticias de treinta minutos, en horario de siete de la mañana de lunes a viernes, a través de la página web de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx), del canal 412 de Cablevisión y del portal *YouTube* (www.youtube.com).

La participación de los ciudadanos y la conformación de la sociedad civil

En el capítulo anterior se discutió el concepto teórico de sociedad civil. En el nivel empírico este suele confundirse con el de organización no gubernamental, lo cual es una característica de la sociedad civil, pero no la engloba totalmente, esto es, toda sociedad civil es una organización no gubernamental, pero no toda organización no gubernamental se puede concebir como sociedad civil. Esta aclaración es importante en el sentido de no confundir a ambos tipos de actores, ya que al concepto que se quiere llegar es a aquel que en donde la característica principal de estos grupos no es que sean asociaciones de ciudadanos, sino que además puedan discutir asuntos públicos y llevar sus propuestas a la agenda pública.

En 1980 el gobierno del presidente José López Portillo lanzó una convocatoria a los ciudadanos para que participaran en las llamadas *audiencias públicas* sobre el derecho a la información (Ávila, 2002). Dichas *audiencias* tuvieron el objetivo de crear la ley reglamentaria del artículo 6°

³¹ Sosa, Gabriel “Cadena 3: revelaciones a dos años” en Columna “Telecom. Y Medios”, Diario *El Universal*, 24 de junio de 2008.

Constitucional, que había sido adicionado en diciembre de 1977, con la frase: “El derecho a la información será garantizada por el Estado”. De acuerdo con Ávila, casi la mitad de las ponencias exponía la obligación del Estado a proporcionar información plural a la sociedad, y de garantizar la gestión de los ciudadanos a la producción de la información. Otro bloque de propuestas fue la de conformar una política de comunicación explícita y que articulase los diferentes organismos estatales en una estructura nacional, así como el establecimiento de normas que asegurasen su eficacia. Un último bloque apelaba al reconocimiento de la necesidad de limitar a los monopolios en los medios y la dependencia informativa de las agencias informativas (Ávila, 2002:35).

Paralelamente se comenzó a discutir en el Congreso de la Unión, la manera de reglamentar la reforma al artículo 6 Constitucional y la estructura de los medios de comunicación, y se trabajó el tema de las bases estratégicas para la construcción del sistema nacional de comunicación social. Se le entregaron al Presidente la investigación del trabajo compilado en treinta tomos que contenían más de 270 propuestas: De estos tomos, tres correspondían al diagnóstico de los medios audiovisuales. Derivado de éste se presentó una propuesta de actualización en un formato de ley marco de todos los medios de más de cuatrocientos artículos.

De acuerdo con Beatriz Solís Leere³², la propuesta se dividía en dos vertientes. La primera: Políticas de comunicación, que era una serie de medidas administrativas que el Estado debía de asumir para ser congruente con la propuesta legislativa; y segunda, la promoción y estimulación de formas de organización y comunicación social. También se propuso la recomposición plural del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CNRT), que ya se contempla en la LFRT de 1960; y la inclusión del tema de los medios de comunicación en los libros de texto gratuito, con el

³² Diplomado sobre fundamentos jurídicos de la Comunicación, UAM-AMEDI-Fundación Konrad Adenauer, Módulo 7, 29 de marzo, 4 y 12 de abril de 2008, Torre Azul, México, D.F.

objetivo de formar a la sociedad receptora; así como la creación de Centros de Comunicación Popular, antecedentes de las radios comunitarias.

Lo más interesante de esta propuesta era el Anteproyecto de *Ley General de Comunicación Social*, que de acuerdo con el Profesor Jorge Meléndez Preciado³³, ésta había sido redactada por un grupo plural en donde participó Miguel Ángel Granados Chapa, Froylán López Narváez, Fátima Fernández, José Carreño Carlón, Gustavo Esteva y el propio Jorge Meléndez, entre otros. El documento había sido encargado por el entonces diputado por el Partido Comunista Mexicano, Gilberto Rincón Gallardo. En esta iniciativa se creaban una serie de institutos, antecedentes del IMER, del de la Televisión (IMEVISIÓN), y del de Cinematografía (IMCINE). De la misma manera, se proponía la creación el Comité Coordinador de las Actividades de Comunicación del Gobierno Federal, la Comisión Intersecretarial para coordinar las acciones informativas de la Administración Pública Federal, el Consejo Nacional de Comunicación Social y la Procuraduría Federal de Comunicación Social. Este anteproyecto contenía también un capítulo concerniente al acceso a la información gubernamental, antecedente de la ley que hoy se encuentra en vigencia sobre la materia. También se señalaba al fonograma y videograma, los medios de telecomunicaciones, y sobre la participación popular.

Tanto el proyecto de ley como el diagnóstico nunca se conocieron públicamente porque el 26 de septiembre de 1981 apareció en la revista *Proceso* un artículo titulado “Anteproyecto de ley que propone control, formas y metas de la comunicación. Participación popular e intervención estatal en los medios”, lo que provocó como reacción la publicación de 481 artículos en 17 periódicos, encabezados por *El Universal*, en un lapso de tres meses, calificando el proyecto como intento

³³ Panel Las Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, XV Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, Facultad de Estudios Superiores de la UNAM (FES-UNAM) Aragón, 9 de mayo de 2008.

fascista, totalitario, comunista y “ley mordaza”. Solís Leere señala al respecto que “lo único que se conocía sobre el anteproyecto eran las siete páginas del artículo de Proceso, al cual sólo le llegó un tomo de los 30, el de la propuesta legal, sacado totalmente de contexto. Finalmente, Luis Javier Solana, entonces Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, declararía que ese proyecto no existía”.

En el siguiente sexenio, el presidente Miguel de la Madrid planteó, en su Plan de Gobierno, el compromiso a hacer realidad el derecho a la información, por lo que era necesario expedir la *Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional*, por lo que en 1983 se convocó a los Foros de Consulta Popular en Materia de Comunicación Social, que se realizaron en diez ciudades del país, en donde se presentaron más de setecientas ponencias, con lo que se publicó una colección de trece libros con los diferentes temas en este rubro. Aunque finalmente el gobierno no expide la Ley Reglamentaria, crea el Imer, el Imvisión, el Imcine y se le otorgan más funciones a la Dirección General de RTC.

De acuerdo con Beatriz Solís, antes de 1985, las discusiones de las cuestiones públicas fuera de los círculos políticos, se reducían a los espacios académicos. A partir de los sismos de ese año, que afectaron gravemente a una gran extensión de la Ciudad de México, se fortalecieron tanto la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales. El desastre natural ocasionó que la ciudadanía se organizara por su cuenta para poder prestar auxilio a los perjudicados. Esta organización independiente rebasó por mucho la acción gubernamental y los esquemas corporativos existentes en esa época. Las condiciones que ocasionaron el sismo propiciaron una mayor organización y movilización de aquellos grupos dedicados al auxilio y a la caridad (organizaciones no gubernamentales). Esta situación también llevó a los ciudadanos a reflexionar que tenían la capacidad para asociarse fuera del sistema corporativo (sindicatos, organizaciones

obreras, de comerciantes, rurales, etc.), para así convertirse en otras voces de interlocución con el Estado. Sin embargo, en los siguientes 10 años no habría ninguna convocatoria en la materia para los grupos de la sociedad civil, incluso tampoco hubo discusión alguna para adecuar la LFRT, salvo la adición del artículo 106, respecto a las infracciones, que se hizo en 1986. El tema sobre la comunicación volvería al Estado en 1995.

La Ley Federal de Telecomunicaciones

El 24 de abril de 1995 el Senado de la República recibió una iniciativa, del entonces presidente Ernesto Zedillo, para crear la *Ley Federal de Telecomunicaciones*. En sus siete páginas de exposición de motivos, el Ejecutivo Federal destaca que “El crecimiento económico no puede concebirse sin un adecuado desarrollo en la infraestructura. Parte fundamental de ésta reside en las telecomunicaciones, las cuales requieren del concurso de los sectores público, social y privado para su crecimiento y expansión.” Así mismo, siguiendo la tradición de la LFRT en materia de control de espacio radioeléctrico y de concesiones, el documento plasma el compromiso que “de conformidad con el precepto constitucional, el Estado mantendrá, en todo momento el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales a signadas al país” y que “las concesiones y permisos sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La participación de la inversión extranjera se determinará de conformidad con lo previsto por la ley de la materia, pero en ningún caso podrá ser superior al 49 por ciento.” (Cámara de Senadores, 1995).

La propuesta presidencial contenía 74 artículos divididos en nueve capítulos: I. Disposiciones generales, II. Del espectro radioeléctrico, III. Concesiones y permisos, IV. De la operación de los servicios de telecomunicaciones, V. De las tarifas, VI. Del registro de telecomunicaciones, VII. De la requisa, VIII. De la verificación e información, y IX. Infracciones y sanciones, en donde las penas económicas van de los 2 mil a los 100 mil días de salario mínimo. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

Dos días después, en la sesión de pleno, se presentó el dictamen de las comisiones unidas y se dispensó la segunda lectura. Se dio lugar a un debate muy corto ya que la iniciativa del Presidente estaba contenida de forma íntegra, y al parecer lo importante era aprobarla de forma rápida. De esta discusión surgieron sólo dos propuestas: la primera, hecha por el senador Israel Soberanis Nogueda, para adicionar un segundo párrafo al artículo 66, la cual fue aprobada.

La segunda propuesta fue realizada por el senador Emilio Goicoechea Luna y consistía en solicitar al titular del Poder Ejecutivo que se reformara el Artículo 2º del Acuerdo de creación del Comité Consultivo para la apertura de los Servicios de Telefonía Básica, para que un Senador formara parte de ese Comité. Así mismo, que en la integración del órgano que señalaba el Artículo Décimo primero Transitorio de la LFT, esto es, la COFETEL, se integrara también un miembro de la Cámara de Senadores. Pero al parecer los legisladores no tenían en mente una adición de tal magnitud, ya que una representación del senado en esas instancias tal vez hubiera cambiado su operación. Aunque la propuesta no fue incluida en el documento final, tampoco se rechazó por completo, pues se envió a la Comisión, aunque ahí nunca prosperó.

Después de aprobada, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, en donde se recibió el día 27 de abril. El documento se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y el

dictamen de primera lectura fue presentado al Pleno hasta la sesión del 17 de mayo. En la sesión del día siguiente, se efectúa la segunda lectura, y aunque hay una discusión mayor, los diputados no modifican de fondo la minuta, la cual es aprobada con 336 votos a favor y 39 en contra, pertenecientes al PRD, que en voz de su coordinador presenta un voto particular. Finalmente, pasa al Ejecutivo Federal para los debidos efectos constitucionales, siendo publicada en el DOF en día 7 de junio de 1995.

El Proyecto de la *Ley de Comunicación Social* de 1995

El 15 de mayo de 1995 se dio a conocer a la opinión pública, el documento denominado *Agenda para la discusión de la Reforma Política del Estado*. “El tema relativo al régimen de comunicación social fue considerado desde un principio como uno de los grandes capítulos de la misma” (Gutiérrez, 2005: 19). De acuerdo con Roberto Gutiérrez López, el objetivo general de la reforma era actualizar el marco legal e institucional del Estado mexicano y sustentar su viabilidad práctica. Esto permitiría alcanzar acuerdos entre los diversos actores políticos sociales y económicos involucrados en el diseño de nuevas reglas para su propia convivencia.

De esta manera, en la LVI Legislatura se crea una Comisión Especial de Comunicación Social, la cual no era para dictaminar, sino para cumplir la tarea específica de comenzar una consulta y redactar una iniciativa de ley para reglamentar el Artículo Sexto Constitucional. Esta comisión queda constituida por los tres partidos mayoritarios y los diputados que la encabezaron fueron Natividad González Parás (PRI), María Teresa Gómez Mont (PAN), y Ana Lilia Cepeda (PRD). Se convoca nuevamente a consultas públicas del 8 de junio al 11 de julio de 1995, a través de

diez foros regionales y más de un centenar de reuniones con los sectores involucrados, donde se presentan más de 2,500 propuestas, de las cuales resaltan las siguientes:

- La consolidación de la responsabilidad del Estado hacia los públicos, medios y comunicadores.
- La garantía del derecho a la información de forma equitativa para el conjunto de la sociedad.
- El derecho de réplica en todos los medios (existe actualmente sólo para los medios impresos)
- Responsabilidad de los medios a corroborar la información. En caso de un error, permitir en las mismas condiciones de tiempo y horario, que los afectados hagan valer su derecho de réplica
- Dotar a la televisión pública de instrumentos legales que le permitan la obtención de financiamiento.
- Promover el federalismo, propiciando la efectiva regionalización y municipalización de la radio y la televisión.
- La regulación a las nuevas tecnologías.
- El desarrollo de la radio y la televisión de cobertura limitada o comunitaria en el medio urbano y rural, con el apoyo de instituciones educativas y organizaciones sociales.
- Reforzar y fomentar la radio y la televisión indígenas en su propia lengua y de acuerdo a sus intereses.

En cuanto a las concesiones se propuso:

- Establecer una adecuada duración de las concesiones de radio y televisión y uso de satélites.
- Establecer criterios claros para el otorgamiento de concesiones y permisos de radio y televisión.
- Especificar en el Plan Nacional de Desarrollo una distribución equitativa y racional de las concesiones.
- Facultar a Poder Legislativo para otorgar, revocar o sancionar concesiones.

En cuanto a los tiempos fiscales y legales:

- Reestructurar y reglamentar el uso y distribución de los 30 minutos para uso diario del Estado (tiempo legal).

- Pago en efectivo del 12.5%, así mismo, descentralizado y aprovechado mediante convenio en horarios preferenciales.
- Utilizar el 12.5% no sólo para campañas gubernamentales o partidos políticos, sino también por organizaciones civiles.

De las propuestas emanadas de las mesas de trabajo sobre el derecho a la información, se redactó el anteproyecto de la *Ley Federal de Comunicación Social* y el 22 de abril de 1997 se presentó la iniciativa por los diputados del PRD, PAN, PT y miembros de la Comisión Especial de Comunicación Social, ante el Pleno de la Cámara federal. Así mismo, presentaron una iniciativa para reforma algunos artículos de la LFRT. Aún cuando la Comisión sólo tenía como objetivo realizar una propuesta en materia de comunicación social, debido al número de ponencias sobre la temática de radio y televisión, decidieron incluir una iniciativa en esta materia. La fracción parlamentaria del PRI, aún con mayoría, se deslindó de los trabajos, argumentando que el contenido de las iniciativas vulneraba la libertad de expresión. A pesar de que las iniciativas fueron remitidas a las Comisiones de RTC, Gobernación y Puntos Constitucionales, los trabajos se paralizaron.

Entre los principales objetivos de la iniciativa destacaban:

- Fomentar el ejercicio pleno, plural y participativo del derecho a la información y las libertades de expresión e información para contribuir a la conformación de una opinión pública informada;
- Promover que toda persona, organización y grupo social sean sujetos activos, participantes y con efectivo y libre acceso a la información;
- Proteger y garantizar los derechos de las personas a su dignidad, libertad y vida privada;
- Establecer las normas de las relaciones entre el Estado, los medios y la sociedad, reconociendo y preservando sus libertades y derechos.

Durante la LVI y LVII Legislaturas se desarrollaron algunos intentos por avanzar en la reglamentación del artículo sexto constitucional, a partir de la premisa de que las transformaciones sociales y políticas del país tenía como uno de sus puntos de referencia principales la demanda ciudadana de información confiable, así como el nuevo y cada vez más importante papel de los medios de comunicación social.

En junio de 1998 los miembros de la Comisión de RTC acordaron revisar las iniciativas turnadas en la legislatura anterior (LVI), pero a partir del 30 de septiembre, se desató una campaña mediática contra la iniciativa de *Ley Federal de Comunicación Social*, la cual fue denominada en los medios como “Ley mordaza”. “El embate contra la iniciativa se instrumentó a través de un número considerable de periódicos (*El Universal, La Afición, Excélsior, Ovaciones, La Prensa, El Herald de México, unomásuno* y *El Sol de México*) y fue apoyado por los concesionarios de la radio y la televisión. No puede obviarse el hecho de que en 1999 comenzarían los preparativos para la siguiente contienda electoral y que por lo tanto ninguna fuerza arriesgaría una parte importante de su capital político yendo en contra de un flujo de opinión adverso, por más que este hubiera sido artificial y falazmente inducido.” (Gutiérrez, 2005: 66-69).

El entonces presidente Ernesto Zedillo, al inaugurar la LIII Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 22 de octubre de 1997, “dijo que estaba enterado de la existencia de proyectos para regular la libertad de expresión y el derecho a la información. Aunque aseguró estar dispuesto a escuchar las propuestas que surgieran de la sociedad y fueran formuladas por el Poder Legislativo, reiteró que en su posición personal no compartía la tesis de quienes suponían que con regulaciones a la libertad de expresión y de prensa, se favorecía la democracia o la armonía social”. (Ortega, 2006: 168)

De esta manera, el presidente Zedillo respaldaba explícitamente la postura de los medios, tanto escritos como electrónicos, cuestión que sería más que evidente un año después, ya que del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1998 los medios iniciaron una fuerte campaña de *desinformación* sobre la iniciativa de ley, denominándola “Ley mordaza”. De nuevo, Zedillo al participar el 9 de octubre de 1998 en la LX Semana Nacional de la Radio y la Televisión, foro organizado por la CIRT, aunque no mencionó explícitamente la *Ley de Comunicación Social*, en su discurso hizo alusión a que su gobierno siempre defendería la libertad de expresión.³⁴ Aún así, se avanzó en el dictamen, el cual cambió el nombre de la iniciativa a *Ley de Garantías a la Libertad de Expresión y Derecho a la Información*. Cuando se iba a someter a votación en la Comisión de RTC, el PRI negó apoyarla.

Aquí cabría resaltar que Ernesto Zedillo, en su calidad de Presidente de la República, apoyó el viejo esquema de la alianza entre el gobierno y Televisa. Según Raúl Trejo Delarbre, después de la designación de Emilio Azcárraga Jean como nuevo presidente de Televisa, éste junto con Guillermo y José Antonio Cañedo White y Miguel Alemán Velasco se entrevistaron con Zedillo, el 4 de marzo de 1997, quien resolvió que su única interlocución con Televisa sería a través del Azcárraga “pero también decidió que el hijo de *El Tigre* tuviera todo el control de ese consorcio”. En estos momentos, la familia Azcárraga tenía el 62% de las acciones, Alejandro Burillo el 14%, Miguel Alemán Velasco el 14% y los Cañedo White el 10%. “Sin el respaldo de Zedillo, hubiera sido altamente posible que Azcárraga Jean no se mantuviera al Frente de Televisa”.³⁵

Raúl Trejo, señala en uno de sus artículos, que Zedillo prefería tratar con Azcárraga, quien en ese entonces tenía 29 años, que con otros directivos de Televisa. El presidente logró con esto

³⁴ <http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/oct98/09oct98.html>

³⁵ Raúl Trejo, *Revista Zócalo*, número 97, marzo de 2008.

convertirse en el *mandamás* de Televisa en ese año. Al finalizar esa reunión, Zedillo pidió a los accionistas que acudieran con Emilio Chuayffet, entonces Secretario de Gobernación, quien “les comunicó a los hermanos Cañedo que debían retirarse de Televisa como los viejos políticos”³⁶.

³⁶ <http://mediocracia.wordpress.com/2008/03/20/azcarraga-jean-protégido-por-zedillo/>

La reforma a la *Ley Federal de Cinematografía* en 1998: un acercamiento claro al ejercicio de democracia deliberativa.

En 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari, envió una iniciativa de reforma a *Ley Federal de Cinematografía*, cuyo propósito simplemente era acoplar la débil industria mexicana al concepto de entretenimiento del *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, pues quienes se beneficiaban con las modificaciones sólo eran las cadenas de distribución y exhibición, las cuales llevaban a la pantalla alrededor del 93% de cine estadounidense. La iniciativa del Presidente fue aprobada por los diputados por la vía rápida, o como se le llama en el argot legislativo, por *fast track*, pues de acuerdo a las críticas en prensa de esa ocasión, sólo le tomó al Pleno de la Cámara quince minutos la discusión y aprobación de la nueva *Ley Federal de Cinematografía* (LFC).

En 1995, después de tres años, los integrantes del sector de la producción cinematográfica concluyeron que la legislación no contribuía a su activación, por lo que un grupo conformado por directores, actores, escritores y estudiantes de cine, entre otros, inició una serie de acciones encaminadas a examinar las deficiencias de la industria y realizar las propuestas pertinentes para su revitalización. Este grupo se autodenominó Comunidad social cinematográfica, ya que se deslindaban de los filmes basados simplemente en el entretenimiento, mientras que pugnaban por el fortalecimiento de un cine mexicano con un carácter más educativo y cultural, así como el equiparar una película a una obra de arte.

¿Pero cual fue el mérito de la participación de la Comunidad social cinematográfica en la reforma a la LFC? Sin duda su capacidad para lograr el objetivo de cambiar esa legislación, no sin enfrentarse a diversos obstáculos. Así mismo, desde una perspectiva más teórica, este grupo logró

aplicar mecanismos de democracia deliberativa en su proceso de discusión interior. La cronología del mismo es la siguiente:

En el mes de junio de 1995 se organizaron las mesas para el foro *Defensa del Cine Nacional*. De igual manera, se llevó a cabo el denominado *Forodebates*, que concluye con la redacción del documento titulado *Cruzada Nacional en Defensa del Cine Mexicano como Patrimonio Cultural y Salvaguarda de Nuestra Identidad*. De esta forma comenzaron a realizar las acciones necesarias para que los diputados federales escucharan sus propuestas para reformar la ley, las cuales se centraba en tres aspectos: el financiamiento estatal al cine mexicano, la prohibición al doblaje y los tiempos para exhibición de películas nacionales.

La comunidad social cinematográfica fungió como un grupo de la sociedad civil, aunque que si bien agrupaba integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), cooperativas, actores, y todos estos grupos forman parte, junto con los agremiados de la empresarial Canacine, a la industria fílmica nacional, no participaron en un sentido corporativista, sino debatiendo las ideas e impulsando su discusión para llevarlas a la agenda pública, con el objetivo de lograr una ley de cinematografía distinta a la que se encontraba vigente, de acuerdo a los intereses de cada uno y a su concepción de industria cinematográfica. En este sentido, este grupo pertenecía a ese tercer campo, distinto de la economía y el Estado, que es la sociedad civil (Arato, 2001:37).

En las elecciones federales de 1997, María Rojo, conocida actriz del cine mexicano, fue electa diputada federal plurinominal por el PRD, así mismo, sería nombrada como presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ante esta coyuntura, la Comunidad social cinematográfica tuvo la oportunidad de presentar su iniciativa de reforma, a través de la figura de

Rojo. El proyecto se denominó Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica (ILIC), pues pretendía erigirse en un ordenamiento diferente al que se encontraba vigente.

La iniciativa se presentó en el mes de abril de 1998. Después de un intenso cabildeo por parte de la Comunidad social cinematográfica y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el dictamen fue presentado el 11 de diciembre de 1998. Dos días después, el 13 de diciembre, fue aprobado por unanimidad de los 478 diputados presentes en la sesión, para luego ser publicada en el DOF el 5 de enero de 1999.

Capítulo 3

La Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos, los siete grupos de trabajo y la discusión en la sociedad civil.

Cronograma de la primera etapa

Marzo de 2001

- Se instala la “Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación en Medios Electrónicos”. En un segundo nivel de discusión, se integran siete grupos temáticos de trabajo. Paralelamente, las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo reuniones para exponer sus ideas y enviarlas a las mesas de trabajo.

Octubre de 2002

- El 10 de octubre se publica en la edición vespertina del DOF, el nuevo reglamento de la LFRT y el *Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica*, que entre otras cosas contempla la abolición del 12.5% de impuesto de tiempo aire a disposición del Estado.
- Los representantes de los grupos de la sociedad civil deciden retomar y continuar los trabajos de la discusión de la Mesa para la reforma.

Diciembre de 2002

- 4 de diciembre, los representantes de los grupos de la sociedad civil entregan a los senadores Javier Corral, Raymundo Cárdenas y Genaro Borrego el proyecto de iniciativa.
- 12 de diciembre, Javier Corral y Raymundo Cárdenas presentan la iniciativa ante el Pleno, con el aval de 53 senadores más.

La mesa de diálogo para la reforma integral de la Legislación de los medios electrónicos

El triunfo electoral del opositor Vicente Fox, el 2 de julio del año 2000, fue un *parteaguas* en la forma de actuar de los medios electrónicos, bajo la siguiente perspectiva: antes de este año Televisa era como cualquier otro grupo empresarial de esa envergadura, con una alta capacidad de negociación y presión, pero no un poder fáctico (lo cual sucede en el transcurso del sexenio foxista). Varias cuestiones sustentan esta afirmación. La primera, de acuerdo con el testimonio de Felipe Vicencio Álvarez³⁷:

“Cuando inició el gobierno del presidente Vicente Fox, quien tenía un buen proyecto de reforma para los medios de comunicación, era la misma CIRT. Ellos habían elaborado una iniciativa que si bien es cierto que no era tan avanzada como la de la sociedad civil, sí era mucho mejor de lo que hoy está vigente. Se la presentaron al Presidente porque presentían que Fox iba contra ellos, ya que entendían la ley necesitaba ponerse al día, que el ámbito de la radio y la televisión era un desastre, que tenía (Fox) un compromiso con el pueblo de México, por lo que creyeron que era mejor que la misma CIRT le pidiera al Presidente que tomara en cuenta algunas cuestiones de importancia para los agremiados de esa cámara empresarial.

Sin embargo, el Gobierno de Fox no capitalizó ese momento, y la CIRT que estaba agachada, con el brazo en la cabeza porque iba a llegar el golpe de la Presidencia, vieron que jamás llegó, se fueron levantando y *envalentonado* de vuelta, y pensaron *este tipo no va a mover nada*. Esto significa que los propios empresarios sí saben hasta dónde y con quién ejercer presión. En este sentido, de haber tenido un Presidente con más voluntad, y un Congreso responsable, los medios serían otros”³⁸.

³⁷ Senador por Jalisco en la LIX Legislatura.

³⁸ Un ex presidente de la CIRT le confió directamente a Felipe Vicencio, que “era un proyecto que asumía la necesidad de ceder en algunos aspectos, pues entendían que comenzaba un nuevo régimen y que había que ajustarse a los nuevos tiempos. Su sorpresa no fue menor ni desagradable cuando el nuevo presidente (Fox), con el impulso de su ambiciosa esposa, les hizo entender que la relación seguiría en los mismos términos del pasado, y que ahora además tendrían ventajas adicionales. En esas circunstancias, el nuevo proyecto que ellos mismos habían elaborado

Para el Gobierno Federal era muy importante dar señales de que verdaderamente se trataba de un gobierno de cambio, sin embargo, el propio Presidente realizó acciones diferentes, incluso contrarias a las que llevó a cabo el Secretario de Gobernación en esta materia, por lo que la preocupación por la situación de los medios de comunicación pudo ser aparente, o bien esa preocupación se diluyó muy rápido al entender que aliarse a los medios traería beneficios mutuos. De cualquier manera, dos meses después de haber llegado el poder, durante la toma de posesión del nuevo director de Radio, Televisión y Cinematografía, el 7 de febrero de 2001, Santiago Creel Miranda anunció la instalación del CNRT, que aunque vigente, no operaba, así como reinstalar al comité asesor social, el cual había sido creado en un decreto de 1986, para trabajar en conjunto con el Consejo Nacional. En este comité estaba representada la UNAM, el IPN, El Colegio Nacional, los consumidores, entre otros, pero nunca había entrado en funciones.

Esta propuesta no tuvo éxito. La siguiente acción del Secretario de Gobernación fue la instalación, el 5 de marzo, de la *Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la legislación de los Medios Electrónicos*. La ceremonia se realizó “con gran discreción y sin la presencia del presidente Fox” (Ávila, 2002: 71). En respuesta, la CIRT instaló su propio Consejo Regulador el 6 de marzo de ese mismo año, con el aval del presidente Fox y siendo éste testigo presencial en la ceremonia. Estas acciones demostraban que el tema de los medios sería una de las grandes diferencias entre Creel y Fox³⁹.

Los participantes de la *Mesa de diálogo* fueron los representantes de las siguientes instituciones:

1. Secretaría de Gobernación.

seguramente se convirtió en pequeños trozos de papel en un cesto y nadie sabrá qué contenía”. (Entrevista realizada a Felipe Vicencio, 27 de agosto de 2006, Guadalajara, Jalisco).

³⁹ Creel señaló que siempre tuvo un debate sobre el tema más hacia el interior del gobierno que hacia el exterior. La visión entre él y Fox fue muy diferente en los temas como *el decretazo*, canal 40 y el propio reglamento (Entrevista a Santiago Creel, Foro La Ley de Medios: ¿Esperando a Godot?, 3 de diciembre de 2008).

2. Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
3. Coordinación de Imagen y Opinión Pública de la Presidencia de la República.
4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
5. Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.
6. Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
7. Cámara Nacional de la industria de la Radio y la Televisión.
8. CONEICC.
9. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales.
10. Un representante de las Organizaciones Sociales.
11. Partido Revolucionario Institucional.
12. Partido Acción Nacional.
13. Partido de la Revolución Democrática.
14. Partido Verde Ecologista de México
15. Partido del Trabajo

El 25 de abril del 2001 se crearon los siete grupos de trabajo al interior de la Mesa (1. Principios Fundamentales, 2. Jurisdicción y Competencia, 3. Participación Social y Derechos Ciudadanos, 4. Concesiones y permisos, 5. Programación, 6. Medios del Estado, y 7. Competencia Económica). Cabe resaltar que no había representación de la sociedad civil. Sólo habían sido convocados los industriales, funcionarios gubernamentales, y legisladores (diputados y senadores) por cada partido político. A petición de algunos de estos actores, se otorgó un lugar

para otras organizaciones civiles⁴⁰, quienes nombraron a la académica Alma Rosa Alva de la Selva. Esta representación se formalizó en esta segunda sesión.

La discusión en esta temática se llevó a cabo en tres niveles, dos pertenecientes al ámbito formal, de acuerdo a la convocatoria gubernamental (los siete grupos de trabajo y la mesa general, a la que los actores de los grupos de la sociedad civil llamaron “mesa grande”), y uno en la base de las organizaciones de la sociedad civil. La dinámica de las reuniones entre las organizaciones ciudadanas, dependía de la temática y realización de las siete mesas. En este sentido había un grupo de cinco o seis representantes por temática, quienes trabajaban en una reunión cada semana, previo intercambio de materiales, que apoyaban la discusión y se encaminaba a la toma de decisiones (la cual se llevaba y defendía en la mesa).

Temas como la propuesta de ingresos para los medios públicos y el CNRT, tomaron mucho tiempo en su discusión al interior de las propias organizaciones de la sociedad civil. Mientras algunos integrantes argumentaban que el hecho de recibir recursos podría distorsionar la naturaleza y el objeto de estos medios, en el sentido de recibir dinero y vender sus producciones, otros argumentaban que no era con fin de lucro sino de financiamiento propio por lo que no había alteración de los objetivos de estos medios. En cuanto al CNRT, para algunos era un organismo al que se le estaban otorgando demasiadas facultades, mientras que otros señalaban que ese organismo debía asegurar la eliminación de la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones, además de realizar una auténtica vigilancia del interés público. A pesar de las diferencias en estos y otros temas, se podían alcanzar acuerdos que tenían el objetivo de que

⁴⁰ Ver anexo 2.

quienes asistieran a las mesas como representantes de las organizaciones ciudadanas expusieran las propuestas de manera clara y sin ambigüedades.

En general, las propuestas que se discutían entre los representantes de las organizaciones civiles, y que eran llevadas a cada una de las siete mesas, también eran conjuntadas por Alva de la Selva, para ser llevadas a la Mesa de Diálogo. De acuerdo con la experiencia de esta académica, “en esta mesa los empresarios escuchaban las propuestas pero sin poner mucha atención, además de que casi siempre los que asistían eran sus abogados, entre ellos Javier Tejado Dondé (Televisa). Se encontraba además el abogado de de TV Azteca, y del PAN, por lo que ese sector estaba sobre representado, en comparación conmigo que era la única representante de la sociedad civil”⁴¹.

Otra situación que se tenía que cuidar en la discusión entre miembros de las organizaciones civiles era que las propuestas tenían que ser contrastadas con su viabilidad política, ya que los industriales, en las mesas, descalificaban a los representantes de los grupos, poniendo en duda su acreditación y el otorgamiento de su participación en virtud de que, según ellos, a quienes representaban no eran muy visibles ni válidos frente a los empresarios, esto es, la voz de las organizaciones civiles no era válida.

En el mes de mayo de 2002 se constituyó un grupo redactor. Aunque la dinámica de las mesas comenzó con reuniones periódicas, señala Alva de la Selva, hacia el mes de junio de 2002 los trabajos comenzaron a verse entorpecidos. Las organizaciones civiles estaban al pendiente de las convocatorias, que se fueron espaciando entre una y otra, además de que en las subsecuentes reuniones no había materia suficiente para la discusión, siendo visible que algo ocurría o que había una negociación alterna.

⁴¹ Entrevista realizada a Alma Rosa Alva de la Selva, 15 de mayo de 2007, Coyoacán, México, DF

El decreto del 10 de octubre de 2002 y la iniciativa ciudadana

El 10 de octubre de 2002 se publicó en el DOF, edición vespertina, el nuevo *Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión*, así como el *Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica*. En los considerandos del nuevo reglamento se destaca que el de 1973 “ya no responde a la actual realidad política y social de nuestro país, donde el papel de los medios de comunicación es esencial para consolidar una democracia moderna”; así mismo que la adecuación del Reglamento responde a los principios de libertad de expresión, certeza jurídica y responsabilidad social. También resalta la participación “ciudadana” del Consejo Nacional de Radio y Televisión, y su función en la construcción de consensos. Efectivamente, el nuevo reglamento considera la participación de un integrante de la sociedad civil, en calidad de invitado permanente, con voz, pero sin voto⁴², y no señala los requisitos que ese integrante debe de tener, mucho menos de a qué grupos de la sociedad civil debe representar. En cuanto al decreto, de donde se toma el nombre de *decretazo*, se abroga el anterior acuerdo del 1 de julio de 1969, donde se estableció el impuesto del 12.5% de tiempo aire puesto a disposición del Estado, reduciéndolo a 1.5%.⁴³

Ante esta situación, unilateral por parte del presidente Vicente Fox, parecía estarse enviando, implícitamente, el mensaje de que el proceso de discusión ya no tenía razón de ser. Esa misma tarde había cita en la Secretaría de Gobernación, hacia donde se dirigía Alma Rosa Alva, quien

⁴² Ver artículo 47 del *Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y televisión*.

⁴³ Ver anexo 3.

escuchó la noticia por la radio y optó por dar media vuelta. De esta manera, “se nos hizo creer hasta el último minuto que la Mesa de Diálogo estaba en funciones y que los acuerdos que ahí se tomaban realmente habían sido suscritos y que tenían una formalidad”⁴⁴. Sucedió como Javier Corral ha dicho “esta es la historia de la consulta pública en México, donde se ha convocado a todos, se ha escuchado a unos cuantos y no se le ha hecho caso a nadie” (Corral, 2007).

Durante la comida de la CIRT, ese mismo 10 de octubre, el presidente Vicente Fox señaló que el nuevo reglamento respondía a la libertad de expresión, “acabó el compromiso medios-gobierno (...) el tiempo que ahora tendrán obligación de poner en manos del Estado, tiene un costo que supera con mucho a 200% de lo que antes nos entregaban” (*El Universal*, 13 de octubre de 2002). Las reacciones no se hicieron esperar, entre los días 11 y 22 de octubre, los columnistas de los diarios, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Alemán, Miguel Ángel Granados Chapa, Leo Zuckermann, Manuel Camacho Solís, Javier Corral, Elvira García, Jorge Alcocer, Raúl Cremoux, Alberto Aziz Nassif y Federico Arreola, entre otros, manifestaron sus ideas en torno a este suceso.

Felipe Calderón, en su calidad de coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, acusó a la Secretaría de Gobernación de tener una falta de comunicación con el partido, ya que no le habían informado sobre la negociación con los concesionarios para modificar el reglamento (*El Universal*, 13 de octubre de 2002). Así mismo, los diputados y senadores del PRI, PAN y PRD comenzaron a declarar que presentarían una controversia constitucional ante la SCJN, con el argumento de que el Ejecutivo no tiene facultades para eliminar impuestos, de la cual se desistieron a cambio de impulsar una reforma a la LFRT, por lo que el 16 de octubre, la Cámara

⁴⁴ Entrevista Realizada a Alma Rosa Alva de la Selva, Ibid.

de Diputados instala de manera formal la mesa de trabajo encargada de presentar propuestas de reformas a este ordenamiento (*El Universal*, 17 de octubre de 2002).

El 15 de octubre Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca, declaró a la prensa que el origen del impuesto “era repugnante” porque había sido el instrumento de censura del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz para tener de rodillas a la industria de la radio y la televisión. Además señaló: “seguimos pagando 18 minutos de impuesto extra al impuesto sobre la renta (ISR), sobre productos de trabajo, al Infonavit, el 2% de nómina, impuesto al valor agregado (...) los señores de la prensa que están tan criticones, deberían ceder una página para información oficial” (*La Jornada*, 16 de octubre de 2002).

Los grupos de la sociedad civil también expresaron su desacuerdo al *decretazo*. El 17 de octubre se publicaron en *La Jornada* dos desplegados. El primero titulado “El Ejecutivo Federal renuncia a derechos fundamentales del Estado. Por una nueva ley de radio y Televisión”, el segundo “Organizaciones civiles rechazamos el acuerdo entre Fox y la CIRT”, incluso el editorial de este medio impreso señaló “Tiempos oficiales: vergüenza y descaro”. La Secretaría de Gobernación respondió con la publicación de un desplegado, el 18 de octubre de 2002 en *El Universal*, y el 21 de octubre en *Público*, que más que informar, justificaba el nuevo reglamento y el decreto, en donde señalaban que con tales modificaciones:

- Se amplía la transparencia.
- Los referendos de concesiones no son automáticos.
- Se abre al público la información de concesionarios y permisionarios de radio y televisión.
- Se hacen públicos los criterios generales de clasificación de programas.
- Licitación pública de concesiones y permisos.
- Se da voz a la sociedad civil organizada en el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
- Se establece derecho de réplica.
- Se facilita la transmisión de programas en lengua indígena.
- Se promueve la equidad y género y los derechos de los grupos vulnerables.
- No cambia la duración de los 30 minutos de los tiempos del Estado que fija la ley.
- El nuevo reglamento permite un mejor aprovechamiento de los 30 minutos de los tiempos del Estado.

- El nuevo reglamento promueve mejores horarios para las cápsulas de cinco minutos o más.
- La ley establece el impuesto de 5% a cargo de las empresas concesionarias, el cual permanece sin cambio.
- La facultad de establecer o derogar impuestos y contribuciones federales es exclusiva del Congreso de la Unión. Lo que se abrogó fue un acuerdo presidencial que hacía posible el pago de estos impuestos en especie.
- Se dota al Estado de un instrumento para hacer valer su potestad tributaria.
- El reglamento y decreto no se oponen a la *Mesa de diálogo*.
- La expedición del reglamento y decreto no sustituyen una nueva ley en la materia, ni sustituye facultades legislativas del Congreso.
- La publicación vespertina del DOF no es extraordinaria ni irregular.

Así mismo, el desplegado presentaba la siguiente información:

Número de <i>spots</i> de 30 segundos por hora			puntos de <i>rating</i> ⁴⁵ acumulados		
Horario	antes	ahora	Horario	antes	ahora
0:00-6:00	35	0	0:00-6:00	7.7	0
6:00-20:00	22	28	6:00-24:00	58.6	161.6
20:00-23:00	0	6	Total	66.3	161.6
23:00-24:00	3	2			
Total	60	36			

⁴⁵ El *rating* indica el porcentaje de hogares o televidentes con la TV encendida en un canal, programa, día y hora específicos (o promediando minutos y fechas), en relación al total de TV Hogares o televidentes considerados. Su fórmula es:

$$\frac{\text{Peso} * X \text{ Minutos Vistos}}{\text{Universe} * X \text{ Minutos Posibles}}$$

* El peso es el índice de representatividad, es decir, es el valor que se calcula para cada hogar o individuo de la muestra, de tal modo que la suma de los pesos de todos los hogares o individuos que se están considerando, sumen el universo de estudio respectivo.

De acuerdo a la fórmula anterior, el *rating* puede interpretarse de dos maneras diferentes: Por ejemplo, un cierto programa con 30 puntos de *rating* puede significar que:

- El 30% de la audiencia posible está viendo el 100% del programa.
- O que la audiencia total (el 100%) únicamente vio el 30% del programa.

A través de los *ratings*, determinamos cuántas personas están viendo la televisión, y por adición, sabemos cuántos y quiénes ven tanto los programas, como los mensajes comerciales, así determinamos sus hábitos de exposición.

Millones de pesos se gastan anualmente en la compra de espacios publicitarios, con lo cual se asume la importancia de contar con esta información que permite a Agencias, Anunciantes y Centrales de Medios planear, evaluar y optimizar el grado de efectividad de las inversiones que realizan en este medio masivo por excelencia. En contraparte, el *rating* es utilizado también por departamentos de Marketing, Ventas, Programación e Investigación de las Cadenas de Televisión, ya que a su vez, ellos pueden desarrollar sus estrategias de venta, programación y producción, con el objeto de atraer posibles compradores de sus espacios, y conservar a aquellos que ya tienen cautivos.

En virtud de lo anterior se entiende por qué el *rating* se considera la moneda de cambio para comprar y vender espacios publicitarios, y la base también para el análisis y toma de decisiones en las industrias de la Televisión y la Publicidad. (<http://www.ibope.com.mx/hgxpp001.aspx?1,1,50,O,S,O,MNU:E;13;2:MNU>)

Por otro lado, *el decretazo* ocasionó una reactivación de la *Mesa de diálogo*. En primer lugar, los representantes de las organizaciones sociales se reúnen y deciden pronunciarse ante la instalación del CNRT. Este acto se llevó a cabo el 11 de noviembre en la Secretaría de Gobernación. Las organizaciones acudieron con una figura de cartón, que fue presentada como “Juan Ciudadano”. Alma Rosa Alva le entregó una carta al Secretario Creel, en donde expresaban su indignación por el acontecimiento, que no se reconocía a ese consejo por no integrar a miembros de la sociedad civil, y que se seguiría adelante con el proyecto.

En segundo lugar, la *Mesa de diálogo* continuó retomó las propuestas que habían sido suscritas por los integrantes de los siete grupos de discusión y se avanzó en aquellas en que no se había tenido consenso. “Una de estas diferencias señalaba que los medios en México se reconocen como de interés público, mientras que la propuesta de las organizaciones pretendía que más que de interés público, fueran de servicio público, lo cual era una diferencia cualitativa muy grande”⁴⁶. En opinión de Alva de la Selva, el proyecto fue complicado por el número de capítulos y artículos, por lo que fue necesaria la asesoría de varios abogados para que éste fuera lo más viable posible. Así se logró que la redacción del anteproyecto de iniciativa tuviera como puntos esenciales los siguientes:

1. Objetivos amplios y diversificados para la radio y la televisión, así como su función social.
2. Definición de términos propios de la actividad sobre la que se legisla.
3. La creación de un órgano regulador ciudadano al que se le asignan funciones estratégicas, con miras a evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las frecuencias; se le dan atribuciones para “distribuir” de mejor manera las frecuencias; vigila el cumplimiento de la ley en cuanto a contenidos de la programación, y administra los tiempos estatales.

⁴⁶ Entrevista realizada a Alma Rosa Alva de la Selva, Ibid.

4. Definición de las categorías de las emisoras. Se abre la categoría de explotación directa para las emisoras estatales. Se aclara lo que significa permisionaria.
5. Regulación de tal manera que ninguna empresa pueda tener más del 35% de las frecuencias en una misma localidad.
6. Establecimiento de una cuota de 20% de frecuencias para uso social (permisionarias o estatales).
7. Garantía para el trabajo de las permisionarias al autorizarlas a obtener ingresos.
8. Garantía de exhibición para producción independiente.
9. Especificación para programación para público infantil.
10. Instauración del derecho de réplica.
11. Apertura de una nueva ruta para los medios de carácter no lucrativo.
12. Creación de una figura jurídica para los medios de Estado.
13. Creación de un fondo nacional para producción.
14. Creación de un estímulo para la producción nacional.
15. Protección para la audiencia televisiva.
16. Regulación para la propaganda comercial.

Sobre el CNRT, que en opinión de Alva de la Selva era el corazón de la iniciativa, éste se concibió como un organismo ciudadano, cuya creación obedecía a la lógica de que debía ser autónomo en sus decisiones. Así mismo, Javier Esteinou lo concebía como independiente del “regateo político y de las tradicionales componendas entre gobierno y medios, a través de la participación de consejeros ciudadanos propuestos, mediante convocatoria pública abierta” (Esteinou, 2007: 6).

Por su parte, los concesionarios, sindicatos de los medios, y algunos legisladores, emitieron argumentos en contra. Esteinou menciona que de todos ellos, nueve fueron los que más

destacaron⁴⁷, en donde resalta la alusión la propuesta del Consejo como un organismo que duplicaría las funciones de la COFETEL, cuando incluso se prefería fortalecer las atribuciones de ésta. Cada una de las críticas tuvo respuesta por parte de los representantes de las organizaciones sociales. Finalmente, desaparecería la propuesta del dictamen final, y tampoco se fortalecerían las facultades de la COFETEL.

La iniciativa ciudadana en el Senado

El proyecto elaborado por los grupos de la sociedad civil no podía ser presentado directamente como una iniciativa ciudadana, pues esa figura no está contemplada en la Constitución⁴⁸, por lo que se decidió que todas las organizaciones ciudadanas involucradas suscribieran el documento y se entregó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Especial para la Reforma del Estado del Senado de la República el día 4 de diciembre de 2002, donde la hicieron suya los entonces senadores Javier Corral (quien además era el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes) y Raymundo Cárdenas, quienes la presentaron en el Pleno con el apoyo de 53 senadores más el día 12 de diciembre. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y Gobernación, las cuales conformaron una subcomisión dictaminadora, integrada por los senadores Javier Corral, Héctor Osuna y Felipe Vicencio (PAN); Mariano González, Fidel Herrera y Manuel Bartlett (PRI); Moisés Castro, Demetrio Sodi y Rutilio Escandón (PRD); y José Herrera (Convergencia). De este proyecto

⁴⁷ Ver anexo 4.

⁴⁸ De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo pueden presentar iniciativas de ley, el Presidente de la República, los Diputados y Senadores y las legislaturas de los Estados. Aunque la figura de iniciativa popular sí existe en algunas entidades como Jalisco.

destacaron las siguientes propuestas: la creación de un consejo ciudadano para regular la entrega de concesiones y la programación; se restringían al 35% máximo, las señales a los monopolios; y se destinaban un 20% de estas mismas para uso social.

La dinámica de trabajo incluye la convocatoria a audiencias, por cuyos resultados la iniciativa original comienza a sufrir modificaciones aunque no de fondo. Otra característica que se da es que la participación de los grupos de la sociedad civil ya no fue requerida. A pesar de ser éstos los creadores del anteproyecto, asimismo actores fundamentales de este proceso, los senadores no los invitaron a seguir participando.

“No nos llamaron, nosotros esperábamos que nos llamaran para tener audiencias con ellos, pero tengo entendido que integraron (los senadores) un panel de expertos, y a ellos se les pedían las opiniones sobre ese proyecto ciudadano, aunque al suscribirla los senadores, era ya una iniciativa legislativa.

Sobre ese proyecto le empezaron a hacer modificaciones, pero esa fue otra parte de ese proceso que no nos dejó muy contentos, porque considerábamos que nos iban a llamar por lo menos para decirnos qué modificaciones se habían realizado y qué trabajo legislativo faltaba por hacer, pero no nos informaron, y de repente, ya en el año 2005, cuando la iniciativa estaba en una fase de discusión avanzada, sale la iniciativa en la Cámara de Diputados y su aprobación el 1 de diciembre de ese año”⁴⁹.

Sobre la participación de los representantes o de las mismas organizaciones de la sociedad civil, como bien lo dice Olvera, no se trataba de un ente homogéneo, no sólo por la dificultad para ponerse de acuerdo como mencionó Alva de la Selva, sino porque también cada una de estas agrupaciones contaba con una agenda propia; por esta misma razón se prueba la necesidad de incorporar el concepto de grupo de interés en el de la sociedad civil:

⁴⁹ Entrevista realizada a Alma Rosa Alva de la Selva, Ibid.

“Precisamente, la falta de fuerza de la sociedad civil en este tema deriva de la diversidad de intereses, porque tenemos sectores conservadores que también son sociedad civil, como la organización *A favor de lo mejor*, cuya única preocupación era el tema de los contenidos de la radio y la televisión y no le importaba el asunto de la concentración en pocos concesionarios, o no le importaba la transparencia en el ejercicio del otorgamiento de las concesiones o permisos, sólo le interesaba que no hubiera pornografía ni violencia.

Otros traen otra agenda, otros dicen “lo que nosotros queremos es que se abra el espectro a opciones de comunicación alternativa fortaleciendo el modelo de los permisos” es decir, el modelo no lucrativo de la comunicación electrónica, y entonces el resto de la agenda también a ellos les era indiferente o muy secundario.

Todos los que respaldaron la reforma no estaban con la convicción de respaldar el cien por ciento del paquete, es decir, hay que tomar en cuenta la hora de hacer el balance, y preguntarse el por qué no se pudo llegar más lejos, o por qué no se ha podido llegar al final del proceso. A lo mejor habrá que encontrar algunas de las explicaciones en esta “volatilidad de las reivindicaciones” de la sociedad civil o esta fugacidad o parcialidad de las reivindicaciones de la sociedad civil que aparecen cuando el tema que a ellos particularmente les interesa está comprometido, pero que se repliegan cuando es otro tema, como ejemplo (sic) el cuando *A favor de lo mejor* se repliega cuando se reivindica la concentración, porque no les interesa en lo más mínimo, con ellos podemos contar cuando se trate de contenidos, pero nada más, y con otros cuando se trate de posibilitar comunicación alternativa y no les interesa lo que tenga que ver con concesiones, y así”⁵⁰.

A finales de 2003, se logró un primer borrador de predictamen. Días después, el senador Javier Corral pidió licencia para contender como candidato a gobernador del Estado de Chihuahua, por lo que Héctor Osuna es nombrado nuevo presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aunque Osuna no convoca a ninguna sesión para tratar el tema en nueve meses. Cuando regresa Corral, exige un papel más activo de la Comisión para avanzar en el dictamen.

⁵⁰ Entrevista a Alma Rosa Alva de la Selva, Ibid.

El 13 de diciembre de 2004, la Subcomisión presenta un proyecto de dictamen a las Comisiones, pero se piden otros dos meses de prórroga con el objetivo de realizar una nueva consulta. En este mismo mes, los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República, Enrique Jackson (PRI), Jorge Zermeño (PAN), Jesús Ortega (PRD) y Gloria Lavara Mejía (PVEM), se comprometieron para que el dictamen de la nueva LFRT se sometiera a discusión en el mes de febrero de 2005, fecha en que iniciaría el periodo ordinario de sesiones. El dictamen en cuestión no había sido conocido por los representantes de los grupos de la sociedad civil, aunque Alma Rosa Alva “suponía que dicho documento había retomado una gran parte de la iniciativa entregada a los senadores”⁵¹.

El compromiso de los coordinadores parlamentarios no se cumplió, aun y con la solicitud de *excitativa*⁵² que presentaron, en marzo de 2005, los senadores secretarios de las comisiones de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos: Rutilio Escandón, César Raúl Ojeda y Felipe Vicencio, respectivamente. En el mes de abril de 2005, el senador Osuna presentó una propuesta de dictamen propia, con la supuesta intención de conciliar las partes en conflicto (Romo, 2005), y resolver el desgaste de las discusiones. Sus principales características fueron:

1. Ponderaba la actividad de la radiodifusión como una industria, no como un servicio público.
2. Aparecía con frecuencia el término “procurar” en vez de garantizar.
3. Desaparecía absolutamente la creación de un órgano regulador.
4. Los tiempos del Estado eran manejados como concesión o asignación por parte de los concesionarios.

⁵¹ Entrevista a Alma Rosa Alva de la Selva, Ibid.

⁵² La *excitativa* es una solicitud formal para apresurar los trabajos legislativos que se han atrasado.

5. Se regresaba a la situación de no atender las necesidades de comunicación de las comunidades y grupos de la sociedad organizada.
6. Se quitaba el candado que ayudaría a combatir el monopolio al eliminar la indicación de que si ya se tenía más del 35% de las frecuencias de una localidad, no se podía aspirar a otra.
7. Se eliminaba la indicación sobre el 20% de las frecuencias para emisoras sociales, en cada localidad.
8. Se ampliaba la duración de las concesiones a 20 años.
9. Se abría la licitación económica como única para obtener una concesión.
10. Desaparecía el pago de derechos por uso de una concesión.
11. Desaparecían las indicaciones para los tiempos electorales y la contratación sólo a través del Instituto Federal Electoral (IFE).
12. Se eliminaba la obligación de retransmitir los canales abiertos en los de paga.
13. Desaparecía toda mención a la publicidad para las estaciones del Estado.
14. Se establecía la discrecionalidad para el derecho de réplica.

Esta propuesta fue criticada porque no sólo no tomaba en cuenta los aportes de la iniciativa ciudadana, sino que aparentemente beneficiaba a los grandes consorcios de medios, ya que los intereses de los agremiados a la CIRT eran evidentes en ese dictamen. Lo que más se destaca en el análisis de la propuesta de Osuna, es que no sólo era el beneficio de intereses empresariales sobre los de los grupos de la sociedad civil, sino que se comenzó a vislumbrar la cuestión acerca del derecho de unos cuantos sobre el derecho de la mayoría, el derecho de libertad de expresión de los medios, sobre el derecho a la información de todos, lo que tiene impacto en el tipo de democracia que vivimos, la participación de la sociedad y el Estado en general. En esta etapa, organizaciones e instituciones educativas abrieron espacios de debate, información y participación.

El paso de casi tres años no sólo significó el desgaste de la discusión, sino que también afectó a las propias empresas comerciales, pues era evidente que requerían una modificación a la LFRT para poder entrar a la convergencia tecnológica, cuestión que por la que el tiempo ya empezaba a presionarlos. De hecho, los concesionarios, habían impulsado las gestiones necesarias desde 1999 para preparar dicho cambio. Con este objetivo se creó, el 6 de julio de ese año, el Comité consultivo de tecnología digital para la radiodifusión cuyo artículo segundo señala: “contará con seis miembros; tres de ellos designados por la Secretaría y tres por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, sin perjuicio de que puedan invitarse a las sesiones del Comité a las personas o instituciones que el mismo estime necesario, en razón de sus conocimientos técnicos en materia de tecnologías de radiodifusión.”⁵³ La función de este comité sería la de realizar las recomendaciones para las normas de los sistemas digitales. Cabe resaltar que en este no está representada la sociedad civil, ni siquiera los medios permisionarios.

En segundo término se firmó el Acuerdo secretarial para reservar las bandas de frecuencias para el desarrollo de los servicios digitales. Este Acuerdo modifica el régimen de las concesiones y los permisos en los documentos, en el sentido en que la decisión que tome la SCT debe ser acatada por el concesionario o permisionario. El *estándar* tecnológico adoptado fue el de la televisión digital estadounidense, lo cual quedó oficializado el 2 de julio de 2004. Sin embargo, sin una reforma a la LFRT y a la LFT, la televisión digital no podía pasar de la etapa experimental a la comercial.

⁵³ http://www.cofetel.gob.mx/cofetel/radio_tv/doctos/diarioof3.pdf

La Convergencia tecnológica y el *triple play*

La convergencia tecnológica, como su propia palabra significa, es la unión, en este caso, de los servicios de televisión, telefonía e Internet en un solo canal de transmisión y recepción, el cual es denominado *triple play*. Necesariamente, estas señales deben ser digitales. Actualmente (febrero de 2009), diversas empresas de televisión por cable ofrecen este servicio, tales como Megacable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Cablevisión en la Zona Metropolitana del Valle de México, Multimedios, en la Zona Metropolitana de Monterrey, Telemedia en la Ciudad de Querétaro, Cablenet en la Ciudad de Toluca y Cablemas en la Ciudad de Tijuana.⁵⁴

¿Y la televisión abierta puede ofrecer estos servicios? La respuesta es sí, realizando los cambios tecnológicos para digitalizar la señal, y los jurídicos que permitan lograr lo anterior. Técnicamente, la emisión la frecuencia de una televisión análoga se propaga vía aérea a través de ondas hertzianas en un ancho de banda de 6 Megahertz (Mghz). La televisión digital (DTV) tiene las siguientes metas con respecto a la televisión análoga:

1. Imagen similar a la de una película cinematográfica de 35 mm.
2. Audio de alta calidad de 5.1 canales.
3. Maximiza la capacidad de transmisión de datos en un canal de televisión de 6 MHz.
4. Maximiza área de cobertura.
5. Interoperabilidad con computadoras tiene dos formatos.

⁵⁴ De acuerdo con Javier Corral, la cantidad de suscriptores a los sistemas de televisión de paga (Televisión por cable, Microondas (MMDS) y Vía satélite) había aumentado del año 2000 a 2007. En este sentido, Televisa tiene el 100% del control de la televisión satelital, el 35% de la fibra óptica, el 38% de los sistemas de televisión por cable y avanza para obtener las cuatro únicas plataformas para la transmisión de contenidos (discurso en el acto de creación del *Frente nacional por una nueva ley de medios*, 20 de febrero de 2008, Ciudad de México).

6. Interactividad directa con el emisor.
7. Compras en línea.
8. Teletexto.
9. Interacción con redes de datos.
10. Acceso a Internet.

La televisión digital tiene dos formatos: la televisión digital *estándar* (SDTV) y la televisión de alta definición (HDTV). La primera logra una resolución de 337,920 puntos, mientras que la segunda tiene 2'073,600 puntos. Como ventaja adicional, con la digitalización cabe la posibilidad de prestar servicios adicionales de telecomunicaciones⁵⁵. De igual manera, la radio digital tiene las siguientes ventajas, comparada con la radio convencional⁵⁶:

1. Señal sin distorsiones.
2. Gran calidad de sonido (comparable a un CD).
3. Mejor aprovechamiento del espectro radio-eléctrico.
4. Nuevos servicios multimedia interactivos, tales como texto, imágenes, mapas, juegos, etc.
5. Servicios de valor añadido (música, mapas de ruta de viaje, etc.).
6. Por medio del sistema de transmisión se pueden emitir programas específicos por barrios, ciudades o regiones.

Una de las ventajas más importantes de la digitalización es que la señal se compacta hasta en un 75%, lo que permitiría la liberación de ancho de banda en el espacio radioeléctrico, y así la

⁵⁵ Como servicios de telecomunicación, define Sosa, se entiende aquellos que se prestan a través del espectro radioeléctrico: Internet, correo electrónico, transmisión de datos para empresas, video y audio y en general todos aquellos dentro de la denominada televisión interactiva: servicios informativos en tiempo real, información de tráfico vehicular y clima, venta de productos y juegos interactivos.

⁵⁶ <http://tecnicaaudiovisual.kinoki.org/radio/dab.htm>

posibilidad de acceso de nuevos competidores, no todos necesariamente comerciales. Pero su mayor desventaja, para una gran cantidad de radiodifusores, es que la instauración de este *estándar* tecnológico conlleva a la desaparición del análogo, por lo que está proyectado desaparecerlo completamente, en lo que denominan “apagón analógico” hacia el año 2022⁵⁷.

Por todo lo anterior, se requería de ajustes jurídicos para señalar los pasos a seguir en esta transición tecnológica, las reglas para la participación de nuevos competidores y la regulación de los nuevos servicios, lo cual se convirtió en el centro de debates y discordias. Mientras que los grupos de la sociedad civil pedían un reparto equitativo de nuevas frecuencias, los grandes consorcios no solamente las querían para sí mismos, sino que además pretendían ofrecer los servicios adicionales de telecomunicaciones sin que su concesión se los permitiera y sin pagar la contraprestación económica correspondiente al Estado. Esto será descrito en el siguiente capítulo.

⁵⁷ De acuerdo con la página Web Wikipedia, en Europa los países que han completado el apagón analógico son: Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Andorra, Suecia y Suiza. En este proceso están: España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia. En Estados Unidos se había proyectado para el 17 de febrero de 2009, sin embargo, se prorrogó por seis meses más. En México está programado para el año 2022.

Capítulo 4

La segunda iniciativa de reformas y la influencia de los poderes fácticos de los medios electrónicos de comunicación

Cronograma de la segunda etapa de discusión

Noviembre de 2005

- El día 22 se presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa para reformar la LFRT y la LFT.

Diciembre de 2005

- El día primero, el Pleno de la Cámara aprueba, por unanimidad, las reformas a las citadas leyes.

Febrero de 2006

- Debido a las presiones sociales, la presidencia de la Comisión de Comunicaciones del Senado, lleva a cabo mesas de consulta.

Marzo de 2006

- El último día de este mes, en el Senado de la República, se aprueba por mayoría la minuta de la Cámara de Diputados que contiene las reformas a la LFRT y a la LFT.

Mayo de 2006

- Un grupo de 47 senadores, interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa de reforma a la LFRT y a la LFT de 2005

El día 22 de noviembre de 2005 los diputados Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del PRI y Javier Orozco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentan una iniciativa para reformar diversos artículos de la LFRT y de la LFT, la cual se turnó, por parte de la diputada presidenta María Marcela González Salas y Petricioli, a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) (Cámara de Diputados (a), 2005: 28), esto es, que ambas comisiones debían sesionar conjuntamente para analizar y votar la iniciativa.

La reunión de trabajo de las comisiones unidas de Comunicaciones y RTC, se llevó a cabo el día 29 de noviembre de 2005, con una convocatoria que se había hecho a las 21:30 horas del día anterior. Así mismo, el proyecto de dictamen fue entregado poco antes de la reunión, que comenzaría a las 11:00 horas. En este sentido, varios diputados argumentaron la falta de tiempo y la premura para discutir el texto⁵⁸, al respecto, el diputado Carlos Jiménez Macías (PRI) señaló lo siguiente:

“Me sorprende mucho la agilidad y la premura con que estamos trabajando, cuando en esta Cámara hay muchísimas leyes que no caminan (...) la lectura que damos es que estamos dando una prioridad impresionante fundamentalmente a los intereses de las empresas (...) Yo estoy sorprendido de que nunca hayamos mostrado tanto interés en la Ley de RTC (sic) que está parada en el Senado, (...) simplemente dejó constancia de que no se puede legislar de esta manera. No es una buena señal, no hablamos de madurez parlamentaria y más cuando se trata de una propuesta que acaba de entrar, cuando esta Cámara tiene cientos, no

⁵⁸ En el mismo sentido, el diputado Carlos Flores Rico reclamó el hecho de discutir este dictamen, cuando la iniciativa que él había presentado dos meses antes, para reformar el artículo 59 de la LFRT, ni siquiera estaba dictaminada. También intervino el diputado José Luis González Garza, al señalar la premura de la convocatoria, y la entrega del proyecto de dictamen.

solamente de iniciativas; cientos de puntos de acuerdos, etc., pero además minutas del Senado que no sacamos.” (Cámara de Diputados, 2005).

Tras los reclamos, se inició el debate del proyecto de dictamen. Puede apreciarse en la versión estenográfica, que a pesar de que los diputados no habían tenido el tiempo suficiente para un análisis a profundidad, trataron de privilegiar un sentido social, pero la conducción de la sesión impidió que las modificaciones propuestas fueran trascendentes. Los diputados quisieron comenzar con la reserva de artículos, pero, el Presidente los conminó a que, de acuerdo con la regla legislativa, primero se aprobara en lo general y luego se discutieran los artículos reservados.

El debate sólo resaltó la discusión de algunos artículos. Se comenzó con las propuestas del diputado Jesús González Schmal, para adicionar el artículo 9-A de la LFT, en cuanto a señalar que la COFETEL debe regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente “y de cobertura social amplia” de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México; así como la propuesta para acotar, en el artículo 9-D, que los comisionados de la COFETEL fuesen nombrados por ocho años, no renovables. Debido a la discusión, el diputado corrigió su propuesta y la cambió por una renovación de cuatro años. En contrapropuesta, el diputado Carlos Flores Rico propuso periodos de 8 años, con una renovación del mismo número de años, idea que fue apoyada el diputado Federico Doring. De estas propuestas, se votaron a favor la de Flores Rico, y la que hizo González Schmal sobre el artículo 9-A.

El artículo 79-A, señalaba que el IFE sería quien pagaría la publicidad electoral de los partidos políticos. El diputado José Julio González Garza pidió aclarar la redacción, por lo que se adicionó la frase “con cargo a sus prerrogativas”, y fue votado por unanimidad, salvo la abstención de González Schmal. En los artículos transitorios, fue el diputado Federico Doring quien propuso

que los entonces cuatro comisionados de la COFETEL no podrían ser elegibles para la conformación de la nueva Comisión.

Finalmente, y con la discusión concluida, el diputado Javier Castelo señaló que no era aceptable “que nos traigan un documento donde dice: el día 29 se sometió aquí a votación y que no se sabe si fue aprobado o no, que previamente se haya redactado así. Yo creo que debería haber más respeto a todos los diputados” (Cámara de Diputados, 2005). Pero aunque los legisladores reconocieron la premura de la discusión, y que ésta apoyaba a las empresas mediáticas, nadie propuso que se pospusiera la reunión.

El 30 de noviembre sesionó la Junta de Coordinación Política. Esta reunión de trabajo se realizó sin la presencia de su presidente, Pablo Gómez Álvarez del PRD, quien fue sustituido por el diputado Eduardo Espinoza Pérez. Tampoco estuvieron presentes los coordinadores del PAN, José González Morfín; del PVEM, Jorge Antonio Kahwagi Macari; y del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, quienes enviaron representantes. El único coordinador que asistió fue el del PRI, Emilio Chuayfett Chemor. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Partido Convergencia no asistió ni envió representante. Aún con esta situación, en dicha reunión se tomó el acuerdo de disculpar la segunda lectura del dictamen de reformas a la LFRT y a la LFT.

Al día siguiente, el 1 de diciembre de 2005, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía, presentaron ante el pleno de la Cámara el proyecto de decreto. Antes de dar paso a su discusión, la Presidencia de la Mesa Directiva leyó un comunicado procedente de la Junta de Coordinación Política, donde se solicitaba que dicho dictamen “se turne lo antes posible y se le dispense la segunda lectura” (Cámara de Diputados (b), 2005: 70).

Lo que quizás confundió a los legisladores fue que aún cuando en ese Comité los acuerdos alcanzados habían sido tomados por representantes, con excepción del PRI que sí asistió su líder de bancada, al leerse el comunicado se dijo que lo firmaban los coordinadores. Esta situación hizo creer que el dictamen estaba leído, analizado y avalado por todas las fracciones, y por ende, sólo se requería del “trámite” del voto a favor de los diputados. Al no haber oradores registrados para el debate, ya que el documento no se conocía, se abrió la votación, donde el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes (327 de diputados), el tiempo que transcurrió entre su presentación y la votación, fue de siete minutos⁵⁹. La minuta aprobada fue enviada al Senado para los efectos constitucionales procedentes.

Del dictamen aprobado por los diputados federales, resaltó que las concesiones, ya no serían otorgadas a discrecionalidad del Presidente de la República, sino que debían licitarse, en el entendido de que el mejor postor sería quien la ganase, sin importar si el participante tenía ya una o varias frecuencias. Otro punto fue la conversión tecnológica, con lo cual sólo los grandes grupos se quedarían con el mercado, mientras que concesionarios como los de la banda de Amplitud Modulada (AM) en radio, estarían en peligro de desaparecer, debido a que la digitalización conlleva costos muy altos y no se preveía en la legislación ningún mecanismo de apoyo para estos radiodifusores, por lo cual, llegado el momento, sin tecnología digital, correrían el riesgo de que se le retirase la concesión. En cuanto al Consejo Regulador, el apoyo a las radios comunitarias, así como el derecho de réplica desaparecieron en este dictamen.

Al respecto Dulce María Sauri Riacho, Senadora del PRI en la LIX Legislatura, señaló:

⁵⁹ Ver anexo 5.

“Hubo varias cosas muy curiosas. Primero el dictamen en una semana, segundo, una vez que dictaminó la comisión que firmó la mayoría, creo que todos los integrantes de la comisión, a favor, pasó a la Junta de Coordinación Política. Ésta es la que decide que asuntos se llevan al pleno y en que momento. La Junta de Coordinación también tiene facultad para que si hay una decisión unánime de sus miembros de proponer que se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión. Eso sucedió, se propuso la dispensa de la segunda lectura y su inmediata discusión y al iniciar la sesión, los diputados ni siquiera acababan de sentarse. Esas cosas se hacen cuando realmente se quiere pasar una *bola rápida*, no cuando se quiere discutir un asunto.

En el *argot* legislativo en México, se utiliza la expresión de *fast track* para hacer referencia a la rapidez con que se aprueba un dictamen. Esta premura se debe a una necesidad política que requiere el inmediato ajuste jurídico que contiene dicho dictamen. La decisión sobre este mecanismo recae en la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores parlamentarios. Al tratarse de razones políticas, lo importante es tener el consenso de todos o de la mayoría de los partidos políticos representados en la Cámara. Así, su coordinador parlamentario “indicará” el sentido en que debe votarse el dictamen. Por lo general, suele haber información sobre el tema que contiene el documento, la cual es discutida entre los legisladores, quienes avalan el consentimiento previo para votar el documento sin mayor discusión. Así mismo, la mayoría de las veces, las bancadas se reservan el derecho de posicionarse en la tribuna al respecto y dejar asentado su sentir y opinión sobre el tema en cuestión.

La expresión de *bola rápida* que utilizó Dulce María Sauri, metaforiza a un tipo de lanzamiento de pelota en el juego de *béisbol*, la cual es el tiro más veloz, cuyo objetivo es el de superar a los bateadores. Este término, no común en el *argot* legislativo, difiere del de *Fast track*, porque en éste último hay un conocimiento sobre la temática que aborda el proyecto en cuestión, y su aprobación se da en virtud de la mayoría de votos que tiene asegurado, por lo que no se requiere ninguna discusión al respecto. En cambio, el de *bola rápida* que utiliza la ex senadora, hace

referencia a un dictamen desconocido por los legisladores, situación de la cual se aprovechan sus autores o promoventes, para que con la creencia de que está avalado por los coordinadores de las fracciones parlamentarias, sea votado por todos los diputados a favor.

Después de la votación, el coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez, negó haber tenido conocimiento acerca del contenido del dictamen. Sin embargo, su representante, así como los de los demás ausentes no sólo habían tomado la decisión de disculpar la segunda lectura, sino de pedir el trámite inmediato de un proyecto que, según ellos, también desconocían. De manera circunstancial, se puede decir que lo anterior es imposible, pues tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política, como sus integrantes, deben de conocer el contenido de los documentos para poder avalarlos o rechazarlos.⁶⁰ Otro testimonio que pone en duda el desconocimiento del coordinador perredista sobre el dictamen, es el de Julio Boltvinik Kalinka, su compañero de bancada en esa legislatura. Boltvinik le señaló a Jorge Alonso que “ese día primero de diciembre, les habían entregado 47 dictámenes para su discusión y aprobación en esa sesión, por lo que se acercó a Pablo Gómez para expresarle que no se tendría el tiempo necesario para revisar cada uno de los documentos, a lo que Gómez respondió que los había leído todos, que iban en *buena línea*, por lo que había que apoyarlos” (con la votación a favor)⁶¹. En este sentido, Boltvinik confió en su Coordinador, así como muchos más debieron hacerlo, razón por la cual cuando la minuta se encontraba en discusión en el Senado, un grupo de ciento once diputados envió una misiva a los

⁶⁰ Después del “incidente parlamentario” que permitió a los diputados federales votar las reformas a la LFRT y LFT sin conocimiento, la confianza en los coordinadores parlamentarios ya no fue ciega. De acuerdo con la Diputada Federal de la LX Legislatura, Rocío Morgan, “cada vez es más difícil conseguir el apoyo incondicional de las bancadas a sus coordinaciones, se impone cada vez más la necesidad de discutir los temas al interior de las mismas y conseguir el consenso, primero del propio grupo parlamentario.” (Entrevista a la Dip. Rocío Morgan, 23 de junio de 2008, México, DF).

⁶¹ Testimonio de Jorge Alonso Sánchez, 5 de diciembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.

senadores para pedir la revisión a consciencia y profundidad, de dicho documento (ver página 146).

Sobre lo anterior, Dulce María Sauri señaló:

Nadie dijo nada, por eso no se pueden exculpar de esa situación. Los del PRD también fueron *corresponsables*, que ya sepan si la secretaria de la comisión de radio y televisión, de ese partido, creo que era la diputada Dolores Gutiérrez de Tabasco⁶², hizo el análisis que correspondía o no lo hizo, o prendió o no prendió las alertas al interior de su grupo parlamentario, pues es un asunto interno, pero hacia afuera lo que se vio es que todos los partidos, todos los diputados de todos los partidos votaron a favor. Ahora, ¿qué pueden haber ofrecido? Porque estas cosas no son accidentes. En las cámaras, cuando tratan de pasar una bola rápida así, es porque hay algo que se está buscando, lo que se dice, que se rumora, a mí no me consta, es que hubo ofrecimientos muy concretos de apoyos a los candidatos de los partidos políticos a la presidencia de la República a cambio de que sus legisladores aprobaran las reformas”⁶³

Entre los meses de enero y marzo de 2006 se abrió un intenso debate en la prensa escrita en torno a la minuta. Contrariamente a esa aparente unanimidad en la reforma, se abrieron voces a favor y en contra entre los académicos, organizaciones, los políticos y sus partidos, el Senado, Secretarías de Estado, e incluso al interior de la misma CIRT y otras cámaras empresariales. Destaca en este proceso que los diarios, nacionales y locales, se erigieron como un contrapeso a la postura de las televisoras. Ante este fenómeno que se vivía y se construía día a día, la discusión fue constreñida al intercambio y a la batalla entre notas periodísticas (diarios), y artículos en revistas

⁶² Después de terminar su periodo como legisladora, la diputada Dolores Gutiérrez, declaró que antes de que la reforma se aprobara por unanimidad el 1 de diciembre de 2005, Tejado Dondé, abogado de Televisa, les ofreció a los partidos políticos y a sus candidatos presidenciales espacios gratuitos en radio y televisión para que difundieran sus propuestas electorales. (**Autocracia Televisiva**, Jenaro Villamil, Revista *Proceso* No. 1575, Fecha: 2007-01-06)

⁶³ Entrevista a Dulce María Sauri Riancho, 17 de mayo de 2006, México, DF.

especializadas⁶⁴. Aunque en estas últimas participaron diversos académicos e investigadores, ninguna universidad se pronunció al respecto,⁶⁵ de hecho, organismos como la AMIC, entró muy tarde al debate de este proceso.

En una situación obvia, Televisa argumentaba el beneficio de la convergencia tecnológica en pro de una mejor calidad para los espectadores, aunque no se mencionaba que las nuevas reglas del juego perjudicarían a la radiodifusión educativa, cultural, comunitaria, además de la que se encuentra en la banda de AM, debido a que el texto de la ley reformada no otorgaba las herramientas jurídicas para que estos medios pudieran acceder a la convergencia tecnológica, a su sostenimiento, crecimiento y a nuevos permisos⁶⁶.

De acuerdo con Gabriel Sosa “En el ámbito tecnológico de la discusión de estas reformas, hubo dos visiones claras de cómo se concibe a las nuevas tecnología en esta sociedad de la información y del conocimiento. Una apoyada por un discurso empresarial contra una mayor regulación; y la otra con la idea de una convergencia y digitalización con una base de participación social y una democratización de los medios de comunicación” (Sosa, 2006). De acuerdo con este autor, la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones se mantuvo separada debido a las características de los servicios, aunque principalmente por su impacto social, su penetración cultural y su incidencia social. La radio abierta llega a casi 98% de la población, mientras que la televisión abierta llega al 90%. “Televisa, con una visión a largo plazo, llevó al gobierno para el

⁶⁴ Principalmente los diarios de circulación nacional: *Milenio*, *La Jornada*, *El Universal* y *Excélsior*, y los diarios locales: *Mural* y *Público*. De las revistas, destacan: *etcétera*, *Zócalo*, *Revista Mexicana de Comunicación*, y *Proceso*.

⁶⁵ Para Raúl Trejo la falta de toma de posturas de las Universidades era correcta, ya que dichas instituciones, como recintos donde se cultivan todas las ideas del pensamiento, no podían tomar una posición. En cambio, la postura de los académicos sí se debía expresar libremente.

⁶⁶ En el capítulo 5 se revisará la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por los 47 Senadores de la LIX Legislatura, y cómo algunos de estos aspectos fueron resueltos por ese tribunal.

establecimiento de un modelo jurídico acorde a sus necesidades de expansión con los acuerdos señalados al final del capítulo anterior.

Antes de la reforma, si Televisa hubiese querido prestar servicios adicionales de telecomunicación, debía participar en la licitación de frecuencias, además de realizar el correspondiente pago de impuestos. Sumado a esto, el proceso de licitación era complejo, lento y requería el aval de la Comisión Federal de Competencia (COFECO). Con la reforma, Televisa satisfacía el asunto de la convergencia digital, ya que en el nuevo artículo 28 de la LFRT se abría la posibilidad de que los concesionarios de radiodifusión prestaran servicios adicionales de telecomunicaciones en las mismas bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión.

Excursio sobre el acceso a la información pública en la Cámara de Diputados

El día 26 de mayo de 2007, solicité, a través de la página de transparencia de la Cámara de Diputados, copia del archivo electrónico o ruta de acceso a la versión estenográfica de esta reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política (30 de noviembre de 2005), en donde se tomó la decisión de dispensar la segunda lectura del dictamen y ponerlo como tema urgente para votación. El día 28 de mayo se me dio como respuesta una liga que me llevó a la copia electrónica del acta de dicha reunión, por lo que volví a escribir aclarando que contaba con dicha acta, pero que lo que buscaba era la versión estenográfica, para precisamente conocer el debate. El día 31 de mayo se me respondió con el siguiente argumento:

“Conforme al artículo 11, numeral 1, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, y de acuerdo a la

información proporcionada por el área competente, le comunicamos que el documento requerido no puede ser proporcionado en virtud de que el mismo se considera como información reservada, ello conforme a lo establecido en el artículo 14, fracción VI de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, toda vez que en las sesiones del órgano de gobierno que se indica, en ocasiones sus integrantes emiten opiniones o recomendaciones sobre asuntos en los cuales no se adoptan decisiones definitivas y por lo tanto, no se documentan en las actas correspondientes.”

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala en su artículo 14, lo que es considerado como información reservada:

Artículo 14.- También se considera como información reservada:

I – V.- ...

VI.- La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

El día 2 de junio volví a escribir al portal de acceso a la información de la Cámara, señalando que la deliberación sobre este asunto había concluido, puesto que el día 1 de diciembre el dictamen en cuestión se había votado por unanimidad, así como enviado al senado en donde se votó por mayoría la madrugada del 31 de marzo de 2006, y finalmente el presidente Fox había publicado la reforma a la LFRT y a la LFT el 11 de abril de ese año. La respuesta por parte de la Cámara, el día 6 de junio señaló:

De conformidad con la información proporcionada por el área competente, le reiteramos que la versión estenográfica requerida es considerada como reservada, ello en atención a lo establecido por el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que en las sesiones de la Junta de Coordinación Política y de los demás órganos de gobierno, en ocasiones sus integrantes emiten opiniones o recomendaciones sobre asuntos en los cuales no se adoptan decisiones definitivas y por lo tanto, no se documentan en las actas correspondientes.

Respecto a su cuestionamiento, le comentamos que la adopción del criterio antes citado deviene de la aplicación de una disposición legal, y por lo tanto se observa de manera general a cualquier solicitud de las versiones estenográficas que obran en este órgano legislativo, independientemente de los acuerdos que se adopten en las sesiones específicas.

Lo anterior representó un encubrimiento del debate que finalmente propició la aprobación de las reformas a la LFRT y a la LFT, a través de una tergiversación de la propia Ley Federal de Acceso a la Información. De acuerdo con Rubén Alonso, experto en el tema de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, sobre la *definitividad* de la decisión los diputados

(votación del dictamen), podrían argumentar que la que tomaron fue afectada por una resolución de la SCJN, pero en lo que toca al proceso legislativo, que concluyó con la sanción de una ley con su publicación en el DOF, el proceso concluyó en definitiva. Lo que siguió después, una controversia constitucional presentada por senadores ante la SCJN, es otro proceso que implicó otra deliberación.

Por otro lado, señala Alonso, se puede mostrar dolo expreso por parte de la Cámara de Diputados para negar la información, pues se estaba ante “limitantes” para de las causales de reserva que deliberadamente habían ignorado para fundar la negativa (lo que se señala al final de las cinco causales de reserva del artículo 14). Ante esto:

“No hay que perder de vista que el "periodo de reserva" puede ser de dos formas: a) por el hecho en sí mismo, y que lo marca por tratarse bien de un proceso con un término intrínseco; b) o bien, por una decisión externa al hecho en sí mismo, pero basado en él, y que implica determinar un periodo o término determinado. En el caso "b" estaríamos ante una respuesta donde se te indica que por determinado tiempo no se podrá tener acceso a lo solicitado, pero un vencido dicho plazo, se podrá acceder a ello (por la información que me proporcionas en tu correo, este no fue el caso). Entonces, estamos ante el primero, y que implicaría estar ante la conclusión de un proceso determinado, y que como recuerdas en tu reconsideración éste se cumplió al publicarse las modificaciones a las leyes de Radio y Televisión, así como Telecomunicaciones, en el DOF.

Además, de lo establecido en los dos párrafos subsiguientes a las seis causales de reserva que establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia, sobre todo el primero, se tiene que la Cámara de Diputados debió entregar la versión estenográfica de dicha

reunión de la Junta de Coordinación Política, pues el asunto ya estaba concluido, y si en dicha versión estenográfica se incluían otros asuntos tratados en esa reunión y que no formaran parte del tema concluido, tendrían que haberse testado. En otras palabras, la Cámara de Diputados debió entregar una versión pública de la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde se pudiera tener acceso a la información requerida.

La respuesta de la Cámara de Diputados a la solicitud reiterada no es un asunto periférico, sino central en lo que tiene que ver con el ocultamiento de un proceso de toma de decisiones sobre un asunto de interés general: el uso y disfrute de un bien público, como lo es el espacio radioeléctrico.” (Entrevista a Rubén Alonso, 31 de diciembre de 2008)

Los afectados: la radiodifusión comunitaria, indígena, educativa, cultural, comercial de Amplitud Modulada (AM), y de Frecuencia Modulada (FM)

De acuerdo al artículo 13 de la LFRT, las estaciones comerciales requieren de una concesión para operar, mientras que las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán permiso. Las radiodifusoras oficiales son aquellas que dependen de las instancias gubernamentales. Sin embargo, el término de estaciones culturales es muy limitado, teniendo en cuenta sólo el concepto de cultura “oficial”, el cual no basta para abarcar múltiples proyectos de expresión. En la propuesta de iniciativa ciudadana de 2002, se expresaba el reconocimiento al derecho ciudadano para gestionar, instalar y operar sus propios

medios. De esta manera, bajo el concepto de medios comunitarios se trató de promover en la ley “aquellos proyectos que desde el tercer sector, el sector no lucrativo, intentaban hacer valer su derecho a comunicar”⁶⁷.

Conceptualmente, para la UNESCO, “la función principal de la radio comunitaria incluye incentivar los movimientos democráticos de manera local, dándole voz a los pobres y marginados; incrementando la diversidad de contenidos y el pluralismo de información a nivel local, para de esta manera reflejar y promover la identidad, carácter y cultura local; fomentando la creación de voces y opiniones diversas, así como la expresión individual, alentando a la participación, la innovación y el compartir información”.⁶⁸

En México existen experiencias de radios comunitarias con más de cuarenta años al aire, como Radio Teocelo, que opera en la frecuencia 1490 de AM con 1000 watts de potencia en el municipio del mismo nombre en el Estado en Veracruz, pero no es casualidad que la radio comunitaria en nuestro país haya tomado impulso a partir del desarrollo mayor de la sociedad civil⁶⁹. Aleida Calleja y Beatriz Solís, en su libro *Con permiso, la radio comunitaria en México*, la definen de esa manera, “en la medida en que su misión se relaciona directamente con el ejercicio de los derechos ciudadanos y como un espacio de encuentro: las radios comunitarias y ciudadanas son un espacio de recomposición del tejido social, son lugares de representación de diferentes identidades culturales y de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales” (Calleja y Solís: 2005: 23).

⁶⁷ *Las radios comunitarias frente a la ley Televisa I, Op Cit*

⁶⁸ <http://portal.unesco.org.ci>

⁶⁹ Ver anexo 6.

De acuerdo con Jürgen Moritz, de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung⁷⁰, como características generales de una radio comunitaria se puede señalar:

- 1.- La comunicación comunitaria es el tercer sector⁷¹, compuesto por la sociedad, aparte del comercial y el estatal. Países como Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay,⁷² contemplan la comunicación comunitaria en sus legislaciones respectivas.
- 2.- Las radios comunitarias apoyan y promueven cambios sociales necesarios para lograr una sociedad más justa.
- 3.- Las radios comunitarias garantizan el acceso a la palabra a todos los integrantes de la comunidad, en este sentido, son un reflejo de la opinión y las necesidades de la localidad.
- 4.- Representan y difunden la diversidad cultural de su entorno.
- 5.- Privilegian la dimensión participativa de sus prácticas comunicacionales.

Las reformas a la LFRT afectaban estos sistemas al establecerles candados para acceder al financiamiento externo (a través de la venta de publicidad). Pero esta no sólo era una postura económica sino “esencial para el futuro de la libertad de expresión y la densidad democrática que queremos que este país tenga (...) el tercer sector de la comunicación en México deben interactuar para hacer posible una ley de medios comunitarios que reconozca el derecho a expresarse a través de sus propios medios, que permita que las organizaciones civiles, grupos ciudadanos, comunidades indígenas, rurales, urbanas, tengan la capacidad de gestionar, instalar y

⁷⁰ La Radio comunitaria, II Seminario de Radio y Comunicación Indígena, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 19 de febrero de 2008.

⁷¹ Moritz se refiere a un tercer actor.

⁷² Según Moritz, en el año 2008, la mejor legislación de medios comunitarios en América Latina, la tenía Uruguay, con la Ley 18232 de Servicio Radiodifusión Comunitaria, publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 2008 (consultar en www.parlamento.gub.uy).

operar sus propios medios, pero esto no es posible si no hay un barco que los incluya.”⁷³ Al respecto, Aleida Calleja señaló:

“la ley dice que sólo podrán pedir permiso u obtener un permiso las entidades u organismos públicos, es decir, solamente las instituciones públicas como puede ser la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es decir, estos medios que dependen directamente de instituciones, por lo tanto allí se excluye el derecho de los grupos ciudadanos para poder tener un permiso para operar un medio de comunicación, como es el caso de las radios comunitarias. Eso violenta el artículo segundo constitucional que establece que los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, esto quiere decir que aunque no sean indígenas pero que tienen las mismas condiciones de vulnerabilidad, tienen el derecho de instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación.”⁷⁴.

Por otro lado, esa aparente facilidad con que se puede instalar una emisora de radio⁷⁵, aunada a la negativa por parte de las autoridades de otorgar todos los permisos que se le solicitan para la instalación de nuevas radios indígenas y comunitarias, orillan a la operación sin permiso⁷⁶, por lo

⁷³ *Las radios comunitarias frente a la ley Televisa 3*, Teocelo Te Ve (video), <http://www.youtube.com/watch?v=2ukIAli8a3s>, Veracruz, Mayo de 2007.

⁷⁴ Entrevista a Aleida Calleja, 8 de mayo de 2006, México, DF.

⁷⁵ Se necesita un generador de oscilaciones (oscilador), para convertir la corriente eléctrica común en oscilaciones de una determinada frecuencia de radio; los amplificadores, para aumentar la intensidad de dichas oscilaciones conservando la frecuencia establecida, y un transductor, para convertir la información a transmitir en un voltaje eléctrico variable y proporcional a cada valor instantáneo de la intensidad. En el caso de la transmisión de sonido, el transductor es un micrófono; para transmitir imágenes se utiliza como transductor un dispositivo fotoeléctrico.

⁷⁶ De acuerdo con la AMARC, existen más de setenta radios bajo esta situación, la mayoría ubicadas en el sur del país. De éstas, 21 se autodenominan libres, 15 étnicas, 35 políticas y 29 religiosas (Informe anual de AMARC México, mapeo de radios comunitarias, educativas y otras no comerciales. Documento de trabajo no publicado (mayo de 2008)). Así mismo existen otras que se nombran como radios libres, comunitarias, alternativas, etc. Algunas de ellas son: XHKH Ké Huelga, México, DF, <http://kehuelga.org>; Radio Sabotaje, México, DF, <http://sabotaje.blogspot.com>; Radio Insurgente – EZLN, Chiapas, <http://radioinsurgente.org>; Radio Zapote, ENAH, <http://zapote.radiolive.org>; Radio Oriente H99, CCH Oriente, <http://groups.msn.com/h99>; Frecuencia Libre, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, <http://mx.geocities.com/danzondedicado>; Radio Nguixó, Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, 104.9 FM. Muchas de estas radiodifusoras han sido desmanteladas por el Gobierno. Los últimos casos documentados, antes de la conclusión de esta investigación, fueron, uno, el cierre de la estación de radio La Tremenda de los dos Laredos, que transmitía por el 106.5 de frecuencia modulada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La

que además son señalados por la CIRT como “radios pirata” ya que están robando parte del espectro radioeléctrico, fuera de toda regulación y de la legalidad.

Sobre la radio indígena, comúnmente se tiene la idea de que ésta es sinónimo de radio indigenista, aquí, la radio comunitaria indígena es un medio en donde la comunidad es la que controla totalmente la estación a través de una asociación, y ésta misma se encarga de su operación y mantenimiento; mientras que la radio indigenista son las emisoras pertenecientes a la CDI, por lo tanto del Gobierno Federal, aunque brinden servicios válidos para la comunidad y tengan formas de participación comunitaria. De esta manera, tiene un perfil similar a la radio comunitaria, pero su operación depende de la CDI. Con la reforma a la LFRT tanto la radio comunitaria indígena como la indigenista peligró, pues no se les reconocía a estos pueblos como sujetos para obtener un permiso por su condición social.

Por otro lado, la opinión de la CIRT siempre ha sido desfavorable, ya que para este órgano empresarial, la participación de esas comunidades en la radiodifusión no sólo es vista como una competencia desleal, pues sin que importe la función que cumplen estos medios, compiten por público contra las frecuencias comerciales, o lo que es lo mismo, por un mercado potencial. De acuerdo con Felipe Vicencio, algunos concesionarios comerciales han opinado, incluso, de una manera más extrema, al señalar que “es peligroso que los indígenas tengan sus propias emisoras, pues al hablar en su idioma, sin supervisión del Estado, pudieran estar incitando a nuevas

Policía Federal Preventiva tomó las instalaciones el mediodía del 4 de junio de 2008. Además de la justificación de que la emisora no contaba con el permiso respectivo, se sospechó que la señal era utilizada para transmitir mensajes de integrantes del crimen organizado (*La Jornada*, 5 de junio de 2008). Dos, el cierre de la radio comunitaria Tierra y Libertad, el 6 de junio de 2008, la cual operaba con un vatio de potencia con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases populares al poniente de la ciudad de Monterrey. Esta emisora operaba desde 2001 y trataba temas de educación, de salud, culturales, de derechos humanos y laborales así como de análisis político. Aunque había solicitado su permiso a la SCT desde noviembre de 2002, nunca obtuvo respuesta alguna. Y tres, el cierre de varias emisoras radiofónicas en Oaxaca y Guerrero a principios de septiembre de 2008 (La AMARC no proporciona mayor información de estas emisoras).

rebeldías, y por ende a la violación del estado de derecho sin que nadie se percate de ello”. Finalmente, debido a que los pueblos y comunidades indígenas gozan de reconocimiento constitucional, su exclusión provocó el pronunciamiento de la titular de la CDI.⁷⁷

En otro aspecto, las comunidades no sólo han incursionado en la radio, sino que existe la experiencia de una televisora comunitaria en la población de Tamazulapan, Oaxaca, enclavada en la sierra Mixe. En el año de 1996 esta comunidad creó su propio canal de televisión (canal 12) con 10 watts de potencia. Por esas fechas ningún municipio o comunidad contaba con un canal de televisión administrado por ellos mismos. En el año 2000 el transmisor se dañó, siendo imposible su reparación por ser un modelo discontinuado. A partir de 2008, estuvieron en condiciones de transmitir los programas de televisión que esta comunidad produce a través de la Internet, en la página de Radio jënpoj (www.radiojenpoj.org). De igual manera, Radio Teocelo incursionó en la televisión por Internet, creando Teocelo Te Ve.

En el caso de los radiodifusores de la banda de AM, la redacción de la reforma les significaba un gran problema en dos vertientes: la primera, la dificultad económica para acceder a la convergencia tecnológica y a los llamados *combos* los cuales son plataformas tecnológicas para transmitir señal digital en AM y FM; y dos, que la misma ley no les permitiría aprovechar el espacio sobrante de la compresión de la señal en otro tipos de servicios, por lo que competirían en desventaja, por lo que la situación los llevaría a la quiebra y posteriormente su desaparición.

Aunque éste era el principal problema con la radiodifusión de la AM, también le afectaba no sólo a concesionarios independientes de la banda de FM, sino a grupos como Radio Fórmula, cuyo

⁷⁷ La Comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (sexenio de Vicente Fox 2000-2006) Xóchitl Gálvez, fue la primer funcionaria del gabinete presidencial en criticar la minuta. Esto en la mesa de consulta para las reformas a la Ley Federal de Radio y TV, que organizó el Senado el 15 de febrero de 2006. La Comisionada defendió las radiodifusoras culturales indigenistas, y habló de la vinculación de éstas con sus comunidades. Su principal petición se centró en la protección, en la ley, de los derechos de los pueblos indígenas a contar con radiodifusoras en su propio idioma, para la difusión de sus propias ideas e intereses.

presidente es Rogerio Azcárraga Madero (primo de Emilio Azcárraga Jean). Así, con imposibilidad de algunos para transitar a la transmisión digital, y con el impedimento para otros de aprovechar el espacio sobrante en las frecuencias, su poder para adquirir concesiones para nuevas frecuencias, incluso para renovar las propias, los grupos más fuertes podían adjudicárselas como al mejor postor, situación con la que no estaban de acuerdo la mayoría de los concesionarios.

En este sentido, se probaba que la reforma había sido redactada para beneficiar exclusivamente a la televisión. Esta situación provocó una división al interior de la CIRT, incluso entre la misma familia Azcárraga. El nivel de descontento llegó a tal grado, que los empresarios amenazaron con expulsar a las televisoras (Televisa, TV Azteca y MVS) de la CIRT, o crear su propia Cámara de la Radio⁷⁸. Por su parte, los radiodifusores independientes propusieron una modificación al artículo 22, en el sentido de integrarlos a la posibilidad de la convergencia tecnológica⁷⁹. La redacción de la reforma también perjudicaba a la industria de las telecomunicaciones, pues en la LFT se señala que si un concesionario de telecomunicaciones quiere prestar servicios de radiodifusión, debía pasar por un proceso de licitación, por el contrario, el texto reformado de la LFRT decía que si un concesionario de radiodifusión quería prestar servicios de telecomunicaciones, sólo bastaba con notificar a la Secretaría. Así mismo, la LFT contempla los

⁷⁸ Diario *Mural*, Guadalajara, Jalisco, 7 de diciembre de 2005.

⁷⁹ El artículo 22 señala: No podrán alterarse las características de la concesión o permiso sino por resolución administrativa en los términos de esta ley o en cumplimiento de resoluciones judiciales”. Y la propuesta de los radiodifusores es agregar dos párrafos más, en el siguiente sentido: Artículo 22.- ...

Los permisionarios y concesionarios de radio y televisión que hayan cumplido con las disposiciones y obligaciones que les imponen las disposiciones legales aplicables, podrán solicitar a la autoridad competente, que les otorgue la frecuencia necesaria para acceder a la tecnología que en materia de radiodifusión exista y que implique un avance de carácter técnico al servicio que presten.

El Estado, por conducto de la autoridad competente, otorgará la frecuencia que se solicita, aún en una banda distinta, pero asignada a radiodifusión, salvo que provoquen interferencias técnicas. El otorgamiento de esta frecuencia operará como una adición al título de concesión o permiso originalmente otorgado.

mecanismos de recuperación del espectro radioeléctrico, no así en la LFRT. Todo esto era una inequidad jurídica.

El proceso de discusión interno y externo: desplegados, opiniones, chantajes y encuestas

Ante toda esta situación, los principalmente diarios fungieron como un contrapeso a las televisoras, en el sentido en que el debate que se manejaba en la prensa escrita era más plural, así mismo, sirvieron como un vehículo para las opiniones e ideas de los grupos de la sociedad civil hacia el Senado de la República. Todo lo que se suscitó sobre este proceso se realizó en el nivel periodístico, que fue el único espacio donde participaban varios de los académicos más representativos del ámbito.

Las reacciones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM salieron a la luz pública ocho días después de la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. Sus profesores publicaron un desplegado el 12 de diciembre de 2005 en los diarios *El Universal* y *La Jornada*. Entre los académicos destacan Fátima Fernández Christlieb, Raúl Trejo Delarbre, Pascal Beltrán del Río, Miguel Carbonell y Fernando Mejía Barquera. En dicho desplegado expresaban su rechazo a una “reforma al vapor”.

El día 6 de enero se dio a conocer que se convocaría a una mesa de discusión sobre las reformas aprobadas por los diputados. Este debate fue impulsado a puertas abiertas, frente a los medios de comunicación y a la opinión pública. Los primeros organismos en demostrar su descontento con la minuta, fueron la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (CANIETI) y el Colegio Nacional de Economistas A.C., en donde expresaban las

inconsistencias de la reforma, entre ellas las facultades parciales a la COFETEL, la falta de equidad entre los concesionarios, y la asignación eficiente del espectro.

El 16 de enero, 70 concesionarios independientes, entre ellos Rogerio Azcárraga, pidieron una reunión con el Consejo Directivo de la CIRT. Su postura, en este momento, era pedir a la dirigencia un cambio en la forma en que se ha abordado el tema de las reformas a la LFRT, y pedir la expulsión de Televisa, por imponer sus intereses sobre los concesionarios de la radio⁸⁰.

Por otro lado, la postura de la CANIETI fue primeramente crítica, y después cambió. A finales de diciembre de 2005, había publicado un desplegado en donde rechazaba las reformas “al vapor”, y acusaba que la reforma respondía a intereses individuales, contrarios a interés público. Siguiendo este argumento, el 11 de enero, su presidenta, María Teresa Carrillo, envió una carta a los 128 senadores, pidiendo considerar su solicitud de adecuación de la minuta, así como el realizar una consulta pública, abierta y transparente que involucrara a todos los actores del ramo. El día 2 de febrero, la propia María Teresa Carrillo, hizo llegar una nueva carta al Senado, esta vez solicitando la aprobación del contenido íntegro de la minuta. Diversos medios y senadores, cuestionaron el viraje de la dirigente, las razones serían dadas a conocer a la luz pública un mes después.

El 20 de enero de 2006 se llevó a cabo una reunión de académicos en la sala de cabildos de Coyoacán, donde se buscó un modo de consulta sobre la minuta. Por su parte, Héctor Osuna quiso simular una consulta, y envió una carta a todos los académicos involucrados en el tema. La intención era que cada investigador opinara aisladamente, pero los profesores respondieron que preferían crear un foro de discusión. Entonces Osuna pidió, a través de la prensa, que los académicos “aclararan sus intereses”, Trejo le respondió, por la misma vía, que el interés era el

⁸⁰ Diario *El Universal*, 17 de enero de 2006.

bien común, que si alguien debía aclarar su postura, debía ser el propio senador, por la premura con que quería manejar la situación.

La contribución de diversas universidades a este proceso, fue la organización de foros de difusión acerca del debate en el senado, en donde por lo regular invitaban a senadores y expertos en la temática. El CONEICC, que había sido el representante de los académicos en la Mesa de Diálogo, de marzo de 2001 a octubre de 2002, publicó en su sitio Web dos desplegados de apoyo a la discusión, el primero en el año 2005⁸¹, y el segundo en 2006⁸², de igual manera, la AMIC comenzó a ingresar a la discusión. Los académicos encontraron espacios en diversos medios, tanto de radio como impresos, ya que la reforma afectaba a varios concesionarios, éstos decidieron abrir un debate en los medios con los profesores como invitados especiales. Así mismo, los académicos de mayor prestigio en el área de las ciencias de la comunicación, serían invitados a participar en las mesas de consulta que organizó en Senado para el mes de febrero de ese año.

La postura entre los investigadores universitarios no fue unánime para rechazar la minuta. Entre los primeros académicos en avalarla, se encontraron José Carreño y Eduardo Ruiz Vega de la Universidad Iberoamericana. Para Raúl Trejo Delarbre, la postura de estos dos académicos era contradictoria con la conducción y espíritu de los profesores e investigadores de las universidades jesuitas, pues estos mismos han sido impulsores de la radio comunitaria, por lo que estos personajes tuvieron que aclarar que su postura era personal, y no a nombre de esa casa de estudios⁸³.

⁸¹ http://www.coneicc.org.mx/noticias/2005.02_ley_radioytv.htm

⁸² <http://www.coneicc.org.mx/noticias/desplegado.html>

⁸³ Entrevista a Raúl Trejo Delarbre, 4 de mayo de 2006, CU-UNAM, México, DF

El día 20 de febrero fue publicada una nota en el diario *Milenio*, en donde se manifestaba que todos los representantes de los sectores regulados de la industria de las comunicaciones en México, incluyendo empresas, sindicatos e instituciones de investigación, avalaban la minuta⁸⁴. Ese mismo día, Ernesto Velásquez, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C. envió una carta a Carlos Marín, director general editorial de *Milenio Diario*, expresando que era falso el apoyo unánime a la minuta.

A partir del debate que comenzó en los medios impresos de comunicación, diversos organismos y asociaciones también utilizaron el espacio que se abrió para poder opinar al respecto. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, en voz de su presidente, Gerardo Soria, señaló que la reforma “estaba bastante bien” ya que era mejor sacar lo que estaba consensuado y no entramparse. Este personaje señalaba además que “no veía problemas para que el Senado lo aprobara, pues en su mayoría eran las cuestiones que ya se habían discutido”⁸⁵. Días después miembros de esta misma asociación acusarían a Soria, también a través de la prensa escrita, que las declaraciones que había vertido no compartían el punto de vista de los asociados.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro pidió a los senadores no aprobar la minuta, pues se cometerían potenciales violaciones de los derechos humanos de los mexicanos, ya que la reforma incumpliría la función social de los medios de comunicación, fomentaría competencia desleal y el monopolio. Por otro lado, la aplicación de esa ley fomentaría un modelo de desarrollo hegemónico basado en la supresión de las culturas locales y la diversidad cultural. De esta manera, la minuta contraviene tratados y convenios internacionales que México ha firmado y ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención

⁸⁴ Diario *Milenio*, 20 de febrero de 2006.

⁸⁵ Diario *Público*, 7 de diciembre de 2005.

Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial⁸⁶.

El CENCOS planteó al Senado que la minuta de reformas a la LFRT presentaba “innumerables vacíos y deficiencias sobre temas torales para la sociedad civil mexicana; trastoca elementos sustanciales de la democracia como la participación ciudadana, la transparencia en el otorgamiento de concesiones y permisos, la función social de la radio comunicación, la falta de control y regulación del Estado sobre los bienes del dominio de la nación, así como la falta de apoyos y casi aniquilamiento de radios y televisoras públicas del Estado”⁸⁷.

Los académicos y las organizaciones civiles no fueron los únicos que utilizaron los medios escritos para hacer públicas sus opiniones. La Secretaría de Gobernación denunció que no había sido consultada previamente a la reforma, y en opinión de “un alto funcionario” de esa Secretaría, los cambios aprobados por los diputados beneficiaban a Televisa. Así mismo opinaron que la reforma “hace pensar que los cambios están en el marco de la alianza electoral entre el PRI y el PVEM, pues el presidente de la Comisión de Radio y televisión de la Cámara de Diputados, Javier Orozco, miembro del PVEM, trabajó en Televisa, y su hermano, Miguel Orozco, es el director Jurídico de la CIRT”⁸⁸. Por su parte la COFECO señaló que las reformas a la LFRT no aseguraban la eficiencia de la prestación de los servicios, ni evitaban fenómenos de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico, contrarios al interés público en los términos del artículo 28 constitucional⁸⁹.

⁸⁶ Diario *La Jornada*, 1 de marzo de 2006.

⁸⁷ Diario *El Universal*, 10 de marzo de 2006.

⁸⁸ Diario *La Jornada*, México, D.F., 8 de diciembre de 2005.

⁸⁹ Diario *La Jornada*, México, D.F., 5 de enero de 2006.

En los primeros días del mes de febrero, Televisa intensificó las presiones hacia la CIRT, la Cámara de la Industria de las Telecomunicaciones y demás actores involucrados en el proceso de reforma a la LFRT. Pero en reunión del Consejo Directivo de la CIRT, a principios de febrero 2006, no hubo un apoyo unánime, ya que votaron en contra Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula; Gustavo Rentería Villa, de Grupo Rosa; y Gilberto Solís y Baltasar Pazos, radiodifusores de San Luis Potosí y Veracruz respectivamente. Aún así, la dirigencia de la CIRT pidió al Senado aprobar la minuta en sus términos⁹⁰.

El día 8 de febrero, se llevó a cabo la primera mesa de consulta pública de las comisiones del Senado, para analizar las reformas a la LFRT. En ella participaron los senadores Javier Corral y Héctor Osuna del PAN, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y José Bonilla del PRI, y César Ojeda del PRD. Seis de los trece expertos invitados, eran miembros del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, organismo que previamente se había manifestado públicamente a favor de la minuta.

Quienes en esta primer reunión de trabajo defendieron la reforma fueron Gerardo Soria presidente de Idet; Federico González Luna, Consultor de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados; Eduardo Ruiz Vega, Coordinador del programa de derecho a la información de la Universidad Iberoamericana; Leonardo Ramos Mateos, de Televisa; la CIRT; y Jorge Arreola, ex comisionado de la COFETEL.

En contra de la minuta hablaron Ernesto Velázquez, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México; Aleida Callejas, de la AMARC; Marco Levario, periodista; Manuel Guerrero Martínez, Coordinador de la Maestría de Comunicación de la Universidad Iberoamericana; y Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de

⁹⁰ Diario *La Jornada*, México, D.F., 3 de febrero de 2006.

la UNAM. Finalmente, en esta primer reunión se criticó que no se invitara a instituciones públicas como la COFECO, ni otras organizaciones de relevancia que habían manifestado su posición en relación a la minuta.

El día 15 de febrero se dio lugar a la segunda mesa de trabajo. A esta reunión acudió Xóchitl Gálvez, entonces Comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Denise Dresser, académica del ITAM; Aimée Vega Montiel, Presidenta de la AMIC; Florence Toussaint Alcaraz, investigadora de la UNAM; Roque Chávez, radiodifusor independiente; Jorge Arturo Mirabal, presidente del CONEICC; Javier Lozano Alarcón, experto en telecomunicaciones; Agustín Ramírez, de la AMEDI; Alberto Sáenz Azcárraga, de la CIRT; Ernesto Velázquez, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México; además de los senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri.

Xóchitl Gálvez fue la única funcionaria del gabinete presidencial en criticar la minuta. Su postura fue la defensa del derecho de los pueblos indígenas a contar y operar sus propios medios. Por su parte Denise Dresser fue muy crítica ante los senadores, a quienes acusó de arrodillarse ante las empresas de los medios de comunicación, ser manipulados por éstas y conformarse con las “migajas” de la minuta, cuando tienen el poder constitucional para realizar una reforma que beneficie a todos.

El día 22 de febrero, se realizó la tercera mesa de consulta, a la cual también fueron invitados el IFE, la COFECO y la SCT. Los presidentes del IFE, Luis Carlos Ugalde; de la COFETEL, Jorge Arredondo; y Eduardo Pérez Motta de la SCT; señalaron que la minuta no era un avance, sino un retroceso. El día 28 de febrero, se realiza la cuarta y última mesa de consulta. En esta participaron además de los senadores, dos ex presidentes de la COFETEL, Porfirio Muñoz Ledo, académicos,

radiodifusores independientes y otros especialistas. Ese mismo día 28 de febrero, el diputado federal José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD, envió una carta al Senador Enrique Jackson Ramírez, entonces presidente del Senado, junto con 100 firmas más, solicitando el estudio minucioso de la minuta.

El día 1 de marzo, el diario *El Universal*, dio a conocer el contenido de ocho conversaciones telefónicas audiograbadas. En ellas se ponía al descubierto las presiones que ejerció Televisa para que diversos actores apoyaran la minuta. La CANIETI, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), y varios radiodifusores habían expresado su rechazo a las reformas propuestas.

Javier Tejado Dondé, asesor jurídico de Televisa, fue el conducto para presionar a los directivos de la CANIETI, a fin de que dicho organismo, y en especial su presidenta, María Teresa Carrillo, modificara la convicción que había expresado, de rechazo, en una carta pública. En su segunda misiva en los medios impresos, la dirigente de esta Cámara ahora pediría la aprobación inmediata de la minuta y en sus términos.

En las llamadas del abogado de Televisa se involucraron nombres como el de Guillermo Soria; Eduardo Ruiz Vega, coordinador del Programa de Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana (UIA); Ernesto Piedras, Director general de The Competitive Intelligence Unit, consultoría de negocios, coordinador del desarrollo académico del programa de investigación en telecomunicaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y académico del ITAM; Federico González Luna, del Grupo de asesores Deschamps, ex asesor del Senado en la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones; e incluso a senadores como Enrique Jackson (PRI); Héctor Osuna (PAN); y Emilio Gamboa (PRI).

Los radiodifusores inconformes fueron convencidos con la idea de que se impulsaría una reforma paralela (de la que se hablará más adelante) que subsanara las “omisiones” y que de esta manera esos concesionarios también se beneficiarían con la reforma. A cambio, quienes estaban en contra debían retractarse y apoyar la minuta en sus términos. Para Alva de la Selva, esta situación se parece a una que sucedió en los años cuarenta (del siglo XX), con radiodifusoras del interior, en donde se les prometió la inclusión y protección ante la expansión de los grandes grupos, pero con la condición de que no se organizaran ni intervinieran contra los grupos de la capital, “después de eso se acabó la posibilidad de un desarrollo más fuerte de la radio en el interior del país”⁹¹.

Finalmente, este mismo día se dio a conocer que 111 diputados federales, 51 perredistas, 36 priístas, 16 panistas, cuatro petistas, dos de convergencia y dos independientes, enviaron una carta al Senado de la República, en donde señalaron:

“En la sesión del 1 de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó una minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, generando serias controversias en cuanto a su contenido y ausencia de deliberación con que se procedió respecto de una temática de importante estrategia para el futuro de la nación (...) En la sesión aludida se constató la ausencia de 172 legisladores, algunos de ellos ampliamente familiarizados con la temática que aborda la minuta y que no tuvieron posibilidades de contribuir a la reflexión ni a definir una postura al respecto, dada la velocidad con que transcurrió el proceso de presentación de la iniciativa, dictaminación en comisiones y aprobación en el pleno (...) De diciembre a la fecha se ha desarrollado un gran debate de la minuta que nos hace conscientes de la enorme complejidad y de la gran trascendencia de la temática involucrada, en donde las voces de los expertos, así como de los integrantes de la industria de la radio y la televisión, dan testimonio de la ausencia de consensos al respecto (...) Estamos

⁹¹ Entrevista realizada a Alma Rosa Alva de la Selva, 2007, Ibid.

ante la evidencia de lo acertado del esquema bicameral para la aprobación de las leyes, que permite a la Cámara de Senadores ejercer a plenitud su condición de revisora, para que la minuta turnada por los diputados sea enriquecida y perfeccionada conforme a una discusión pública".⁹²

La negociación al interior del PRI y del PAN

Cuando la minuta llegó a la Cámara de Senadores, también se les quiso pasar la “bola rápida”, pero la intervención de varios senadores de todas las fracciones parlamentarias lo impidieron, logrando ventilar el tema en la sociedad (aunque finalmente el resultado fue el mismo que en la Cámara de Diputados). La negociación con los senadores se basó en los intereses electorales, aunque en su momento los candidatos del PRI, PAN y PRD lo negaron⁹³.

Para la entonces senadora Dulce María Sauri

“era atentatorio a la inteligencia, no se puede pensar que las televisoras negociaron con el candidato Calderón y con el candidato Madrazo, para darles a ambos apoyo para llegar a ganar la presidencia, porque sólo uno podía ganar. Internamente yo les decía a mis compañeros ¿qué no se dan cuenta de que con el voto del PRI le vamos a dar al presidente Fox la guadaña para que nos corte la cabeza más rápido, que va a capitalizar para las reformas del PAN y el candidato Calderón? Por eso a mí no me sorprendió que simultáneamente a la aprobación de la reforma, viniese un incremento desbocado en la publicidad de Felipe Calderón y desbocado en la publicidad del Presidente, que finalmente en el mes de abril

⁹² www.javiercorral.org, 1 de marzo de 2006.

⁹³ En este apartado se da cuenta de las negociaciones al interior del PRI y del PAN, atestiguadas por miembros de esos partidos. Aunque no se logró entrevista con algún miembro del PRD, Javier Corral ha manifestado en diversos foros tener la crónica precisa de la labor de Televisa, las pláticas y los ofrecimientos de apoyo, a Andrés Manuel López Obrador (Corral, AMIC 2007)

registra un incremento en las tendencias del voto a favor de Felipe Calderón y ¿qué pasó con el del PRI? No solamente no nos fue bien, sino nos fue peor. Eso al PRI no le servía, y la mayoría de los votos, en las dos cámaras, fue del PRI, la cosa más absurda que yo he visto.

Si ve usted qué senadores son candidatos a diputados, va a ver que sólo hay uno, y votó en contra, que es el senador Carlos Gómez, que está en el lugar ocho de la tercera circunscripción para ser diputado. Todos los demás votaron a favor, incluso hubo un caso muy sobresaliente de la senadora Noemí Martínez de Veracruz, una mujer de gran energía, una luchadora social, con una gran plataforma electoral en Veracruz, estaba previsto que fuera candidata a diputada plurinominal y por su voto en contra la eliminaron de la lista. Sabíamos que parte del costo de votar en contra iba a ser que no íbamos a tener oportunidad de ser candidatos a diputados, y así se dieron las cosas.

Pero cada partido tiene su estrategia de convencimiento, en el caso del PAN se los pidió el presidente del partido, y eso varios compañeros del PAN nos lo contaron. En el caso del PRI fue diferente, inclusive en una de las reuniones internas hubo la petición de que directamente el presidente del partido nos dijera que quería, que tuviese claridad el grupo parlamentario qué quería y por qué quería, para que tuviéramos los argumentos de por qué deberíamos o no hacer eso, pero no fue posible. Uno a uno a los compañeros los fueron convenciendo de que era mejor para la causa del PRI, y hubo incluso una reunión en donde un compañero planteaba que los que íbamos a votar en contra éramos traidores al PRI. Fue una discusión muy dura. La posición mayoritaria, finalmente, fue votar la minuta en sus términos, y ahí están las consecuencias.

Yo nunca escuché que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional dijera nada, “dicen” que el presidente del partido les dijo a algunos “dicen” que el candidato Madrazo les dijo a muchos, pero a mí no me consta porque a mí ni uno ni otro me dijo directamente nada, ni siquiera mi coordinador me dijo nada. Por eso no soy un caso para ejemplificar presiones directas, porque no me lo dijeron. Lo que sí se dio fue un ambiente de presión, cuando menos para mí, en el sentido de decirme “si estás en contra le estás haciendo el juego a Javier Corral” “que Javier Corral está descalificado, que es panista, que le está haciendo el juego al PAN” o “le estás haciendo el juego al PRD, a los perredistas, estás impidiendo que Madrazo tenga más espacio en la televisión, que lo traten bien los medios”⁹⁴.

⁹⁴ Entrevista a Dulce María Sauri Riancho, 2006, Ibid.

Para Dulce María Sauri, las empresas televisoras hicieron su trabajo, el cual era impulsar una ley que los favoreciera, mientras los que no realizaron su labor fueron los legisladores, ya que su trabajo es hacer leyes que beneficien a todos, al conjunto, a la sociedad, a la diversidad a la competencia económica de este país. “Nuestro trabajo era oír a las televisoras como oír a otros y decidir lo mejor para la mayoría. En eso el poder legislativo, esta legislatura (LIX) se equivocó. Claro que quien gane la presidencia de la República va a seguir teniendo ese enorme poder fáctico que es el poder de los medios de comunicación, así es en las sociedades modernas, lo que necesitamos es un buen marco legislativo para que el Estado le ponga límites a ese poder fáctico, así como pedimos una buena legislación para que le ponga límites al poder fáctico del crimen organizado, así queremos también que el poder fáctico de los medios de comunicación tenga el límite que no es más que el interés colectivo, que el interés de la mayoría, y eso es responsabilidad del Estado”⁹⁵

En el caso del PAN, de acuerdo con Felipe Vicencio, su presidente del Comité Ejecutivo Nacional planteó la necesidad de respaldar la reforma que proponía la industria de la televisión en sus términos, porque así convenía a los intereses electorales del partido.

“Hubo dentro del grupo un debate muy amplio, un debate que se consignó en aquellos momentos en la prensa, fue muy largo, nos citaron a una comida, no recuerdo qué día fue, nos citaron a las 3:00 de la tarde y a las 9:30 estábamos terminando la reunión; sí fue una reunión amplia, un diálogo intenso, hubo debate y al final expusimos nuestros puntos de vista quienes estábamos en contra y lo hicieron también quienes estaban a favor. Quienes estaban a favor jamás hablaron de la reforma en sí, ellos no se refirieron a la materia misma sino al contexto y a las ventajas que de aprobar aquello se podría seguir para la causa

⁹⁵ Entrevista a Dulce María Sauri Riancho, 2006, Ibid.

partidista, fundamentalmente para la candidatura de nuestro abanderado a la Presidencia de la República.

Dio claramente a entender que había una presión de parte de los propios medios tendiente a una oferta de darle trato considerado a nuestro candidato a cambio de la aprobación de las reformas tal y como venían de la Cámara de Diputados. Nosotros establecíamos que esa era una exigencia inaceptable, que era un chantaje y que no deberíamos sobrevalorar la influencia que pudieran tener los medios en la definición de quien debería de ser el próximo presidente del país, pero ahí el debate evidentemente lo perdimos, se consideró que era coyunturalmente conveniente respaldar las reformas, por lo menos así lo creyó la mayoría.

Debo decir que en ningún momento se presionó para que quienes estábamos en contra cambiáramos nuestra postura. Ellos a lo único que iban era a asegurarse que tenían el número de votos necesario que sumados a los del PRI, a los del Verde y a otros más esta reforma pudiera pasar, de tal manera que no hubo una presión al interior del partido porque no necesitaban al cien por ciento de los legisladores, bastaba que treinta y tantos votaran a favor para que se lograra el número suficiente, por eso fueron esa tarde y eso fue lo que consiguieron.

Nosotros teníamos la oportunidad de acotar ese poder con una reforma justa que respetara los derechos de los grandes empresarios de los medios electrónicos, que sin duda los tienen, pero que armonizara el respeto de estos derechos con el respeto al derecho del resto de la sociedad. No ocurrió así por el temor a las represalias que desde el poder mediático pudieran sufrir los intereses partidistas, y al actuar así, paradójicamente, se les enviste (sic) de un poder mayor que hará doblemente difícil en un futuro poder hacer ajustes al marco que los regula.

Es esta paradoja de que se toman decisiones por temor a su poder y que resultan ser decisiones que terminan por fortalecerlos más y así sucesivamente. Esto se traducirá necesariamente en una incómoda relación del nuevo gobierno con ellos porque sin duda cobrarán la factura, saben cobrarla y lo harán bien, le harán saber al nuevo presidente que su triunfo prácticamente les corresponde y por lo tanto habrá una gran presión para que no se modifiquen las condiciones que hoy los favorecen tanto.

También lo seguirán haciendo en el propio poder legislativo, como de hecho se ve desde la propia integración de las dos cámaras, en donde ya han asegurado la presencia de enclaves

de representantes que van a velar por sus intereses y que tienen suficiente influencia y poder como para influir en las dinámicas parlamentarias. Creo que esta es la situación y complicado por lo mismo, de que el nuevo gobierno pueda tomar las decisiones que le corresponden sin que las mismas tengan la anuencia de los medios electrónicos, a no ser que aprovechando la fuerza que derive de su nombramiento formal, del respaldo institucional, tuviera la disposición y el ánimo para cometer una serie de reformas tendientes a equilibrar el poder de los medios electrónicos para que no suplanten a las instituciones democráticas.

En una lectura de los resultados electorales y la configuración del nuevo congreso, algunos pueden llegar a la conclusión de que esos resultados tienen que ver precisamente con la forma en tan convenida y considerada en que se ha tratado a los medios electrónicos, y por lo tanto su conclusión será que en los próximos años no habrá que hacer nada que los contrarie o que afecte a sus intereses porque esta condición de mayoría parlamentaria o de primera minoría, se disfruta gracias a la colaboración de ellos.

Es lamentable pero no dudo que muchos así lo reflexionen, entonces estamos en una paradoja porque teniendo la cantidad de legisladores suficientes para entrar en serio a una reforma democrática de los medios electrónicos, quizá esta legislatura tenga que transcurrir sin que eso se pueda ver. Acción Nacional históricamente ha abanderado causas de la democracia que en diferentes momentos le han permitido coincidir con la izquierda, pero este episodio poselectoral ha llevado a una radicalización de posturas tal que quizá en pocas épocas de la historia moderna del país se había constatado una distancia tan grande entre la izquierda y Acción Nacional, por lo tanto costará mucho tiempo y trabajo la construcción de puentes para impulsar agenda compartidas”⁹⁶.

⁹⁶ Entrevista realizada a Felipe Vicencio, 2006, *Ibíd.*

La aprobación de la minuta en comisiones

El 17 de marzo, los comisionados de la COFETEL enviaron a la Cámara de Senadores, y el 5 de abril a la Presidencia de la República, al secretario de Gobernación (Carlos Abascal), al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola) y a los titulares de Innovación Gubernamental (Ramón Muñoz), de Políticas Públicas (Eduardo Sojo) y al consejero jurídico de Fox (Juan de Dios Castro), unos documentos en los que advertían que las reformas propuestas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones despojarían al Estado de su rectoría sobre los bienes de la nación; también se demostró la dominancia de los concesionarios de televisión, en especial de Televisa y TV Azteca.⁹⁷

En esta misma fecha, se convocó a una reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. En esta sesión se presentó el dictamen de la minuta sin cambio, ya que no se incorporó ninguna de las propuestas que se hicieron en las cuatro mesas de trabajo realizadas en el mes de febrero.

Tanto al interior del PRI como del PAN ya se había llegado al acuerdo de votar la minuta en sus términos, algunos senadores, en ambos partidos, habían negociado su voto a cambio de los espacios necesarios para alcanzar puestos de elección popular, así como un trato preferencial por parte de Televisa. Por lo que a pesar de la propuesta de otros legisladores para dar más tiempo al estudio de la minuta e incorporar las observaciones, se procedió con la votación.

⁹⁷ Autocracia Televisiva, *Jenaro Villamil*, Proceso No. 1575, Fecha: 2007-01-06

Integrantes de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos		
A favor de la minuta		
Senador	Partido	Observación
Orlando Paredes	PRI	Precandidato plurinominal a la Cámara de Diputados.
Rubén Zarazúa	PRI	Precandidato plurinominal a la Cámara de Diputados.
Jorge A. López	PRI	Candidato a Alcaldía de Mazatlán
Eric Rubio	PRI	Aspirante a la candidatura a gobernador de Yucatán
Miguel Sadot S.	PRI	Precandidato plurinominal a la Cámara de Diputados.
Jorge Norhausen	PAN	Aspirante plurinominal al Congreso de Yucatán
Héctor Vicario	PRI	Candidato a diputación en Guerrero
Héctor Michel	PRI	Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Héctor Osuna	PAN	Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Actual presidente de la COFETEL
Emilio Gamboa	PRI	Precandidato plurinominal a la Cámara de Diputados.
Juan J. Rodríguez	PAN	Precandidato plurinominal a la Cámara de Diputados.
En contra de la minuta		
Javier Corral	PAN	
Alfredo Martínez	PAN	
Alberto Martínez	PAN	
Wadi Amar	PAN	
José A. Castañeda	PAN	Doble voto por ser miembro de ambas comisiones.
Serafín Ríos	PRD	
Raúl Ojeda	PRD	Precandidato a gobierno de Tabasco
Raymundo Gómez	PRI	
Abstenciones		
José Bonilla	PRI	Radiodifusor
Araceli Escalante	PRI	

El senador Bonilla, quien inicialmente rechazaba la minuta porque resultaba afectado el sector que él representa, pequeñas empresas de radio regionales, se abstuvo y no votó en contra a cambio de que se promoviera una iniciativa paralela, la cual se presentó y se aprobó en el senado, pero finalmente se quedó “en la congeladora” en la Cámara de Diputados.

La sesión del 30 de marzo de 2006

En la sesión del día 30 de marzo de 2006, los senadores Eric Rubio y Héctor Osuna presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos de la LFRT. La llamada “reforma paralela” tenía como objetivo incluir en los artículos 17-D, 17-G, 28, y 28-A, de la LFRT, el requisito de la opinión favorable por parte de la COFECO. Héctor Osuna, quien la presentó en tribuna, mencionó que la habían suscrito varios senadores⁹⁸. Antes de que el presidente de la Mesa Directiva Chaurand Arzate, turnara la iniciativa, pidieron la palabra los senadores Blas Rafael Palacios Corderos, Manuel Bartlett y Javier Corral, para señalar que dicha iniciativa pretendía reformar artículos inexistentes (pues ni siquiera se había llevado a cabo la votación para reformar la LFRT y por consiguiente esos artículos aún no existían). Bajo el argumento de que todo senador tiene el derecho de presentar iniciativas, el Presidente la turnó a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos⁹⁹ (Cámara de Senadores, 2006).

Cuando se procedió a la discusión del dictamen de la minuta, lo que llevaría alrededor de diez horas, el senador Felipe Vicencio solicitó una moción suspensiva a la discusión, argumentando

⁹⁸ Eric Rubio, Víctor Méndez, Emilio Gamboa, José Carlos Cota, Rubén Zarazúa, Alejandro Gutiérrez, José Bonilla, Víctor Méndez, César Camacho, Flavia Ureña, Araceli Escalante, Martha Tamayo, Ernesto Gil, Esteban Ángeles, José Aguilar, Jorge Franco, Silvia Domínguez, Yolanda González, Héctor Vicario, Mariano González Zarur, Francisco Bojorquez, Joel Ayala, Doroteo Zapata, Eduardo Ovando, Héctor Astudillo, Germán Sierra, Raymundo Gómez, Ricardo Aldana, Humberto Roque, Tomás Vázquez, Ana Bricia Muro, Oscar Luebbert, Carlos Rojas, Adrián Alanís, Adalberto Castro, Genaro Borrego, Fernando Gómez, Ramón Mota, Carlos Chaurand, Roberto Pérez de Alva, Emilio González, Patricia Gómez, Gloria Lavara, Sara Castellanos, Verónica Velasco, Héctor Larios, Jorge Nordhausen, Gerardo Buganza, Susana Stephenson, Rafael Morgan, Fernando Margain, Rigoberto González, Addy Joaquín, Benjamín Gallegos, Luisa María Calderón, Lydia Madero, Jorge Lozano, Marco Xicotécatl, Salvador Becerra, Gustavo Cárdenas, Rita María Esquivel, Gildardo Gómez Verónica, Miguel Martínez Mireles, Héctor Hernández, Víctor Torres, Luis Rico, Francisco Fraile, Antonio Haghenbeck, Federico Ling, Carlos Medina, Silvia Hernández, Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan.

⁹⁹ Ver anexo 7.

que el dictamen no contenía las observaciones, ajustes y adiciones que habían solicitado los diversos actores consultados en el tema, pero la solicitud fue rechazada por 77 votos contra 44 que la aceptaba (Cámara de Senadores, 2006). Acto seguido, el senador Héctor Osuna subió al estrado para fundamentar el dictamen. El Senador Raymundo Cárdenas cuestionó sobre la razón por no haber integrado al dictamen el contenido de la iniciativa que habían presentado momentos antes, en lugar de redactar una nueva iniciativa. Así mismo, el Senador Manuel Bartlett le cuestionó el supuesto consenso del dictamen, pues éste apenas había alcanzado una mayoría simple en la votación de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y RTC.

En contra del dictamen hicieron uso de la palabra: Dulce María Sauri, Manuel Bartlett, Laura Alicia Garza, Blas Rafael Palacios, Genaro Borrego, David Jiménez, Guillermo Herrera y Raymundo Gómez (PRI), Javier Corral, Luis Alberto Rico, Alfredo Martín Reyes, Alberto Castañeda, Felipe Vicencio y Rómulo Campuzano (PAN), César Ojeda, Raymundo Cárdenas, Jesús Ortega, Serafín Ríos y Saúl López (PRD). A favor del dictamen hablaron: Eric Rubio, Fauzi Hamdan Amad, Verónica Velasco, Cesar Camacho, Mariano González, Emilio Gamboa y José Antonio Aguilar (PRI) y Héctor Larios (PAN).

Aunque fueron reservados once artículos de los catorce de la reforma a la LFT, y 22 de los 32 de la LFRT, el dictamen se tenía que votar primero en lo general, para posteriormente dar paso a la discusión en lo particular. La votación general arrojó el saldo de 81 senadores a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones:

Votación			
Partido	Favor	Contra	Abstención
PRI	44	11	1
PAN	30	13	3
PRD	0	15	0
PVEM	4	0	0
Convergencia	0	1	0
Independientes	3	0	0
TOTAL	81	40	4

No importó el argumento que se utilizó por los diversos senadores que justificaban la reserva de cada uno de los artículos revisados, la mayoría de los legisladores “tenían la indicación” de votar la minuta en sus términos. Ni siquiera se aprobó la corrección del artículo 3 transitorio de la LFT, que tenía un error, al señalar: “La primera designación del presidente de la Comisión se hará mediante el nombramiento por cuatro años, y la hará, por única vez, el Titular del Ejecutivo Federal siguiendo el procedimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 9 E de esta ley”, el error consistía en que no era el artículo 9 E el que señalaba el procedimiento, sino el 9 C¹⁰⁰. Finalmente, el saldo de la discusión de cada uno de los artículos reservados fue el siguiente:

Ley Federal de Telecomunicaciones					
Artículo reservado	Orador	Partido	Estado	Postura con respecto al artículo reservado	Resolutivo de Asamblea
3	Javier Corral	PAN	CHI	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
9	Alfredo Reyes	PAN	AGS	En contra	
	Javier Corral	PAN	CHI	En contra	

¹⁰⁰ el día 5 de abril, el subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, cabildeó con los coordinadores del PRI y del PAN para introducir una fe de erratas, pero no se podía simplemente señalar un error de dedo (modificación de la cláusula 9E por 9C, ya que los Senadores habían votado a favor de no modificarla, por lo que era un acto soberano y por lo tanto no se podía introducir la fe de erratas.

	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	
	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	En contra	
	Raymundo Cárdenas	PRD	ZAC	En contra	
	Emilio Gamboa	PRI	Pluri	A favor	
	Eric Rubio	PRI	Pluri	A favor	
	José A. Castañeda	PAN	YUC	En contra	
	Héctor Osuna	PAN	BC	A favor	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
9C	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	
	Rafael Melgoza	PRD	MICH	En contra	
	Alfredo Reyes	PRI	AGS	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
9D	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	
	Raymundo Cárdenas	PRD	ZAC	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
9E	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
13	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
64	José A. Castañeda	PAN	YUC	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
2 Tran	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	
	Raymundo Cárdenas	PRD	ZAC	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
3 Tran	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
4 Tran	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
5 Tran	Alfredo Reyes	PAN	AGS	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
Ley Federal de Radio y Televisión					
Artículo reservado	Orador	Partido	Estado	Postura con respecto al artículo reservado	Resolutivo de Asamblea
3	Rafael Palacio	PRD	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
9	Alberto Martínez	PAN	SLP	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a

					favor de la minuta en sus términos)
16	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
17C	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
17D	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
17E	Wadi Shabshab	PAN	QR	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
17G	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	En contra	
	Héctor Michel	PRI	COL	En contra	
	Javier Corral	PAN	CHI	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
17J	Antonio Soto	PRD	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
20	Felipe Vicencio	PAN	JAL	En contra	
	Javier Corral	PAN	CHI	En contra	
	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	En contra	
	Francisco Fraile	PAN	PUE	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
21	Raymundo Cárdenas	PRD	ZAC	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
21A	Felipe Vicencio	PAN	JAL	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
23	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
28	Javier Corral	PAN	CHI	En contra	
	Raymundo Cárdenas	PRD	ZAC	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
28A	Javier Corral	PAN	CHI	En contra	Rechazan argumento y

					votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
72A	Felipe Vicencio	PAN	JAL	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
79A	Raymundo Cárdenas	PRD	ZAC	En contra	
	Héctor Michel	PRI	COL	En contra	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
59 Ter	José Castañeda	PAN	YUC	Propone adición	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
92A, 92B, 92C, 92D	Saúl López	PRD	GRO	Propone adición	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)
2 Tran	Dulce M. Sauri	PRI	Pluri	enriquecer	
	Manuel Bartlett	PRI	Pluri	enriquecer	
	César Ojeda	PRD	TAB	enriquecer	
	Javier Corral	PAN	CHI	enriquecer	Rechazan argumento y votan en contra (O sea, a favor de la minuta en sus términos)

De esta manera, quedó aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma a la LFRT y a la LFT, pasando al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes. La sesión terminó a las 03:39 del día siguiente. Se reformaron tres artículos y se adicionaron dos a la LFT, mientras que se reformaron 13 y se adicionaron seis a la LFRT.

La reforma paralela

El 4 de abril se publica en la gaceta parlamentaria del Senado, por acuerdo de los coordinadores del PRI, Enrique Jackson, y del PAN, Héctor Larios, como dictamen de primera lectura, la iniciativa de reforma presentada por Héctor Osuna y Eric Rubio. Dos días después, el día 6 de abril, se publica en ese mismo medio, como dictamen para discusión (segunda lectura). Al no haber introducido la fe de errata con respecto a la corrección del tercer artículo transitorio de la LFT, esta modificación se incorpora en este dictamen, y ya que es diferente al publicado dos días antes la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado determina que quede únicamente de primera lectura (Cámara de Senadores, 2006 (II)).

El día 20 de abril el dictamen de segunda lectura se agenda para su discusión. Antes de que ésta inicie, se lee un comunicado del senador César Ojeda, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con el propósito de ilustrar el debate. En el escrito del senador Ojeda, dirigido a Héctor Osuna, se manifiesta el desacuerdo del trámite que se le ha dado al dictamen, ya que “las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, otra vez no fueron convocadas a una reunión para analizar, discutir y aprobar el nuevo proyecto de dictamen” (Cámara de Senadores, 2006 (III)). Por esta razón, el senador Antonio Soto Sánchez, presentó una moción suspensiva para la discusión y votación del dictamen, la cual tras un largo debate es rechazada por la mayoría de los senadores.

En contra del dictamen hablaron: Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y David Jiménez (PRI), Antonio Soto (PRD), Javier Corral, Felipe Vicencio, Alfredo Reyes y José Castañeda (PAN). A favor lo hicieron: José Bonilla, Mariano González, Eric Rubio y Héctor Michel (PRI), Héctor Osuna y Jorge Abel López (PAN). Después de tres horas de discusión, el Senado aprobó la

reforma paralela, con votación de 62 a favor y 24 en contra (Cámara de Senadores, 2006 (III)), para después ser enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Sin embargo, la reforma paralela no tuvo la misma suerte en la cámara revisora, ya que prácticamente quedó congelada. Dulce María Sauri mencionó dos posibles razones. La primera, que Roberto Madrazo, no sintió el apoyo que Televisa le había prometido, por lo que le pidió a los legisladores de su partido “meter a la congeladora la minuta”. La segunda, cuando los diputados se enteraron de que un grupo de senadores había interpuesto una acción de inconstitucionalidad, decidieron esperar el fallo para revisar el ajuste.

Capítulo 5

La acción de inconstitucionalidad, la discusión y el fallo de la Corte

El jueves 4 de mayo, los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett convocaron a una rueda de prensa para presentar el proyecto de solicitud de acción de inconstitucionalidad, presentada por 47 senadores¹⁰¹, el cual documentaba 21 violaciones a 27 artículos de la Constitución, donde destaca, de acuerdo con Bartlett, la violación los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, “ya que se priva al Estado de su potestad de decidir si otorga o no una concesión y se le despoja de su rectoría sobre el espectro radioeléctrico”.

Después de señalar los objetivos de la acción de inconstitucionalidad, Javier Corral y Manuel Bartlett, acompañados de los senadores César Ojeda (PRD), Felipe Vicencio (PAN), Raymundo Cárdenas (PRD), Alfredo Reyes Velázquez (PAN), Noemí Guzmán (PRI), Filomena Margaiz (PAN) y Joaquín Cisneros (PRI), caminaron hacia la SCJN por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, acompañados por un centenar de manifestantes del Frente Nacional para la Democratización de los Medios de Comunicación¹⁰², así como de periodistas, académicos, estudiantes y representantes de otras organizaciones de la sociedad civil. El documento se recibió en la Oficialía de Partes de la Corte, y sería derivado al Ministro Salvador Aguirre Anguiano.

En el ámbito de la carrera electoral, las encuestas señalaban en esas fechas un “empate técnico” entre López Obrador y Felipe Calderón. En este punto, puede observarse lo que posiblemente fue instrumentación de la negociación entre Televisa y el PAN, que señala Felipe Vicencio, esto es, el recibir la cantidad y contenido de *spots* sin ninguna restricción, incluso sobrepasando el límite

¹⁰¹ 16 del PRI, 15 del PAN, 15 del PRD y 1 de Convergencia.

¹⁰² Organización social creada el 26 de abril de 2006.

señalado por el IFE, ya que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)¹⁰³ y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)¹⁰⁴, a través de dos de sus organismos, iniciaron una campaña televisiva en contra de López Obrador a tan sólo 12 días de que tuviera lugar la elección¹⁰⁵. Uno de los *spots* de la iniciativa privada recordaba la debacle económica de los años 80, en alusión al modelo económico que proponía López Obrador. El segundo *spot* continuaba asociando la imagen de Andrés Manuel con la de Hugo Chávez¹⁰⁶

Al respecto Francisco Aceves señaló:

La irrupción de los empresarios en la publicidad televisiva se daba en una coyuntura marcada por el descenso del candidato panista en las referencias electorales de las encuestas que se difundieron hacia el 14 de junio y la confrontación directa que se había manifestado entre los organismos de la cúpula empresarial y el candidato de la Coalición debido a su denuncia sobre la evasión de impuestos en que incurrían y el régimen privilegiado del que gozaban.

El 15 de junio Alberto Núñez Esteva, presidente de la COPARMEX le dirigió una carta al Consejero Presidente del IFE para notificarle que no le transmitiría a sus asociados la recomendación de abstenerse a realizar actividades que pudieran interpretarse como presión o coacción al voto, porque sería una “intromisión al ejercicio de la libertad de nuestra membresía”,¹⁰⁷ a pesar que los promocionales representaban una clara violación al artículo 48 del *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales* (COFIPE),

¹⁰³ “Enfrenta *spot* a AMLO e IP”, Reforma, 27 de junio de 2006

¹⁰⁴ “Patrocinó Coparmex *spots* contra AMLO”, *El Universal*. 23 de junio de 2006. El Celiderh recibía patrocinio por parte de la Confederación Obrero Patronal de México (Coparmex).

¹⁰⁵ Dos años después, en mayo de 2008, la Junta General Ejecutiva del IFE dio a conocer un proyecto de dictamen (<http://www.jornada.unam.mx/2008/05/15/index.php?section=politica&article=015n1pol>) en donde el Consejo Coordinador Empresarial y Televisa fue encontrados culpables de violar la ley electoral por los promocionales difundidos. Asimismo, según el proyecto de dictamen, incurrieron en responsabilidad en entonces presidente Vicente Fox y al candidato, Felipe Calderón, de violar el marco legal y la tregua navideña de 2005.

¹⁰⁶ En este *spot* se veían acciones violentas en las calles de Caracas, y la imagen del presidente venezolano diciendo “Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov, para armar pues a nuestro pueblo”. El mensaje del *spot* señalaba “en México no necesitas usar armas para defender tus ideas... Sólo tienes que votar, ¡ármate de valor y vota!”

¹⁰⁷ “Rechaza COPARMEX disposición del IFE”, Reforma, 16 de junio de 2006

que prohíbe expresamente la contratación de publicidad electoral por parte de particulares, el Consejo General del IFE abordó el tema de los *spots* del CCE hasta el 22 de junio. El tema originó un debate entre los consejeros sobre la libertad de expresión que los empresarios aducían para justificar sus *spots*. En cierto momento el Consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, les recordó que el tema no era la libertad de expresión sino “la aplicación estricta del COFIPE de la cual (...) nosotros somos garantes”. No obstante esta aclaración y con el desacuerdo de algunos consejeros, el Consejo General del IFE sólo avaló el envío de una comunicación epistolar del Consejero Presidente, en la que expresaban a los empresarios su preocupación sobre el contenido de los *spots*.

En el caso del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C. (CELIDERH) no fue sino hasta el 26 de junio que el consejero presidente del IFE, dirigió una misiva a su director Rodrigo Ruiz Gandarilla, para que ordenara la suspensión inmediata de la transmisión de sus promocionales. Le expresaba que “el Consejo General del Instituto desapueba el uso de mensajes violentos que puedan infundir temor en los electores, mediante imágenes de violencia y uso de armas, que corresponden a realidades ajenas al contexto que se vive en México”.¹⁰⁸ El organismo no solamente no suspendió sus mensajes en la forma “inmediata” en que era requerido, sino que el 28 de junio, último día permitido para realizar actividades de campaña electoral, difundió un largo *spot* justamente a continuación del programa que transmitió “en vivo” el cierre de campaña de López Obrador. (Aceves, 2007)

A la media noche del 28 de junio terminaron las campañas en los medios. En las elecciones del 2 de julio, los resultados oficiales fueron los siguientes: para Felipe Calderón: 15'000, 284 (35.89%), Andrés Manuel López Obrador: 14'756, 350 (35.31%), para Roberto Madrazo: 9'301,441 (22.26%). Tras la impugnación de la elección y la exigencia del PRD de un recuento de votos, con la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cifras cambiaron, aunque no el resultado. El 5 de septiembre de 2006 el dictamen del tribunal asentó la

¹⁰⁸ “Pide el IFE retirar *spots* que infunden temor electoral”, Diario *Milenio*. 27 de junio de 2006

votación definitiva: para Calderón: 14'916, 927 (35.89%), López Obrador: 14'683,096 (35.33%), Madrazo: 9'237,000 (22.23%).¹⁰⁹ Con lo que Felipe Calderón se convertía en el presidente número 73 de México.

Un año después: se reanuda el debate y la *guerra sucia*

Casi un año después de que se había presentado la solicitud de acción de inconstitucionalidad, se reanudó el debate cuando la SCJN anunció que comenzaría la discusión sobre el tema. Ante esta situación, Televisa, ahora con el apoyo de TV Azteca, se prepararon para embestir al Poder Judicial Federal. Utilizaron de nuevo su estrategia para desinformar y tergiversar la realidad, aunque primeramente probaron su efectividad contra la Sociedad Palmas 26, compuesta por General Electric y Grupo Saba, pues éstos pretendían participar en la licitación de una tercera cadena nacional de televisión. El duopolio televisivo inició en sus noticiarios una agresiva campaña contra Isaac Saba, acusando a su grupo empresarial de “controlar la distribución de fármacos y encarecer el mercado de medicinas”.¹¹⁰ Finalmente el Gobierno Federal cancelaría el proyecto de licitación.¹¹¹

En el mes de mayo, a tan sólo unas semanas de que la Corte iniciara el análisis de la acción de inconstitucionalidad, el senador Santiago Creel declaró que había habido presión para aprobar la

¹⁰⁹ www.ife.org.mx

¹¹⁰ *Revista Proceso*, México D.F., enero de 2007.

¹¹¹ En el mes de febrero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, declaró que quedaba descartada la licitación de una tercer cadena, y que Telemando, filial de General Electrics, no podía entrar a México, debido a las restricciones legales a la inversión de extranjeros en el sector “tal y como se dan en Estados Unidos y que afectaron a Televisa al intentar comprar Univisión, porque no podía tener más de 25%. Entonces, nosotros tenemos una ‘legislación espejo’, y por supuesto vamos a ayudar a nuestras empresas” (www.javiercorral.com, 19 de febrero de 2007).

minuta en el Senado: “las cosas fueron más bien una imposición que una negociación. En donde la visión fue única, y no la visión que surge de la pluralidad de intereses que deben estar en juego en un acuerdo final”¹¹². La CIRT emitió un boletín lamentando dicha declaración y retando al Senador de presentar las pruebas sobre su afirmación.

La semana del 14 al 18 de mayo de 2007, los noticieros de Televisa y TV Azteca dedicaron hasta 15 minutos al proceso que se iniciaría en la Corte a partir del día 21 de mayo. Este mismo día la autoridad electoral inició una investigación especial porque en esa fecha existían 281 mil *spots* transmitidos en radio y televisión que no estaban amparados en facturas. “De este total de *spots*, 32,867 corresponden a la televisión, según las cifras del mismo IFE (de su sistema de monitoreo). Si tan sólo el gasto unitario por cada uno de esos promocionales fuera de diez mil pesos –una cifra realmente ridícula, dado que el precio promedio era de 50 mil a 100 mil pesos- estamos hablando de más de 320 millones de pesos cuyo destino se desconoce.” (Villamil, 2007: 6).

También en estas fechas, en los noticiarios criticaban a Corral y a Bartlett, por su postura frente a la LFRT y a la LFT. Las televisoras utilizaron la opinión de Corral acerca de la COFETEL, para propiciar su golpe más bajo. Según Televisa y TV Azteca, el ex senador exigía, el 21 de agosto de 2002, que la COFETEL fuera autónoma; mientras que el 18 de mayo de 2007 “había cambiado de idea”¹¹³. Para TV Azteca este organismo era la clara muestra del avance democrático de nuestra nación, al ser “autónomo” de la discrecionalidad del Presidente de la

¹¹² Programa radiofónico *Hoy por Hoy*, con Carmen Aristegui, 4 de mayo de 2007, W Radio, 96.9 FM, Televisa Radio.

¹¹³ Obviamente no se mencionaba que el proyecto de iniciativa de reforma a la LFT de 2002 era una propuesta plural, mientras que la que se aprobó en marzo de 2006 había sido redactada en Televisa. Tampoco se mencionó que tres de los comisionados de esa Cofetel que Corral criticaba, servían a los intereses de las televisoras, y los otros dos al PRI y al PAN.

República¹¹⁴, La opinión editorial de Sergio Sarmiento, en el noticiero nocturno de TV Azteca del 18 de mayo, señalaba que grupos políticos “viejos”, en clara referencia a Corral y Bartlett, se negaban a que los medios tuvieran libertad, y que fueran un contrapeso del poder, en este sentido se acusó a los ex senadores a estar a favor de regresar a los tiempos de antes, o sea, al autoritarismo. Tal y como lo señaló Jenaro Villamil en uno de sus artículos, “Televisa y TV Azteca decidieron ignorar la deliberación que inauguró un método inédito de discusión pública y televisada, solamente por las señales restringidas del Canal Judicial y del Canal del Congreso”.¹¹⁵

Sarmiento también justificó que las concesiones se otorgaran por veinte años con una prórroga automática por otros veinte, o sea cuarenta años. En este sentido señaló “¿Usted pondría un negocio para que luego se lo quitaran? Es lo mismo con los medios de comunicación”. Para ilustrar la contraparte podríamos hacer una pregunta similar: ¿Usted pondría en renta su casa y permitiría que los inquilinos ya no se la regresaran? Es lo mismo con los medios de comunicación.

El editorial de la revista *Vértigo*, de TV Azteca, fue de hecho más agresiva. Además de volver a acusar a Corral de contradictorio y de buscar su interés personal, se señaló a Bartlett como implicado en el asesinato del periodista Manuel Buendía, cuando el ex senador fungió como Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, además de “controlar todo tipo de reformas para hacer un país más justo y plural”, y haber tenido relación con el narcotráfico cuando era gobernador de Puebla¹¹⁶.

¹¹⁴ El 15 de mayo de 2007, en el noticiario Hechos, con Javier Alatorre (canal 13 TV Azteca), se abrió una encuesta telefónica, con el título: ¿Quién debe supervisar a la radio y a la TV? Las dos opciones eran: el gobierno, y Un organismo autónomo. Del total de 8,728 llamadas, 22% señalaba la opción del gobierno, mientras que el 78% al organismo autónomo.

¹¹⁵ *Revista Zócalo*, número 88, junio de 2007, p. 11.

¹¹⁶ *Revista Vértigo* No. 322, 20 de mayo de 2007, pág. 13.

De igual manera, *Vértigo* atacó al Ministro Aguirre Anguiano señalando que “la postura asumida por el ministro Salvador Aguirre Anguiano, cuya ponencia tiene enormes coincidencias con la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores de la legislatura anterior, entre los que se encuentran Manuel Bartlett Díaz y Javier Corral Jurado, representa un severo golpe a la democracia y a la libertad que tanto esfuerzo ha costado a México, un retroceso al desarrollo político del país de consecuencias incalculables para nuestra democracia”¹¹⁷.

Casualmente, alrededor de estas semanas, tres gobiernos de izquierda de centro y Sudamérica (Ecuador, Bolivia y Venezuela) impulsaron acciones legales en contra de los medios de telecomunicaciones¹¹⁸, por lo que la postura de los noticiarios locales fue en el sentido de señalar que una resolución a favor de la acción de inconstitucionalidad dañaría la libertad de expresión y la democracia, los noticieros también dedicaron un espacio considerable al tema de la no renovación de la concesión a la televisora venezolana RCTV, por parte del gobierno de Hugo Chávez¹¹⁹. Si bien no había una relación formal directa, las televisoras implícitamente

¹¹⁷ <http://www.etcetera.com.mx/pagaguirre02ne79.asp>

¹¹⁸ A principios del mes de abril el Presidente de Bolivia, Evo Morales, había ordenado estatizar las telecomunicaciones, donde la compañía italiana Stet, luego absorbida por Telecom, compró en 1996 el 51% de las acciones de Entel-Bolivia, en 610 millones de dólares. El 49% restante pertenece a los bolivianos a través de fondos de pensión y a los trabajadores de la empresa en una mínima parte. (*La Jornada*, 3 de abril de 2007)

En el mes de junio, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso impulsar una reforma para prohibir en la nueva constitución la relación entre grupos financieros y medios, pues “varias de las televisoras que transmiten en Ecuador, entre ellas Teleamazonas, Telecentro, Gamavisión y Cable Noticias, son financiadas por reconocidos banqueros, que también son propietarios de periódicos, radios y revistas, según un estudio de la Universidad Central (estatal) publicado en 2006.” (Diario Público, 13 de junio de 2007)

¹¹⁹ Ya desde el 17 de junio de 2006 el Presidente Venezolano, había ordenado revisar las concesiones de los canales privados de televisión que vencían a partir de enero de 2007. 5 meses después, Chávez advirtió que estaba dispuesto a cerrar los canales de televisión que se prestasen para difundir mensajes de “odio” y desconocimiento de las autoridades durante las elecciones del 3 de diciembre de ese año, y el 28 de diciembre anunció que no renovarían la concesión a RCTV. el 23 de mayo, precisamente cuando comenzaba a discutirse en la SCJN la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo venezolano sentenció a que el canal de televisión RCTV debía dejar de transmitir el 28 de mayo (Diario Reforma 18 de junio, 17 de noviembre, 29 de diciembre de 2006, 23 de mayo de 2007). “En los últimos tres minutos, RCTV difundió imágenes de simpatizantes de la compañía privada que entonaron el himno nacional venezolano y en punto de las 24 horas la pantalla se oscureció, para que instantes después entrara en su lugar la barra de colores que identifica a Tves, con la leyenda “ahora el compromiso es mayor”.

equipararon los procesos. Al respecto, la CIRT manifestó en *spots* radiofónicos su "rechazo absoluto a las resoluciones autoritarias que lesionan la libertad de expresión, de trabajo y, principalmente, el derecho de las personas a sintonizar la emisora de radio y televisión de su preferencia"¹²⁰.

La opinión constante en las televisoras fue que si la Corte declaraba los artículos impugnados como inconstitucionales, y no en el sentido de apoyar a la radio y televisión, éstas sufrirían un daño irreversible. De igual manera opinó la COFETEL. Debido a la tergiversación de la información, nunca se señalaría que si la Corte declaraba la inconstitucional, el siguiente paso sería reformar los artículos afectados en mejores términos, o sea con una discusión en el Congreso más plural, con la simple inconveniencia para las televisoras de que no podrían volver a pasar “la bola rápida” en ninguna de las Cámaras.

El diario *Excélsior*, de la ciudad de México, que un año atrás había sido crítico de la *Ley Televisa*, en este nuevo proceso cambió su postura¹²¹, e incluso se convirtió en uno de sus principales defensores y lo demostró al censurar un texto de Ana Laura Magaloni¹²² y al no cubrir la discusión del debate, ya que “el lunes 21 de mayo la SCJN inició el análisis sobre la Ley de Medios y la prensa así lo constató, *Excélsior* lo hizo en una pequeña nota en interiores y no recogió las expresiones que, un día antes, hubo en contra de esas normas como sí lo hicieron varios periódicos, entre otros *Crónica*, *La Jornada* y *El Financiero*. En cambio, en el centro de su

(*La Jornada*, 28 de mayo de 2007). Sin embargo, el 16 de julio de 2007, RCTV reinició sus transmisiones por televisión por cable y por Internet en el dominio RCTV.NET.

¹²⁰ *La Jornada Electrónica*, www.jornada.unam.mx 5 de mayo de 2007.

¹²¹ El 23 de julio de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes favoreció a Olegario Vázquez Raña, dueño de este periódico, para que adquiriera el Canal 28, que en estos momentos estaba en quiebra financiera. Fue a partir de estos momentos en que el diario atenuó su crítica a la Ley Televisa.

¹²² El cual finalmente sería publicado por Diario *Reforma* el 11 de mayo de 2007.

portada, *Excelsior* destaca el “Paseo de las bellezas”, o sea, las candidatas a Miss Universo que visitaron la glorieta del Ángel de la Independencia”¹²³

La SCJN y la acción de inconstitucionalidad

La función de la SCJN, como tribunal constitucional es confrontar el texto de lo que dice la ley; de esta manera realizar un pronunciamiento judicial de constitucionalidad. El enfoque de la SCJN es que se realiza un trabajo técnico, que deja fuera las posiciones políticas, ya que la argumentación jurídica debe estar apegada al texto constitucional, y no a una argumentación política.

De acuerdo con la propia SCJN, existen dos tipos de controles de la constitucionalidad. El primero, denominado control *difuso o americano*, determina la posibilidad de que cualquier juzgador, sin importar el ámbito en el que desarrolla sus funciones, se pronuncie sobre la constitucionalidad de una ley y en su caso deje de aplicarla a un caso concreto. El segundo tipo es el sistema de control *concentrado o austriaco*, en donde el examen de una norma probablemente inconstitucional es privativo de un sólo órgano, que puede llamarse Corte Constitucional o Tribunal Constitucional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007: 9). Las reformas de 1994 al Poder Judicial en México,¹²⁴ reforzaron el carácter de órgano de control constitucional de la SCJN.

Los medios de control constitucional son: el juicio de amparo, la controversia constitucional, y la acción de inconstitucionalidad. Los primeros dos tipos van contra actos o leyes (o poderes), pero

¹²³ *Revista Etcétera* No. 80, Junio de 2007, p. 26

¹²⁴ Publicadas el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.

no tienen efectos generales. La votación de los ministros puede darse en seis - cinco. En cambio, la acción de inconstitucionalidad tiene el objetivo de derogar una norma, pero la votación debe ser calificada, esto es, de ocho-tres ministros de la Corte. La SCJN ha establecido siete características de la acción de inconstitucionalidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007: 19):

1. Se promueve para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una de la Ley Fundamental.
2. Puede ser promovida por el Procurador General de la República, los partidos políticos y el 33%, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma¹²⁵.
3. Supone una solicitud para que la SCJN analice en abstracto la constitucionalidad de una norma.
4. Se trata de un procedimiento.
5. Puede interponerse para combatir cualquier tipo de normas.
6. Sólo procede por lo que respecta a normas generales.
7. La sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobadas por lo menos por ocho ministros¹²⁶.

Se entiende por norma: ley, artículo o parte de éste. La corte puede fallar a favor o contra la acción de inconstitucionalidad, aunque también puede ser de manera parcial, esto es, contra algún concepto de invalidez o contra algún párrafo del artículo impugnado. Los criterios de minoría (Voto minoritario) no tienen un valor jurídico, aunque sí para conocer el debate y las razones para llegar a otros criterios. De igual manera desde una postura académica y de jurisprudencia, al conocer el debate y las ideas generadas alrededor de un caso. El principal problema de la Corte es

¹²⁵ La demanda de acción de inconstitucionalidad debe presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que la norma general –ley o tratado internacional– impugnada sea publicada en el medio oficial correspondiente (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007)

¹²⁶ En caso contrario, se desestimará la acción ejercida y se ordenará el archivo del asunto. Por otra parte, dictada la sentencia, el presidente de la SCJN ordenará notificarla a las partes y publicarla íntegramente en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junto con los votos particulares que se formulen. Ahora bien, cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el propio presidente de la Corte ordenará también su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieran publicado (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007).

que hay un desconocimiento de cómo funciona ésta, y la incapacidad de la misma para poder dar a conocer a los ciudadanos acerca de su función y lógica.

Andrea Zambrana, Secretaria de Estudio y Cuenta del Ministro Salvador Aguirre, ha señalado que “Obviamente al interpretar la constitución, se cuelean consideraciones de tipo político, ético y filosóficas. Constitucionalmente, el único que está capacitado para interpretar la Constitución es la SCJN. Aunque también se acepta que existen consideraciones políticas constreñidas por los métodos de interpretación”¹²⁷.

El camino de un proyecto de resolución es el siguiente: Éste se redacta por la Secretaria de Estudio y Cuenta. En este caso, Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer McGregor, María Estela Ferrer McGregor. El ministro ponente lo revisa y da sus puntos de vista, después lo aprueba. Al ser aprobado, el proyecto se circula, es decir, se les da a conocer a los demás ministros. El proyecto contiene *resultandos*, que son los antecedentes y *considerandos*, que son las consideraciones. Finalmente el resolutivo o sentencia.

La discusión se realiza en la sesión de pleno, cada Ministro opina acerca del proyecto y defiende sus posturas. En la sesión puede reformarse el proyecto. Cuando se adiciona se le llama “engrose”, lo que es anexar los documentos de discusión y los cambios aprobados. Puede ser que todos los ministros estén en contra del proyecto, por lo que el Ministro ponente puede realizar un voto minoritario, e incluso, pedir a otro Ministro que se haga cargo de ese asunto.

Si no hay una votación calificada (ocho-tres), entonces se desestima la acción, esto es, la Corte no decide si es anticonstitucional o no, sino que se deja el asunto como está y sus consideraciones son mínimas. La acción de un tribunal tiene un contexto político. Sin importante las razones que

¹²⁷ Entrevista realizada a Andrea Zambrana, 4 de enero de 2007, SCJN, México, DF.

expresa la corte para tomar una decisión, aunque éstas no se sustraen de un concepto político. “La Corte es un actor político, pero no actúa políticamente”¹²⁸.

En el caso de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, el proyecto se terminó y se aprobó, por el Ministro Aguirre Anguiano, en el mes de agosto de 2006, “pero no fue circulado, ya que el Ministro ponente decidió esperar al cambio de gobierno federal, aunque también a finales de año la Corte le da preferencia a otros asuntos que tienen que ver con el año fiscal que termina”¹²⁹. Lo que se encuentra el *litis* en el proyecto es: la función, atribuciones y elección de Consejeros de la COFETEL; el acceso de las comunidades indígenas a los medios; y el espacio aéreo como bien propiedad de la nación.

En opinión de Zambrana, fue un error de la COFETEL, o la instancia correspondiente, el haber otorgado autorizaciones concernientes a la convergencia digital, estando pendiente la resolución de la acción de inconstitucionalidad. Antes de la circulación del proyecto, Zambrana aceptó que las partes en conflicto han tratado de cabildear el asunto con los ministros, “pero este litigio es transparente al haber la misma oportunidad de ser escuchados: hay partes, hay intereses y hay un litigio”¹³⁰.

En la segunda semana de junio de 2006, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, entregó una opinión jurídica al ministro Salvador Aguirre Anguiano, en donde señalaba que “Las leyes Federal de Radio y Televisión y Federal de Telecomunicaciones son inconstitucionales, porque contravienen acuerdos internacionales relacionados con el derecho a la información y a la libertad de expresión; porque no otorgan igualdad jurídica entre los

¹²⁸ Entrevista realizada a Andrea Zambrana, 2007, Ibid.

¹²⁹ Entrevista realizada a Andrea Zambrana, 2007, Ibid.

¹³⁰ Entrevista realizada a Andrea Zambrana, 2007, Ibid.

concesionarios y porque contiene requisitos “desproporcionados” para los que operan estaciones de radiodifusión culturales, educativas, de investigación y oficiales”¹³¹.

Previo a las sesiones de discusión, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los ministros Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Sergio Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas, Juan Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela recibieron en grupo a los actores de este proceso. Primeramente, en un día, fueron escuchados quienes defendían la *Ley Televisa*, entre ellos el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Enrique Pereda Gómez, los abogados de Televisa, y los representantes del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Radiorama y la Confederación de Cámaras Industriales. En otro día recibieron a Manuel Bartlett y a Javier Corral, como representantes de quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad, así mismo asistieron diversos representantes de la sociedad civil, quienes no tuvieron voz: “En este proceso la ciudadanía no tiene un espacio otra vez. Lo que vemos es un debate entre actores políticos, la clase política, el poder judicial y los industriales. Si hoy no vamos (15 de mayo de 2007) no nos hubieran llamado. Somos todavía los ciudadanos prescindibles, no somos una voz a tomar en cuenta. Eso me parece preocupante en términos de participación democrática, o de la propia democracia deliberativa, donde el ciudadano tiene un papel fundamental”¹³².

¹³¹ Diario *La Jornada*, México, D.F., 15 de junio de 2006.

¹³² Entrevista realizada a Alma Rosa Alva de la Selva, 2007, Ibid.

La discusión en el Pleno de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad

El pleno de la SCJN está integrada por 11 Ministros¹³³. Para la discusión de la acción de inconstitucionalidad sólo participarían nueve de ellos, ya que el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se encontraba convaleciente de una enfermedad delicada; y una excusa personal, por haber un conflicto de intereses, de acuerdo con la fracción XVII y XVIII del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que obligó al Ministro José Ramón Cossío Díaz, a abandonar el debate¹³⁴.

La sesión del Pleno de la Corte, en su carácter de pública, fue transmitida a lo largo de diez sesiones¹³⁵ por el Canal del Congreso, por el Canal Judicial, y por el portal de Terra, donde se habilitó un Chat paralelo a la transmisión. Las últimas sesiones también fueron transmitida a través de la página del *Grupo Reforma* (diario *Reforma*, México D.F.; diario *Mural*, Guadalajara; diario *El Norte*, Monterrey; y diario *Palabra*, Saltillo).

¹³³ Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (Presidente), Ministro Mariano Azuela Güitrón, Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ministro José Ramón Cossío Díaz, Ministro José Fernando Franco González Salas, Ministro Genaro David Góngora Pimentel, Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Codero de García Villegas, Ministro Juan N. Silva Meza, Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

¹³⁴ De acuerdo con la justificación del propio Ministro Cossío Díaz, las causas de su impedimento fueron las siguientes: En el año de 2002 celebró un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, a efecto de revisar la constitucionalidad del anteproyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones. Posteriormente celebró con la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otro contrato para llevar a cabo un análisis jurídico constitucional de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.

Posteriormente a la celebración de estos dos contratos, se incorporó a una comisión que se había formado básicamente en el Senado de la República para llevar a cabo la redacción de la nueva Ley de Telecomunicaciones, en ese grupo participaron el senador Javier Corral, el senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez por el Partido Acción Nacional. Por parte del Partido Revolucionario Institucional los senadores Manuel Bartlett, Genaro Borrego y Oscar Cantón y del PRD el senador Raymundo Cárdenas y el senador Jesús Ortega. También algunos académicos conocedores de los medios como Javier Esteinou, Raúl Trejo, Beatriz Solís.

¹³⁵ Se llevaron a cabo dos sesiones previas donde se consultó a expertos en la materia de telecomunicaciones, y las ocho donde se abordó la discusión.

Las primeras dos sesiones, realizadas los días 21 y 22 de mayo de 2007, se convocó a seis expertos en materia de telecomunicaciones: tres de la UNAM, y tres del IPN. Los cuestionamientos, previamente entregados, versaron sobre cuestiones netamente técnicas. Se les preguntó que si con el *estándar* tecnológico actual, con la HDTV, se podían enviar otras señales tales como telefonía celular e Internet; y se preguntó cuál era la razón técnica para que los concesionarios de radio y televisión obtuvieran en automático una concesión de telecomunicaciones.

Los expertos señalaban que a través de la señal de 6 Mhz. no podía viajar otra señal, como telefonía celular o Internet, y que además el canal era en un sólo sentido. A la segunda pregunta, titubearon al señalar “que por el avance en la tecnología, tal vez lo que se quería era prever”. Se explicó claramente que una señal de audio y video con menor información, reducía la cantidad de Mhz., pero si se transmitía un partido de fútbol o una carrera de autos, entonces sí se requerirían la totalidad de los Mhz. Con esta respuesta, se enfocaron en la señal común de televisión, más no así a la de cable, por la cual se pueden prestar servicios de telefonía e Internet, lo que sí es un negocio adicional.

En la sesión ordinaria del 24 de mayo, el pleno de la corte resolvió tres conceptos de invalidez, declarando constitucional el procedimiento legislativo del decreto que reforma la LFRT y la LFT. También resultó constitucional la facultad del Poder Legislativo de crear órganos desconcentrados de la administración pública federal, tales como la COFETEL. Así mismo, fue rechazado el argumento de que el Congreso se excedió al derogar tácitamente los reglamentos que el Ejecutivo había expedido en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. Los Ministros resolvieron que las modificaciones fueron válidas en el contexto de lo que permite el

Reglamento Interior del Congreso, más aún que la propia Cámara de Diputados pidió al Senado de la República hacer la corrección (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007 (I)).

En la sesión del 28 de mayo, el pleno de la Corte declaró inconstitucional el artículo segundo transitorio fracción III de la LFT, en donde se señalaba el impedimento para que los anteriores comisionados de la COFETEL pudieran integrar el nuevo órgano. Sobre el artículo tercero transitorio de la LFT, seis de los nueve ministros consideraron inconstitucionales los nombramientos escalonados de los integrantes de la COFETEL, por considerar que son transexenales, pero al no lograrse la mayoría de ocho votos este precepto no se invalidó. Finalmente, de forma unánime, el pleno consideró constitucional el artículo 9 A, fracción 11 de la LFT que faculta a la COFETEL para registrar las tarifas de los servicios y asignar obligaciones específicas a los concesionarios que tengan "poder sustancial en el mercado relevante" (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007 (II)).

En la sesión del 29 de mayo, el pleno de la SCJN declaró inconstitucionales las fracciones I y II del Artículo 20 de la LFRT, La fracción I señalaba que "los solicitantes deberán presentar, por lo menos, la información a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E, así como un programa de desarrollo y servicio de la estación". La fracción II marcaba que "de considerarlo necesario", la Secretaría de Comunicaciones y Transportes "podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate". En cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 17-E, 17-F y 17-G, y 20 y 21-A, de la LFRT, que establecen trato diferencial entre concesionarios y

permisionarios, la votación fue de cinco a cuatro por la inconstitucionalidad de los artículos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007 (III)).

En la sesión del 31 de mayo, el pleno declaró inconstitucional el segundo apartado del artículo 16 de la LFRT. Este párrafo señalaba el refrendo automático sin que el concesionario tuviera que participar de nuevo proceso de licitación. Este fue el único punto discutido en esta fecha.

En la sesión del 4 de junio, Se analizó fracción quinta del artículo 17-E de la LFRT, que establecía que uno de los requisitos para obtener una concesión es presentar "solicitud de opinión favorable" a la COFECO. Esa fracción se invalidó por ocho votos a uno, al eliminarse el término "solicitud de". La redacción quedó entonces en que la "opinión favorable" de la COFECO es uno de los requisitos para obtener la concesión de redes de radiodifusión. Posteriormente el pleno discutió el artículo 9-C de la LFT, en el que el Congreso decidió dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la COFETEL. En la discusión se recordó que en el tema de organismos desconcentrados, la Corte definió un criterio en el sentido de que éstos se encuentran supeditados jerárquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir. Finalmente en esta sesión se declaró constitucional el artículo 79-A de la LFRT, por considerar que no prevé ninguna autorización para que candidatos a puestos de elección popular contraten directamente publicidad en los medios electrónicos, ya que sólo señala la obligación para los concesionarios de informar quiénes han contratado el servicio de radiodifusión (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007 (IV)).

En la sesión del día 5 de junio, los ministros de la Corte declararon inconstitucionales los artículos 28 y 28-A de la LFRT, que permitía a los concesionarios prestar otros servicios de telecomunicaciones sin participar en licitación, con una simple solicitud y sin obligación clara de pago al Gobierno. Así mismo, se declaró la invalidez de la última parte del artículo 17-G que

hace referencia a la subasta pública, que consideraron los ministros una figura no prevista por la Constitución. Finalmente, la Corte consideró que es inconstitucional el plazo fijo de 20 años que se establece en el artículo 16 de dicha ley para el otorgamiento de concesiones, ya que se debe dejar en libertad a la autoridad administrativa para que sea ésta la que determine el plazo (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007 (V)).

En la sesión del día 6 de junio, se expuso el proyecto del ministro Aguirre Anguiano para declarar la anticonstitucionalidad, por omisión legislativa, el desplazamiento para que los pueblos y comunidades indígenas accedan a los medios de comunicación. La votación fue de cinco votos a cuatro¹³⁶, señalando que la acción de inconstitucionalidad, como medio de control de la constitucionalidad, no da margen para declarar una omisión legislativa (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007 (VI)). En este sentido, no se puede declarar inconstitucional una norma que no existe (puesto que ningún artículo de la LFRT señala prohibición explícita a la participación de los pueblos indígenas en los medios de comunicación).

Después de nueve sesiones, dos de ellas en consulta con especialistas, y siete dedicadas al debate, análisis y resolución de la acción de inconstitucionalidad, los ministros ratificaron sus votaciones, de acuerdo con el siguiente resumen:

Declararon inconstitucionales en su totalidad y por unanimidad los artículos 28 y 28-A de la LFRT en los que, a juicio de los demandantes, se estableció un régimen de privilegios para los concesionarios de televisión, a quienes se permitía prestar servicios adicionales en telecomunicaciones (Internet, telefonía celular, transmisión de voz y datos, entre otros) sin licitación y sin el pago de una contraprestación al Estado. Igualmente, se declararon inconstitucionales, y se derogaron, partes del artículo 9-C de la LFT, y 16 de la LFRT que permitían concesiones por 20 años y el refrendo automático y prácticamente a perpetuidad de las mismas.

¹³⁶ Quienes votaron a favor de la inconstitucionalidad fueron los Ministros Salvador Aguirre, Olga Sánchez, Genaro Góngora y Juan N. Silva.

También se anuló la subasta pública -contenida en el artículo 17-G- como criterio único para otorgar concesiones de radio y televisión, y la sola presentación de "solicitud de opinión favorable, presentada" a la COFECO. Es decir, con la invalidez de la fracción V del artículo 17-E, será indispensable la opinión favorable de la COFECO, y no la mera solicitud a ese órgano antimonopolio, para el otorgamiento de concesiones.

Se declararon inconstitucionales parte de las fracciones primera y tercera del artículo 20 de la LFRT, que daban facultades discrecionales a la autoridad para otorgar o no permisos de radiodifusión a organismos sociales, educativos, experimentales y comunitarios. La SCJN invalidó también un tramo de los artículos 9-C y segundo transitorio párrafo tercero de la LFT, que facultaban al Senado a objetar los nombramientos de los integrantes de la COFETEL designados por el Ejecutivo federal, que establecieron que no serían elegibles a esa comisión quienes ocupaban el cargo de comisionados antes de la entrada en vigor de la *ley Televisa*.

Entre los artículos que los ministros reconocieron como válidos están aquellos que establecen un trato diferenciado a concesionarios y permisionarios de frecuencias de radio y televisión; la posibilidad de refrendar las concesiones y la preferencia sobre terceros que tienen los actuales empresarios del ramo, y la integración actual de la COFETEL, así como los nombramientos escalonados de sus integrantes y el hecho de que sean nombrados y removidos únicamente por el Ejecutivo federal.

Por otra parte, el pleno rechazó declarar inconstitucional "por omisión" la *ley Televisa*, al no incluir un marco normativo para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir y administrar medios de radiodifusión. En la mayoría de los artículos que quedaron vigentes hubo opiniones encontradas, pero no se alcanzaron los ocho votos para anular dichos preceptos.¹³⁷

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, aunque reconoció la transparencia con que la SCJN llevó a cabo la discusión, también señaló su preocupación de que la modernización

¹³⁷ Diario *La Jornada*, México, D.F., 8 de junio de 2007.

digital se frenase al impedirse la convergencia.¹³⁸ Las empresas Televisa y Televisión Azteca señalaron ese mismo día (7 de junio de 2007) su posición frente al fallo de la SCJN de Justicia. En su noticiero nocturno, en el canal 2 de Televisa, Joaquín López Dóriga fijó la postura de su empresa y leyó un comunicado de prensa de tres puntos.¹³⁹ Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, en entrevista, señaló que su televisora aceptaba los cambios a la LFRT.

Después del fallo, diversos actores manifestaron lo que a su criterio debían ser los pasos siguientes. Los ex senadores coincidieron en que el Congreso debía reformar la LFRT y la LFT; la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados creó una subcomisión sobre medios comunitarios, con el propósito de permitir a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar medios de comunicación; El PRD manifestó que presentaría un proyecto de reforma constitucional en torno a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, para que México cuente con un instituto autónomo con facultades para otorgar y revocar concesiones y permisos a esos medios masivos de comunicación; La AMARC llamó al Poder Legislativo a subsanar las "omisiones" y permitirles la "existencia digna en México", sobre todo por el impacto que representará el nuevo proceso de convergencia tecnológica; los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD, mencionarían que podrían presentar a

¹³⁸ CIRT, boletín de prensa, 7 de junio de 2007.

¹³⁹ 1.- Televisa siguió atenta y respetuosamente el proceso de revisión constitucional de la *ley Federal de Radio y Televisión* y de la Ley de Telecomunicaciones, llevado a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha analizado el alcance de sus resoluciones. Algunas de éstas son motivo de preocupación toda vez que pueden desacelerar o, incluso, inhibir, el desarrollo tecnológico de las industrias de la radiodifusión y telecomunicaciones, colocando a estos sectores de México en desventaja frente a los otros países.

2.- Televisa reafirma su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus resoluciones, al tiempo que reconoce la transparencia con que se condujo todo el proceso de revisión constitucional.

3.- Como lo ha hecho siempre, Televisa seguirá realizando sus actividades en el marco de la legislación vigente, ahora revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y renueva su compromiso de procurar los más altos estándares de calidad y profesionalismo, acordes con la historia de la empresa y con las exigencias del pública en México y de habla hispana en todo el mundo

partir de septiembre de este año, nuevos proyectos de leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, con la finalidad de modificar los artículos que la Corte declaró inconstitucionales. Finalmente, el presidente Calderón declararía, desde su gira por Europa, que aunque no conocía a detalle el fallo de la Corte “será respetuoso de lo que la Corte y el Congreso dispongan”¹⁴⁰.

El 11 de junio el encabezado del diario *La Jornada*, señalaba que el sentido del fallo de la Corte se debía a la intromisión directa del presidente Felipe Calderón, o sea que éste había *dado línea* a los ministros de la Corte. De acuerdo con la nota del diario “El Presidente de la República ‘ya había leído’ el proyecto de resolución elaborado por Salvador Aguirre Anguiano, a quien le pareció ‘muy bueno’. De igual manera, ‘el primero en conocer el proyecto de resolución elaborado por Aguirre Anguiano fue el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien recibió el documento antes que los magistrados (sic). Fue hasta el 3 de mayo pasado en que Aguirre Anguiano -una vez que recibió señales de Gobernación de que no había problema con el sentido del dictamen- repartió su proyecto de resolución entre sus compañeros’.” (*La Jornada*, 11 de junio de 2007)

Al día siguiente, a través del mismo diario tanto la Corte como la Secretaría de Gobernación desmintieron el hecho. La Secretaría de Gobernación envió una carta, la cual fue publicada íntegramente¹⁴¹. Por su parte los ministros desmintieron que el fallo contra la *Ley Televisa* hubiera sido "determinada, influenciada o avalada previo a su discusión pública, por cualquier instancia gubernamental", así mismo, enviaron un comunicado, que también fue publicado¹⁴². En

¹⁴⁰ <http://www.wradio.com.mx/nota.asp?id=436827>

¹⁴¹ Ver anexo 8.

¹⁴² Ver anexo 9.

esta misma edición diversos actores se pronunciaron ante la nota: varios legisladores¹⁴³ señalaron “la gravedad” de la situación de ser cierta la información. Manuel Bartlett declaró “no pongo en duda la información publicada por *La Jornada*”. El presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo dijo que finalmente lo importante no era si el Presidente lo había avalado o no, sino el resultado del fallo. *La Jornada* se mantuvo en su posición, y en su rayuela de la edición del 12 de junio afirmó: “A cada quien lo suyo. Unos informando, otros desmintiendo. Esta casa editorial se mantiene en lo dicho”.

Al respecto, la académica Fátima Fernández Christlieb señaló en un artículo que “Aquí era casi imposible votar sin argumentar, como ocurrió en el Congreso. Aquí no hubo manera de tirar línea, ni de comprar ministros. Privó la cordura, el respeto ante la diferencia, la institucionalidad, el buen humor, la búsqueda de la variedad. Lección para los mexicanos también en la manera de discutir: sin descalificaciones, sin adjetivos, con argumentos jurídicos y técnicos, aceptando y comprendiendo la postura del ángulo distinto. Los votos concurrentes y las opiniones divididas dieron y darán luz”¹⁴⁴

De lo anterior, surgen dos vertientes: si la información es veraz tenemos entonces una especie de “traición” de Calderón hacia Televisa, pues la aprobación de la reforma a la LFRT y a la LFT fue a cambio de que la televisora apoyara al PAN en su *guerra* contra López Obrador. En segundo lugar, si la información es errónea, entonces “hubo algo” que hizo que los ministros resolvieran de la manera en que lo hicieron, porque a través de la historia reciente de la Corte, diversos fallos

¹⁴³ Ver Diario *La Jornada* del 12 de junio de 2007.

¹⁴⁴ *Revista Etcétera* No. 80, junio de 2007, p. 12

de trascendencia han sido inclinados hacia los intereses de los poderosos, como ejemplo podemos citar el fallo sobre el anatocismo¹⁴⁵, la ley indígena¹⁴⁶ y el caso Lydia Cacho¹⁴⁷.

La resolución de la Corte contra la *Ley Televisa* marcó el final del proceso de discusión que inició en noviembre de 2005, pero que a su vez estaba encadenado a la Mesa de diálogo de 2001. Sin embargo, no terminó la cuestión sobre la democratización de los medios electrónicos y la influencia de los poderes fácticos. De manera esquemática, se supondría que a continuación seguiría un trabajo legislativo para rellenar los huecos que quedaron tras el fallo de la SCJN, pero bajo la perspectiva política este tema no era tan urgente como otro que se hallaba en puerta: una reforma electoral.

¹⁴⁵ Al establecer, en sesión de pleno del 7 de octubre de 1998, que no existía limitación alguna ni en el Código Civil ni en el de Comercio que impidiera la capitalización de intereses sobre intereses. Votaron en contra los Ministros Juan Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. (ver seguimiento en medios en <http://www.area.com.mx/market/anatocismo.html>, y versión estenográfica del día 7 de octubre de 1998 en www.scjn.gob.mx)

¹⁴⁶ El día viernes 6 de septiembre de 2002, la SCJN dio a conocer mediante un comunicado de prensa denominado RESUELVE LA SCJN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA. El fallo, resuelto por mayoría de 8 votos y tres en contra, declaró improcedentes las controversias constitucionales presentadas por diferentes municipios del país en contra del procedimiento de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena. Votaron en contra los ministros Juan Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón. (ver seguimiento en <http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020906posiciones.htm>, y versión estenográfica del día 6 de septiembre de 2002 en www.scjn.gob.mx)

¹⁴⁷ Si bien la SCJN no rechazó el dictamen sobre el caso Lydia Cacho, que establecía responsabilidad política del gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, por grave violación de las garantías individuales de la periodista y de autoridades de Puebla y Quintana Roo que violentaron los principios democráticos de federalismo y división de poderes, sino que aplazó su votación hasta no tener reglas claras para el procedimiento. La votación fue de 8 a 3 a favor del aplazamiento. Votaron en contra Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls. (*La Jornada*, Política, 27 de junio de 2007, versión estenográfica 26 de junio de 2007 www.scjn.gob.mx)

El día 27 de noviembre de 2007, la SCJN reinició el debate sobre el caso Lydia Cacho. El ministro instructor Juan N. Silva Mesa mantuvo su dictamen en donde señalaba al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como responsable de encabezar el “concierto de autoridades, las inconsistencias, contradicciones y falsedades” en las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho (versión estenográfica sesión de pleno, 27 de noviembre de 2007, SCJN). La sesión terminó y continuó el 29 de noviembre. Después de escuchar los argumentos tanto del día 27 como los del día 29, en votación de seis contra cuatro, el Pleno determinó que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de las acusaciones en su contra. Los ministros que votaron en favor del dictamen en el que se sostenía que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de Cacho Ribeiro fueron el ponente Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío. Se pronunciaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. (Versión estenográfica de la sesión de Pleno, 29 de noviembre de 2007, SCJN)

Capítulo 6

Las discusiones posteriores al fallo de la SCJN

Con el fallo de la SCJN sobre la reforma a la LFRT y a la LFT, se cerró una etapa más de este proceso, aunque no lo concluyó, ya que el siguiente paso sería subsanar los *huecos* que dejó la invalidación de los artículos o de sus partes. Sin embargo, a causa de la agenda política del país, la discusión de esta enmienda pasó a un segundo plano, pues si bien desde el 4 de julio de 2007 se había conformado en el Senado de la República un Grupo Plural para llevar a cabo esa labor, al mismo tiempo se discutía una reforma electoral, una energética y otros acontecimientos, que tenían relación con los medios, la democracia y los poderes fácticos.

La Reforma Electoral de 2007

A principios del mes de agosto de 2007, el denominado *Comité Ciudadano*¹⁴⁸ difundió una propuesta integral de reforma en materia electoral. De acuerdo con Jorge Alonso (2007), entre sus principales puntos destacaban que la elección de consejeros electorales se hiciera por medio de un procedimiento público y transparente que incluyera una convocatoria en la que las organizaciones de la sociedad civil, grupos ciudadanos, instituciones académicas y público en general propusieran candidatos. En segundo lugar, exigían reducir drásticamente el

¹⁴⁸ Ver anexo 10.

financiamiento de los partidos, y como tercer punto, en el tema de las campañas, proponían terminar con los *spots* y privilegiar los debates.¹⁴⁹

A finales de agosto, la *Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión* hizo pública su propuesta de reforma en materia electoral. En ella se destacaba la regulación de pre-campañas, la disminución de los tiempos de campañas, la eliminación del secreto bancario para la fiscalización de recursos en este rubro, la prohibición de promoción de funcionarios federales, estatales y municipales, y el otorgamiento de la facultad al organismo electoral para sancionar a quien violase los ordenamientos electorales. Ante esto, el *Comité ciudadano* manifestó que había un retroceso, ya que no estaban incluidas las propuestas fundamentales de la sociedad civil: no había una reducción significativa al financiamiento a los partidos, y la ciudadanización del proceso de elección de consejeros electorales quedó fuera.

Así mismo, los medios iniciaron embates contra diversos legisladores, argumentando que además de la violación a la autonomía del IFE, los políticos pretendían limitar la libertad de expresión. Pero los ataques realmente mostraban el enojo de las televisoras por perder el gran negocio que les representan las elecciones, ya que en el año 2006 ganaron por este rubro más de cuatro mil 250 millones de pesos.

¹⁴⁹ En el ámbito latinoamericano, de acuerdo con Steven Griner y César Arias (Moritz & Vázquez, 2007: 41-53) Brasil y Chile son los dos países de América Latina que prohíben la publicidad política pagada en televisión durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas. En Bolivia se restringe a 10 minutos en canales nacionales y 5 minutos en medios locales. En Guatemala la autoridad electoral determina los espacios disponibles, que no pueden ser menores a 30 minutos semanales. En Paraguay y Perú se establecen límites de cinco minutos diarios. En Argentina y Colombia, para elecciones presidenciales, se otorgan espacios gratuitos en los medios públicos y privados, permitiendo la compra de publicidad adicional hasta los límites globales del gasto de campaña. En Uruguay la compra de publicidad se permite solamente durante un periodo de 50 días antes de las elecciones, y la Corte Electoral otorga espacios gratuitos en el canal estatal de televisión. El resto de los países latinoamericanos han impuesto límites sin conceder espacios gratuitos. Existen límites expresos en Costa Rica (10 minutos diarios), Nicaragua (tres minutos) y Venezuela (dos minutos) y un límite indirecto en Ecuador que pone tope a los gastos globales de campaña.

En la sesión del Pleno del Senado de la República del 11 de septiembre de 2007, se presentaron los abogados y conductores de los noticiarios de Televisa, TV Azteca y otros medios de radiodifusión, con el objetivo de pedir que la discusión fuese pospuesta, ya que la consideraban como violatoria a la libertad de expresión, aunque terminarían reconociendo que el enojo principal se debía a la “prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos”¹⁵⁰, lo que podría afectar los *ratings* y por ende las ganancias. Por otro lado, el editorial de la *Revista Mexicana de Comunicación* del mes de febrero de 2008, señaló que la embestida de los concesionarios no fue calculada, pues además de mostrar en cadena nacional la carencia de argumentos, los legisladores cerraron filas en torno a la misma postura sobre el tema. De esta manera, el poder legislativo no había sido doblegado por los poderes fácticos.

En la sesión del Pleno del 12 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la reforma electoral con 110 votos a favor y 11 en contra, estos últimos del priísta Jorge Mendoza y de los legisladores de Convergencia y del Partido Verde Ecologista (Cámara de Senadores, 2007 (IV)). De acuerdo con los propios senadores, la reforma disminuiría el costo de las campañas, con un ahorro cercano a los 13 mil 90 millones de pesos, prohibía a partidos y a terceros la contratación de propaganda en medios electrónicos, e impedía la promoción de funcionarios con recursos públicos pero, sobre todo, frenaba la guerra sucia.

La CIRT, en voz de Sergio Sarmiento, exigió la realización de un referéndum “para que los mexicanos se expresen de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia. No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos dirigentes de partidos políticos (...)

¹⁵⁰ “Rogerio Azcárraga, dueño de Radio Fórmula, resumió el descontento de los concesionarios: “¡Nos van a quitar 30 por ciento del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los *ratings*!”, exclamó. Sostuvo que pasará lo mismo que con el programa radiofónico *La Hora Nacional*, porque nadie verá los anuncios de los partidos. “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar”, advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña” (Diario *La Jornada*, 12 de septiembre de 2007).

Exigimos que el actual IFE ciudadano supervise la consulta popular”¹⁵¹. Por su parte, el presidente del CCE reclamó que “la libertad de expresión no debe ser sujeta a negociaciones, (y) resulta inaceptable que se pretenda privar de esta libertad a la sociedad”. Habló también de la falta de profundidad de la reforma electoral y de la existencia de un sesgo favorable a los partidos políticos.¹⁵² La respuesta del IFE señaló que no podía organizar ningún referéndum, porque la figura no existía en la Constitución federal.

El día 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que contenía la reforma electoral con 361 votos en favor, 30 en contra y dos abstenciones. Como siguiente paso, la minuta se turnó a las 31 legislaturas de los estados y a la *Asamblea Legislativa del Distrito Federal* (ALDF). El 17 de septiembre de 2007, el CENCOS publicó un desplegado suscrito por diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, dirigido a las legislaturas de los Estados, avalando la reforma electoral.¹⁵³ En los siguientes días todos los congresos locales y la ALDF, votaron a favor de la minuta, con excepción de Coahuila que lo hizo en contra. El día 13 de noviembre de 2007 se publicó en el DOF¹⁵⁴ la reforma a los artículos 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diversos organismos del sector empresarial presentaron una demanda de amparo ante el 14 tribunal de distrito en materia administrativa del Distrito Federal “contra la reforma electoral, por considerarla violatoria de los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y porque “inhibe la participación social en los procesos electorales y limita el derecho a la información”.¹⁵⁵ Pero la demanda fue desechada al día siguiente por “notoriamente improcedente”. Sin embargo, el

¹⁵¹ Diario *La Jornada*, 13 de septiembre de 2007

¹⁵² *Ibidem*

¹⁵³ Ver <http://www.cencos.org/es/node/16862>

¹⁵⁴ Ver Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 2007.

¹⁵⁵ Diario *La Jornada*, 6 de diciembre de 2007.

reclamo de los medios y de los empresarios demuestra una contradicción, ya que a finales de noviembre de 2007, la *Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos* (OACNUDH) señaló que las formas monopólicas u oligopólicas de los medios de comunicación sólo quebrantan el derecho a la libertad de expresión, ya que no permiten la pluralidad en la información. Después de que los empresarios interpusieron su demanda de amparo, el CENCOS señaló que:

En su nuevo desafío al poder Legislativo, los empresarios interpretan el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos así como en varios tratados internacionales firmados por México a su conveniencia. La elite empresarial, concentrada en el CCE busca aplicar la lógica empresarial del libre mercado a la legislación nacional, siendo que ésta es antagónica a los principios universales de libertad de expresión que buscan el bien colectivo. La contratación de publicidad, *spots*, u opiniones pagadas en televisión o radio "como se empleó en la campaña sucia de los comicios de 2006" no se encuentra estipulada en ningún tratado internacional de derechos humanos o libertad de expresión. (www.javiercorral.org, 7 de diciembre de 2007).

El Grupo Plural para la nueva reforma a la LFRT y LFT

El 4 de julio de 2007, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó en su sesión de trabajo, la conformación de un Grupo Plural para los trabajos de una nueva ley de medios. El 16 de agosto se comunicó a los presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, la conformación del grupo, integrado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios; el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; el presidente de la Comisión de

Comunicaciones y Transportes; el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos; tres senadores del Grupo Parlamentario del PAN; dos senadores del Grupo Parlamentario del PRI; dos senadores del Grupo Parlamentario del PRD; un senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; un senador del Grupo Parlamentario de Convergencia y un senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.¹⁵⁶ El Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en la Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se instaló formalmente el 7 de septiembre de 2007.

Las sesiones de trabajo se realizaron a partir del 11 de octubre de 2007 y hasta el 2 de marzo de 2008, recibiendo a diversos actores¹⁵⁷, y escuchando las propuestas en torno al tema. El día 28 de febrero de 2008, el Grupo Plural presentó un libro que compiló los avances en el tema. Este libro contiene la resolución de la SCJN en contra de las reformas a la LFRT y a la LFT; las aportaciones realizadas en las sesiones de trabajo con los organismos, instituciones y sociedad

¹⁵⁶ El Grupo Plural se conformó por los siguientes senadores: Santiago Creel Miranda (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN), José Alejandro Zapata Perogordo (PAN), Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI), Carlos Ruiz Navarrete (PRD), Pablo Gómez Álvarez (PRD), Francisco de Paula Agundis Arias (PVEM), Dante Alfonso Delgado Rannau (Convergencia), Alejandro González Yáñez (PT), Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN), José Julián Sacramento Garza (PAN), Ángel Heladio Aguirre Rivero (PRI), Raúl José Mejía González (PRI), David Jiménez Rumbo (PRD), Carlos Sotelo García (PRD), Javier Orozco Gómez (PVEM), Gabino Cué Monteagudo (Convergencia) y Alberto Anaya Gutiérrez (PT).

¹⁵⁷ Este Grupo Plural recibió a los siguientes actores: a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), a la Comisión Federal de Competencia (COFECO), a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y a la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación A. C., a la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), a la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C., a organizaciones vinculadas con medios de comunicación e información indígenas, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión (CIRT), a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI), a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), al Sindicato de Telefonía de Japón, a la Secretaría de Gobernación, con la intervención del subsecretario de Normatividad y Medios, Juan María Naveja, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al Sistema Nacional de Productoras de Instituciones de Educación Superior (SINPRIES), a la Asociación Nacional de Telecomunicaciones A.C. (ANATEL), a la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), a Radio Independiente A.C., al *Frente nacional por una nueva ley de medios*, a la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

civil; las propuestas recibidas por convocatoria nacional; los objetivos del subgrupo de trabajo de radio; así como el planteamiento del compromiso democrático del Grupo Plural; la necesidad de una reforma estructural y los nuevos retos en la materia (Senado de la República, 2008).

Poco más de dos meses después, el 6 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica del Grupo Plural presentó el informe final, que a su vez contenía diez informes técnicos sobre la materia de telecomunicaciones. Entre ellos se trataban las temáticas del órgano regulador, la administración del espectro, los títulos habilitantes, la transparencia y la publicidad, las comercializadoras, la inversión extranjera, la dominancia, los derechos de los usuarios, la cobertura social y, finalmente la interconexión. La segunda parte de este informe contenía 12 informes técnicos sobre la radio y la televisión: conceptos del servicio público de radiodifusión, principios, régimen de medios públicos, inversión extranjera en radiodifusión, marco jurídico de los medios del Estado, financiación de los medios del Estado, medios indígenas, medios comunitarios, contenidos, derecho de réplica, tiempos de Estado y tiempos fiscales, y finalmente sanciones (Cámara de senadores, 2008 (I)).

En la misma fecha del 6 de mayo se presentó el informe final del Grupo Plural, en donde destacan los siguientes datos: número de sesiones plenarias: tres (7, 20 y 26 de septiembre de 2007), sesiones de trabajo: 22 (10, 11, 16, 17, 23, 24 y 30 de octubre de 2007; 6, 7, 13, 15, 21 y 28 de noviembre de 2007; 5 de diciembre de 2007; 16, 23 y 30 de enero de 2008; 6, 13, 19 y 20 de febrero de 2008; y 2 de marzo de 2008. El Subgrupo de Trabajo de Radio, que se instaló formalmente el 28 de noviembre de 2007 por los senadores Raúl José Mejía González (PRI), coordinador; Pablo Gómez Álvarez (PRD); Gabino Cué Monteagudo (Convergencia); Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN) y Alberto Anaya Gutiérrez (PT). Este grupo sesionó las fechas 5 de diciembre de 2007, 16, 23 y 30 de enero de 2008 (Cámara de senadores, 2008 (II)). Con esto,

el Grupo Plural concluyó los trabajos de revisión, aunque sin ninguna iniciativa concreta. Al respecto hubo diversas declaraciones, las cuales coincidían en señalar que no había condiciones para presentar propuesta alguna. El senador Santiago Creel ofreció la respuesta más puntual “no se tienen, en este momento, los votos necesarios para sacar adelante ningún dictamen en esta materia”¹⁵⁸.

La reforma energética

Desde el mes de junio de 2007 se había comenzado a discutir la llamada Reforma energética, cuyo objetivo consistía en realizar los cambios constitucionales pertinentes para abrir la participación de empresas privadas en Petróleos Mexicanos (PEMEX). A partir de la segunda semana del mes de enero de 2008, no sólo se reavivó el debate en este tema, sino que se polarizó tanto al interior del Poder Legislativo como en la sociedad en general, entre quienes estuvieron a favor de dicha apertura y los que señalaron defender la propiedad nacional del hidrocarburo. Esta situación se complicó aún más ya que a Juan Camilo Mouriño Terrazo, relevo de Francisco Ramírez Acuña al frente de la Secretaría de Gobernación, se le acusó de tráfico de influencias en el sector petrolero cuando fue Subsecretario de Energía en el sexenio anterior¹⁵⁹.

Este tema se ligó al debate de la reforma de medios, ya que corría el rumor que a cambio de que las pantallas de Televisa y de TV Azteca apoyaran la campaña para “vender” las bondades de una reforma energética (altamente conflictiva), tanto el Poder Ejecutivo como el Senado estarían

¹⁵⁸ Participación de Santiago Creel en el Foro La Ley de Medios: ¿Esperando a Godot?, 3 de diciembre de 2008.

¹⁵⁹ Ver prensa a partir del 9 de enero de 2008.

dispuestos a posponer, una vez más, la democratización del régimen de medios concesionados en el país.

A punto de culminar el periodo ordinario de sesiones, quedó claro que no se discutiría una reforma a la ley de medios, mientras no se destrabara el asunto de la reforma energética, ya que toda la atención estaba centrada en ese tema. La situación en la Cámara de Diputados fue tal que se llegó a tomar la tribuna de ese recinto por parte de los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) compuesto por el PRD, PT y Convergencia. Por otra parte, en las calles volvía a aparecer la figura pública de López Obrador quien convocó a una movilización y resistencia civil pacífica. Así mismo, también renacía la guerra sucia con la transmisión de *spots* donde comparaban a López Obrador con Hitler, Mussolini y Huerta, por alentar al FAP a clausurar (simbólicamente) las tribunas de la Cámara. Ante esta situación, quienes impulsaban la reforma a la ley de medios, entendieron que era mejor postergar este proceso, ya que de lo contrario sería vulnerable al ataque de los poderes fácticos en el periodo de receso legislativo.

Las acciones del FAP y de los diversos frentes ciudadanos de apoyo, convocados por López Obrador, lograron el objetivo de evitar una reforma energética al vapor, por lo que ésta ya no alcanzó a ser discutida en el periodo ordinario de sesiones. Así mismo, los legisladores aceptaron realizar un debate en torno a la reforma misma, en un lapso de 70 días. Este proceso fue entendido de diferentes maneras por los grupos políticos, pues mientras que para algunos sólo se hacía referencia a la realización de paneles con expertos en la materia, el FAP consideró la pertinencia de una consulta pública a nivel nacional. De igual manera, mientras que se señalaba que el debate llevado a cabo en el Poder Legislativo sólo hacía más confusa la situación; otros elogiaban los objetivos de una consulta nacional. Obviamente las posturas tan diferentes

comenzaron a polarizar el tema, lo que tuvo como consecuencia el cese de Santiago Creel como coordinador de la bancada del PAN en el Senado el 10 de junio de 2008.

Las reacciones a esta situación política no se hicieron esperar, incluso se llegó a señalar que la salida de Creel obedecía a que, si bien éste no había podido “posicionar en los medios electrónicos la defensa petrolera del presidente Felipe Calderón”¹⁶⁰, la realidad era la presión de las televisoras sobre el gobierno (lo cual fue negado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN). Si Creel no había podido alcanzar ese objetivo en la televisión, fue por el veto que los medios ejercían sobre él, en venganza por su actitud y apoyo en la reforma electoral. De esta manera, los medios obtenían una doble ganancia: “debilitaban” políticamente a Creel, y lograban una alianza con el gobierno, o al menos así se percibió en la opinión pública, pues en esos días la Secretaría de la Defensa Nacional había participado en la grabación de una serie de Televisa¹⁶¹.

Desde una postura democrática, el cese de Creel demuestra como el CEN del PAN, y quizás el propio presidente Calderón, prefirieron la vía mediática que la deliberativa para tratar el asunto de la reforma energética, lo cual se tradujo en dos aspectos negativos para el propio Estado: el fortalecimiento del poder fáctico de las televisoras, pues los colocó en un nivel privilegiado para

¹⁶⁰ Diario *La Jornada*, 10 de junio de 2008.

¹⁶¹ El 9 de junio de 2008 se publicó en la prensa nacional que el gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional había apoyado a Televisa en la realización de un par de capítulos de la serie “El Pantera”. Dicho apoyo consistió en el préstamo de un helicóptero artillado UH60-L Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, tres vehículos de transporte de personal modelo Mercedes Benz; seis modelo Humvee Vere; seis tipo Humvee V.TP y una Ambulancia Terapia Intensiva modelo Mercedes Benz, tres jefes, seis oficiales y 138 elementos de tropa. La SEDENA justificó el apoyo a Televisa señalando que “los medios indicados (el material militar y humano que apoyó a El Pantera) fueron proporcionados como un apoyo a esta dependencia y utilizados para difundir la imagen del gobierno federal, en relación con uno de los cinco Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece como premisa fundamental que las personas necesitan garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentable, difundiéndose de esta forma, algunas de las actividades llevadas a cabo por el Instituto Armado, referente al Estado de Derecho y Seguridad”.

Sin embargo, años atrás las fuerzas armadas ya habían participado en otros audiovisuales, con el objetivo de su promoción. Como ejemplo está el video de la década de los 90’ “La incondicional” del cantante Luis Miguel, donde se muestra a la Fuerza Aérea Mexicana, y el cantante, interpretando a un cadete, hace uso de un helicóptero Bell 212, así como de un caza F-5. De igual manera, el cantante Pedro Fernández, en su video “El siete mares” se muestra como un oficial naval a bordo de un destructor de la Armada de México.

negociar a favor de sus intereses, e inevitablemente la utilización de un nuevo nivel en la guerra sucia mediática contra quienes no apoyaron el proyecto gubernamental.

El Frente nacional por una nueva ley de medios

A mediados del mes de febrero de 2008, el presidente en turno del Grupo Plural para la Reforma a la Ley de Medios, el priísta Ángel Heladio Aguirre, señaló que la discusión de dicha reforma podría extenderse hasta el segundo periodo de sesiones en el mes de septiembre de este mismo año. Esta versión sería descalificada por el presidente de la Comisión de RTC del Senado, el perredista Carlos Sotelo, de esta manera volvía a circular el tema de la reforma. A causa de lo anterior, la AMEDI convocó y conformó el *Frente nacional por una nueva ley de medios*¹⁶². El objetivo de este Frente se centró en que los legisladores emitieran la reforma de la Ley de Medios en el primer periodo de sesiones ordinarias de 2008, tal y como lo describieron en su primer comunicado¹⁶³, el día 20 de febrero de 2008. Este Frente se conformó por 73 organizaciones¹⁶⁴. En su discurso, Javier Corral Jurado señaló que de las 461 estaciones de televisión comerciales en el país, Televisa tiene el 56% y TV Azteca el 38%. Dos tercios de la inversión publicitaria benefician a Televisa y el resto a TV Azteca. El 72% de la audiencia nacional concentrada la tiene Televisa. Cada una de las dos empresas tiene dos cadenas nacionales y Televisa posee un sistema de repetidoras con las que puede articular una tercera cadena nacional. Televisa es la

¹⁶² <http://www.nuestrosmedios.org/>

¹⁶³ Ver anexo 11.

¹⁶⁴ Ver anexo 12.

única empresa a nivel mundial que posee cuatro señales de televisión abierta en una misma plaza (canales 2, 4, 5 y 9 en México, DF). Televisa tiene el 56% del espectro radioeléctrico para televisión comercial, el 100% de televisión satelital, el 35% de la fibra óptica, el 38% de la programación en los sistemas de televisión por cable, y avanzan para obtener las cuatro únicas plataformas para la transmisión de contenidos. Ambas televisoras tienen 4876 puntos en tenencia de estaciones y 5872 puntos en audiencias televisivas.

La estrategia de este Frente fue sencilla, serían los propios ciudadanos quienes se encargarían de “recordarle” a cada senador miembro de la comisión pertinente, lo importante que era una discusión consciente de la reforma a la LFRT y LFT. Esto se lograría a través del envío de correos electrónicos diarios, así como el envío de mensajes a los propios teléfonos celulares de los legisladores. Así mismo, el Frente se daría a la tarea de informar a la ciudadanía acerca de este proceso y recolectar las firmas de apoyo¹⁶⁵ para enviarlas a los senadores.

Las nuevas propuestas para reformar la LFRT y LFT

El día 2 de diciembre de 2008 los senadores Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía González, Carlos Lozano de la Torre, José Eduardo Calzada Rovirosa y Rogelio Rueda Sánchez, todos ellos del PRI, presentaron una iniciativa para reformar el artículo 16 de la LFRT, para que las concesiones pudieran ser prorrogadas en una o más ocasiones por plazos de hasta la misma duración (20 años). Sin embargo, este contenido, de acuerdo con Javier Corral es regresivo, ya

¹⁶⁵ Esta acción se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2008, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Expresión.

que propone una de las cosas que la propia SCJN declaró como inconstitucional, distorsionando así los contenidos de la sentencia de la Corte, además:

“Ha incurrido en una falta muy grave que es sacar renglones de algunos párrafos que cita, omitir el párrafo que sigue, saltarse ese párrafo y darle continuidad a la cita. Si ustedes comparan la exposición de motivos de la iniciativa de Beltrones, con la página 558 del *engrose* de la sentencia que salió publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, ustedes verán el tamaño de la osadía de publicar una cosa así. (...) pueden volver a intentar aprovechar la coyuntura electoral del próximo año (2009) y meternos en medio de la campaña una decisión de esta, porque a la hora de la hora todos van a empezar a ser presionados como en 2006, y a ver quién se quiere pelear con la televisión”¹⁶⁶.

Por su parte, el Senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, estuvo a punto de presentar, el 9 de diciembre, dos iniciativas, la primera para adicionar los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de crear un órgano constitucional autónomo denominado *Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión*, que sería el rector en esta área; y la segunda, para crear la *Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión*, sin embargo ambas fueron retiradas del orden del día, aunque sí aparecieron publicadas en la gaceta del Senado de la República de esa sesión.

¹⁶⁶ Exposición de Javier Corral durante la reunión de AMEDI Capítulo Jalisco, 5 de diciembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.

Epílogo: sucesos y discusiones sobre medios, democracia y poderes fácticos

El 28 de febrero de 2008 los senadores David Jiménez Rumbo y Miguel Bautista López, del PRD, presentaron una iniciativa para adicionar una fracción XXIX-Ñ al Artículo 73 y reformar la fracción VI del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, reformar la fracción XXX bis del Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adicionar un capítulo octavo al título segundo y el Artículo 57-A a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reformar los Artículos 2º y 13 y derogar la fracción VIII del Artículo 11 y el Artículo 21-A de la LFRT, con el objetivo de expedir la Ley de Medios Públicos de Radiodifusión. De acuerdo con su exposición de motivos, los Medios Públicos deben ser entes de Estado y no de gobierno.

El día 25 de marzo de 2008 se publicó en la *Gaceta Parlamentaria* de la Cámara de Diputados, la iniciativa que crea la *Ley Federal para garantizar el Derecho de Réplica* elaborada por Rocío Morgan (Jalisco, PAN), Antonio Díaz (Puebla, PAN) y Dora Alicia Martínez (Coahuila, PAN). Una de las críticas más fuertes hacia esta iniciativa por parte de académicos y grupos de la sociedad civil es que el órgano que debe recibir, analizar y resolver las peticiones ciudadanas sobre su derecho de réplica, recaería sobre la Secretaría de Gobernación, cuando más bien debería ser un organismo autónomo como el IFE o el IFAI. Esta iniciativa tiene la misma temática que la que presentó el senador José Alejandro Zapata Perogordo (PAN) el 13 de diciembre de 2007¹⁶⁷. Esta iniciativa también propone que sea la Secretaría de Gobernación quien se encargue de recibir y dar respuesta a las solicitudes ciudadanas de derecho de réplica.

¹⁶⁷ Ver gaceta parlamentaria del Senado de la República del 13 de diciembre de 2007.

El día 8 de abril de 2008 los senadores del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, Ángel Aguirre Rivero y Raúl Mejía González presentaron ante el Pleno del Senado de la República, la iniciativa para crear la *Ley del Instituto Nacional de los Medios Públicos de Radiodifusión*, por lo que además se deben reformar la fracción XXX bis del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; derogar la fracción VIII del artículo 11 y reformar los artículos 13, 20, 21-A y 37 fracción III, de la LFRT. Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de RTC, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos.

En materia de radio, televisión y procesos electorales, el Senador Ricardo García Cervantes presentó, el 28 de mayo de 2008, una iniciativa para reformar la LFRT y el COFIPE. Principalmente, el proyecto pretendía armonizar esos ordenamientos con la reforma electoral; proponía el establecimiento de sanciones para los medios que desacataran la ley, llegando incluso a la cancelación de la transmisión. La discusión del dictamen de esta iniciativa se proyectó para el periodo extraordinario del mes de julio de 2008, sin embargo, a propuesta del nuevo coordinador parlamentario del PAN, apoyado por Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI, la discusión se pospuso para el periodo ordinario del mes de septiembre del mismo año¹⁶⁸.

El día 4 de junio de 2008 los senadores Manlio Fabio Beltrones, Carlos Lozano de la Torre, Mario López Valdez y Fernando Castro Trenti (todos del PRI), presentaron una iniciativa de reforma a la LFRT, consistente en adicionar un segundo párrafo al artículo 4º: “*La protección del Estado comprende la planeación del desarrollo de la radiodifusión, con la participación de concesionarios y permisionarios, a fin de garantizar la permanencia y viabilidad de los*

¹⁶⁸ Diario *Reforma*, 25 de junio de 2008. <http://www.reforma.com/editoriales/nacional/448/894977/default.shtm>

*servicios, de acuerdo con las condiciones del avance tecnológico”,*¹⁶⁹ esto con el objetivo de permitirles a las radiodifusoras de AM primeramente transitar hacia el cuadrante de FM, para posteriormente entrar a la convergencia tecnológica.¹⁷⁰

Al respecto, Gabriel Sosa señaló que esta iniciativa sólo apoyaba, implícitamente, a los grandes concesionarios de AM, ya que si bien les permitiría a todas las radiodifusoras de esa frecuencia el pasar a FM, seguiría dejando en desventaja a los pequeños empresarios, y “otro factor es que la AM no puede desaparecer con un plumazo. Las emisoras que operan en esa banda tienen sobre todo una función social, de información y de entretenimiento en zonas del país que por el comportamiento de sus señales difícilmente pueden cubrir las FM. Las AM son regionales, las FM locales. Sin una política que fomente el desarrollo de más operadores, muchas regiones del país quedarían sin servicios de radiodifusión”,¹⁷¹ además, la iniciativa discrimina a los permisionarios, pues de haber pocas frecuencias en FM, los concesionarios tendrán preferencia. Este juicio, señala Sosa, ya fue declarado inconstitucional por la Corte en el caso de la *Ley Televisa*.

Días después, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) pagó un *spot* en los canales de cobertura nacional de Televisa, en donde apoyaban la iniciativa de Beltrones y los demás senadores. Las frases que resaltaban en este promocional fueron: “Por una industria de la radio y la televisión incluyente” y “FM para todos”. Ligado a este tema, el día 11 de junio de 2008 el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, refrendó 131 concesiones a radiodifusores.

¹⁶⁹ Gaceta del Senado, Senado de la República, 4 de junio de 2008.

¹⁷⁰ Paradójicamente, Manlio Fabio Beltrones apoyó incondicionalmente la reforma a la LFRT que dio origen a la *Ley Televisa*.

¹⁷¹ Iniciativa Beltrones: ¿FM para todos? en Columna Telecom. Y Medios, Diario *El Universal*, 10 de junio de 2008.

El 24 de junio de 2008 la SCJN resolvió el amparo en revisión 1067/2007, a favor de los promoventes Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Alrich (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008 (II)). Éstos habían sido nombrados comisionados de la COFETEL, el 9 de mayo por el presidente Vicente Fox, pero el 2 de junio de ese mismo año, el Senado impugnó los nombramientos, entonces el Presidente nombró a Gerardo Francisco González Abarca y Eduardo Ruiz Vega. Los impugnados promovieron un amparo el 8 de junio. Ya en la administración de Felipe Calderón, Martínez Pous fue nombrado director jurídico de la SCT, y del Villar Alrich subsecretario de comunicaciones de la misma dependencia. La resolución de la Corte definió que los nombramientos a González Abarca y a Ruiz Vega eran inconstitucionales (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008 (II)), en concordancia a la declaración de nulidad del último párrafo del artículo 9-C de la LFT (la cual fue declarada como inconstitucional por la SCJN en mayo de 2007). Por lo anterior, la Corte notificó al Presidente de la República sobre el fallo, para reinstalar en sus cargos a Martínez Pous y del Villar Alrich.

El 26 de junio el Pleno de la SCJN sobreseyó las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, interpuestas por Convergencia y Nueva Alianza, con siete votos a favor. El principal argumento fue que el procedimiento de reforma constitucional no es susceptible de control jurisdiccional, porque lo encuentra en el propio procedimiento legislativo del Congreso de la Unión y las legislaturas locales (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008 (III)). En sesión del 8 de julio, la Corte validó las reformas al COFIPE, en una votación dividida de 6-5. Los integrantes de la SCJN que votaron por la validez de la prohibición fueron Fernando Franco, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro Góngora Pimentel, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. En contraparte, opinaron que la disposición era inconstitucional, Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jesús

Gudiño Pelayo y Mariano Azuela. “De esta manera, queda firme la prohibición a los partidos políticos para contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, medida que también se aplica a cualquier persona física o moral”.¹⁷²

En cuanto a la convergencia digital, el 15 de septiembre de 2008 se publicó en el DOF el *Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital*. Lo anterior para que más de 800 emisoras de AM pudieran emigrar a FM, y prepararse así de mejor manera para la convergencia digital. Sin embargo, Florence Toussaint señaló que además de constituir este decreto “parte de una cadena de políticas gubernamentales que, desde el régimen de Vicente Fox, se proponen utilizar medidas administrativas en lugar de leyes” (Toussaint, 2008), pasa por alto el fallo de la corte con respecto a la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la LFRT y LFT. Así mismo, este acuerdo impone otro candado a las radiodifusoras de AM, el cual consiste en que esas estaciones deben contar con el aval de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda para emigrar al cuadrante de FM¹⁷³.

El 8 de enero de 2009 se publicó en el DOF el *Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes*, en donde se señalan, entre otras, las atribuciones del Secretario en materia de concesiones. Un mes después, el 6 de febrero, la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra el Ejecutivo Federal, por dar a la SCT

¹⁷² *La Jornada* On line, 8 de julio de 2008.

¹⁷³ Gabriel Sosa publicó en el periódico *El Universal*, el 11 de noviembre, que aunque parece inminente la desaparición de la banda de Amplitud Modulada, las estaciones de AM siguen siendo atractivas para algunos empresarios, quizás por la razón de la posibilidad de adquirir las frecuencias espejo en FM. Dos ejemplos claros son los grupos México Radio SA de CV, propiedad de Mario Vázquez Raña, el cual adquirió seis radiodifusoras de AM; y el grupo Radiodigital Siglo XXI SA de CV, que adquirieron siete emisoras de esa banda.

atribuciones sobre concesiones que son de la COFETEL: “los demandados invaden atribuciones exclusivas del Poder Legislativo al desconocer las facultades otorgadas a las comisiones Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia Económica y el Servicio de Administración Tributaria para actuar en torno a las vías generales de comunicación” (Cámara de diputados, 2009).

En los primeros días del mes de febrero de 2009 se suscitó un enfrentamiento entre las televisoras y el IFE, ya que las primeras se rehusaban a transmitir los *spots* de los partidos políticos, por lo que la autoridad electoral determinó sancionar a las emisoras. El día 11 de febrero el Instituto y la CIRT firmaron un convenio denominado “Bases de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para promover las mejores condiciones en la administración de los tiempos oficiales del Estado en materia de radio y televisión”, en donde se señala que el IFE emitirá criterios para evitar la interrupción de la transmisión de eventos deportivos, culturales o religiosos y tomará en cuenta la audiencia a la que van dirigidos los *spots*, así como evitar su transmisión en bloque y su distribución a lo largo de la programación televisiva.

Finalmente, en esta fecha queda pendiente la presentación y discusión de la iniciativa de reforma a la ley de medios por parte del Senado de la República; la discusión de las iniciativas presentadas en materia de derecho de réplica y medios públicos; la posibilidad de otorgamiento de concesión de una tercera cadena de televisión abierta;¹⁷⁴ la entrada de Telmex a la prestación

¹⁷⁴ Jenaro Villamil publicó una nota el día 27 de septiembre de 2008 en la *Revista Proceso*, donde señala que el magnate regiomontano, Remigio Ángel González, propietario de canales de televisión en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Argentina, además de los canales 12 (XHTOE-TV) y Canal 9 (XHTVL-TV) en Villahermosa, Tabasco, del Canal 9 (XHCVP-TV) en Coatzacoalcos, Veracruz, y el Canal 4 en Tapachula, Chiapas, cuenta con el respaldo de Luis Téllez y del Senador Federico Döring como cabildero.

de servicios de triple play,¹⁷⁵ un posible papel más activo por parte de la Secretaría de Gobernación en el ámbito de regulación y aplicación de la ley a los medios electrónicos¹⁷⁶, y una reforma a la Ley de Inversión Extranjera, que abriría la opción para la apertura en el sector de las telecomunicaciones más allá del 49% que hoy se permite¹⁷⁷.

¹⁷⁵ El último proyecto de Telmex, antes de finalizar esta investigación, fue una alianza comercial con la empresa Multivisión (MVS), donde la televisora ofrecería el servicio de video y la telefónica haría la facturación y cobranza (www.javiercorral.org, 12 de noviembre de 2008).

¹⁷⁶ El día 10 de noviembre de 2008, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta fue nombrado Secretario de Gobernación, en sustitución del Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien falleció en un accidente aéreo unos días antes. Sobre el nuevo titular de la Segob resalta que fue él quien encabezó la defensa jurídica de Javier Moreno Valle en contra de TV Azteca por la cuestión de Canal 40. En este caso, el Secretario conoce bien la situación de los medios de comunicación, por lo que su nombramiento causa expectativa sobre las atribuciones que tiene esa dependencia en el ramo, las cuales nunca se han ejercido de manera íntegra.

¹⁷⁷ El día 27 de noviembre de 2008 la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera, la cual hasta el 11 de febrero de 2009 no había sido presentada al plano.

Conclusión general

Si bien la democracia deliberativa es un ideal desde la perspectiva del propio Jürgen Habermas, a través de esta investigación se ha tratado de demostrar que se utilizan mecanismos deliberativos en el sentido de crear consensos entre todos los actores involucrados e interesados en un tema, y que esta discusión puede ser llevada a la agenda pública, por lo que más que un ideal teórico, es un mecanismo de participación social.

Ahora bien, sin entrar al debate acerca del nivel de la calidad de la democracia en que vivimos, ésta sí afecta la materialización de la democracia deliberativa tanto en su segunda fase como en su contexto de decisión, ya que la colocación de intereses particulares por encima de los públicos, es uno de los principales obstáculos para este mecanismo deliberativo. En este sentido, la voluntad política es una pieza clave para generar consensos, sin ella el proceso se vuelve estéril.

El ideal de la democracia deliberativa supone una discusión entre iguales y el consenso sobre una determinada temática. Sin embargo, esta última característica es vulnerable en nuestra realidad, pues si los grupos de interés que participan en este proceso tienen ideas opuestas irreconciliables y ninguno quiere ceder, quienes tengan la capacidad de negociación en otra esfera o nivel, abandonan la deliberación, así como sucedió en la primera etapa de la discusión de la reforma a la LFRT, lo que evidenció que para el gobierno de Vicente Fox, la democracia no sólo se reducía a un concepto electoral, ya que la transparencia y la incorporación de la sociedad civil a la discusión de la agenda pública no formaba parte de su concepción.

Entonces, si para algunos académicos como Francisco Aceves nuestra democracia es mínima, y por otro lado la democracia deliberativa de Habermas es un ideal ¿se puede sostener que en

diversos procesos legislativos y ejecutivos se ha aplicado un mecanismo de democracia deliberativa? La respuesta es sí, de acuerdo a lo que ya hemos descrito en el capítulo 1. Estaría a discusión si este hecho por sí mismo significa un avance en el desarrollo de nuestra endeble democracia, lo que es real es que se trata de un mecanismo adoptado hace muy poco tiempo y no en todo proceso parlamentario ni ejecutivo. La última discusión legislativa donde se utilizó fue en la reforma energética, con un resultado calificado como satisfactorio por los actores involucrados. Ahora bien, la debilidad de este mecanismo, el no alcanzar consensos, es aprovechado por aquellos actores cuya capacidad de negociación los lleva a mantener sus intereses en la temática e influir no sólo en la toma de decisiones, sino para ignorar el proceso deliberativo y con ello la participación de los grupos de la sociedad civil.

La negociación oculta que mantuvo Televisa con el Gobierno logró la derogación del acuerdo presidencial que instrumentaba el otorgamiento del 12.5% de tiempo aire puesto a disposición del Estado, así como la reforma del reglamento de la LFRT. Esta acción fuera de la discusión de la *Mesa de diálogo* si bien no la canceló formalmente, sí repercutió en que varios representantes la abandonaran, no así los de la sociedad civil, y aunque el debate había dado muy pocos resultados en cuanto a alcanzar consensos en los temas importantes, o en aquellos en los que estaban más interesados las organizaciones sociales, éstas decidieron continuar el proyecto de redacción y presentarlo como propio ante el Poder Legislativo, en este caso al Senado de la República.

En el Senado, éste no permitió mayor participación de estas organizaciones en la discusión interna. Por lo que sin un cabildeo directo por parte de los proponentes, el proyecto ciudadano se enfrentó con mayor dureza a un obstáculo evidente: los temas no consensuados en la *Mesa de Diálogo* que fueron incorporados sólo con el aval de los grupos de la sociedad civil. Analíticamente, esta situación mostró la contradicción que se había suscitado en el proceso: la

falta de voluntad política, por parte de los integrantes de *Mesa de Diálogo*, como por el Gobierno mismo, para discutir las propuestas emanadas de los grupos de la sociedad civil; y la creencia de estos grupos de que se podía conseguir una reforma en la materia sin el aval de todos los actores relacionados con la materia. En este sentido, los intereses de estas asociaciones se enfrentaron directamente con los de los medios electrónicos y su poder fáctico.

Si seguimos una definición tajante de poder fáctico, este es el poder que se ejerce de facto, por encima de cualquier autoridad o regulación, sin embargo, en el caso de esta investigación, los medios no tienen esta característica, sino que se alían e influyen en el Estado para preservar sus intereses. El mecanismo que utilizan inicia en su capacidad de negociación de acuerdo al estatus que tienen en el ramo de su actividad, y aunque la utilización de este poder fáctico se aprovecha de los huecos en el estado de derecho, al mismo tiempo éste es su límite.

Otra característica del poder fáctico de los medios electrónicos, que se muestra a través de esta investigación, es que su aplicación tiene diversos alcances, dependiendo del periodo. Sus negociaciones son más efectivas entre más cerca se encuentre algún proceso electoral, y es menor en tiempo donde no hay elecciones. De esta manera, los mecanismos de influencia de Televisa, en el proceso de discusión de la reforma a la LFRT y a la LFT, y que son descritos a lo largo de esta investigación, fueron los siguientes:

1. La negociación en base a la capacidad de audiencia televisiva. En periodos electorales la información (o desinformación) de los ciudadanos es un factor determinante para la emisión del sufragio, lo que puede constatarse en la guerra de *spots* del proceso electoral federal de 2006. En periodos no electorales se ofrece la imagen a través de la televisión para promocionar los logros de gobierno o las bondades de los proyectos gubernamentales.

2. La negociación de espacios para propaganda pre electoral y electoral. A través de esta negociación se controló a aquellos legisladores que aspiraban a otro cargo de elección popular.
3. La negociación en base a la capacidad de infraestructura tecnológica. Televisa utilizó este tipo de negociación con otros actores empresariales del área de telecomunicaciones, pues en diversos casos las empresas de este rubro necesitan forzosamente esos servicios para poder prestar los suyos. Como ya se señaló en la página 88, a nivel nacional Televisa tiene el 100% del control de la televisión satelital, el 35% de la fibra óptica, el 38% de los sistemas de televisión por cable y avanza para obtener las cuatro únicas plataformas para la transmisión de contenidos. Cuando la negociación no arrojó el resultado esperado, entonces la televisora recurrió a la presión y el chantaje.
4. La descalificación de adversarios. Cuando el debate se volvió crítico a la televisora, ésta recurrió a la descalificación del personaje, utilizando no sólo sus medios audiovisuales, sino en radio y en sus ediciones impresas.

Ahora bien, basándonos en las evidencias testimoniales, la influencia de Televisa tuvo mayor éxito debido a tres variables importantes: la debilidad de la figura presidencial, a causa una mayor actividad de la oposición en el Poder Legislativo a partir de 1997; la propia permisión del Ejecutivo Federal, al negociar derechos del Estado (como el impuesto del 12.5% de las ganancias de las televisoras entregable en especie) por cuestiones particulares, como lo señala Felipe Vicencio; y la falta de consensos para detener las acciones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial a partir de la LVIII Legislatura (año 2000), lo que ocasionó que estas negociaciones, más

que beneficiar al Poder Ejecutivo o a su partido, sólo favorecía la imagen del Presidente en la televisión, pero fue ésta quien comenzó a marcar la propia agenda pública.

Esta nueva relación entre los medios y el Poder Ejecutivo desató hechos ilícitos en diversas ocasiones, cuya respuesta del Gobierno fue nula. En este sentido resaltan cuatro ejemplos: Primero, a un par de meses del *Decretazo*, en el mes de diciembre de 2002, con la toma de la antena transmisora de Canal 40 por parte de TV Azteca, a lo que el Presidente señaló que se trataba de un litigio entre particulares. Segundo, la coerción sobre Raúl Aréchiga Espinoza para traspasar la concesión de canal 28 a Vázquez Raña, y así pudiera volver a operar Aerocalifornia¹⁷⁸, violando la LFRT. Tercero, la presión sobre Radio Monitor, programa informativo de José Gutiérrez Vivó, que lo llevó a su salida del aire entre el 29 de junio y el 3 de septiembre de 2007. Y cuarto, la salida de Carmen Aristegui de la W Radio a principios de enero de 2008, en donde Televisa argumentó que la decisión había sido tomada por la empresa española PRISA, quien administraba sus contenidos, lo cual es violatorio de la LFRT.

Estos ejemplos muestran que la influencia de los poderes fácticos impactan de manera negativa en la democracia y que, peor aún, son características de un gobierno autoritario, el cual decidió aliarse a los grandes concesionarios, y no que éstos se aliasen con él, lo cual marcó una clara diferencia en el sentido de dependencia, situación que consolidó el poder fáctico de Televisa.

Esta influencia de Televisa también se ejerció en el Poder Legislativo. Primero en el Senado de la República, al lograr detener por casi tres años la discusión de las reformas a la LFRT, desde su presentación como iniciativa en diciembre de 2002 hasta finales de 2005. Pero la no discusión de esta iniciativa, de origen ciudadano, también le perjudicaba a la propia empresa televisiva, pues al

¹⁷⁸ Sosa, Gabriel “Cadena 3: revelaciones a dos años” en Columna “Telecom. Y Medios”, Diario *El Universal*, 24 de junio de 2008.

no sacar de la obsolescencia a esta legislación, los medios electrónicos no podían avanzar con certeza jurídica en la llamada convergencia tecnológica. Por lo que más fácil que discutir la iniciativa en el Senado fue impulsar la presentación de otra en la Cámara de Diputados.

Como se describe en el capítulo 4, la iniciativa, presumiblemente redactada en la dirección jurídica de Televisa, se presentó en el Pleno de la Cámara de Diputados y en nueve días se presenta el dictamen, el cual se vota a favor por unanimidad de los presentes. Este transcurso sorprendentemente rápido se logró bajo dos factores: el apoyo de los diputados que guiaban el proceso legislativo (en las Comisiones unidas de comunicaciones y RTC, y en la sesión de pleno), que obviamente estaban aliados a la televisora, y que convencieron a sus compañeros de que se trataba de una iniciativa y dictamen sin complicaciones; y la ignorancia del contenido tanto de la iniciativa como del dictamen, por parte del resto de los legisladores.

Fue una verdadera sorpresa para los diputados federales enterarse después del contenido del dictamen que habían avalado, el cual no sólo se pretendía que tuviera el mismo proceso en el Senado, sino que además canceló, casi de forma automática, la discusión de la iniciativa de 2002. Si bien en esta Cámara el procedimiento legislativo incluyó consultas con especialistas en la materia, el proceso electoral federal de 2006 provocó el mismo fin que en la Cámara de Diputados, esto es, la negociación de Televisa con los dirigentes del PRI y del PAN dieron la línea para votar la minuta en sus términos la madrugada del 31 de marzo de 2006. De esta manera, la televisora había podido influir en la toma de decisiones de dos poderes federales.

Sobre el tercer poder, el Judicial, su turno ante la influencia de los poderes fácticos se dio un año después, cuando se comenzó con la discusión de la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores en el mes de mayo de 2006 (ver capítulo 5). Previo al comienzo de este debate en el Pleno de la SCJN, las televisoras, aunque mayormente TV Azteca, iniciaron una campaña en

contra del Ministro ponente, Salvador Aguirre Anguiano, y señalaban los perjuicios para el país en caso de que se invalidaran las reformas a la LFRT y a la LFT. Después de nueve sesiones, el fallo de la Corte fue invalidar al declarar inconstitucionales algunos artículos y parte de otros. La importancia de este proceso fue su transparencia y que las televisoras no habían podido influir a su favor en el mismo. Tras esta decisión, la materia regresaba a la arena del Poder Legislativo, ya que se requeriría de una nueva reforma para corregir los artículos declarados inconstitucionales.

Debido a la agenda política del país, esta reforma se postergó para dar lugar a otras discusiones de urgente resolución, éstas aunque ajenas a la LFRT y a la LFT, también abordaron la temática de los medios, de la participación ciudadana y de los poderes fácticos (ver capítulo 6). En la reforma electoral, uno de los temas cruciales fue la prohibición de la contratación privada de publicidad electoral, lo que provocó una intensa reacción de los medios, quienes incluso se hicieron presentes en una de las sesiones del Senado de la República para reclamar por este hecho, pero al encontrarse en un periodo no electoral, la capacidad de influencia de los medios fue menor y su poder fáctico no se aplicó. En la discusión de la reforma energética, los grupos de la sociedad civil tuvieron acceso a la participación en foros de consulta. Este proceso finalizó con un dictamen de consenso.

En esta especie de *campana de Gauss*, en donde el proceso electoral es el punto más alto, los poderes fácticos son más efectivos, mientras más alejado de este punto, su capacidad de influencia disminuye. Cualquier discusión legislativa relevante, como los debates pendientes sobre la reforma a la LFRT, a la LFT, y otros como el derecho de réplica, se convierten en un arma en contra de los propios legisladores, si se realizan en periodo electoral, ya que los intereses de los medios perdurarán por encima de los públicos. Aunque de cualquier manera, ese debate será de suma importancia para observar el desarrollo de otros tópicos: la capacidad de regulación

del Estado, el fortalecimiento de los poderes fácticos, la maduración de los grupos de la sociedad civil y su capacidad de organización y gestión. Finalmente, la opacidad en cuanto a la transparencia y acceso a la información no es una condición o mecanismo de los poderes fácticos, sino una muestra de que esta cuestión no es prioridad para el actual régimen, aunque no se trata de algo menor, pues la capacidad de acceso a la información y la transparencia misma, son elementos que cuantifican la calidad de la democracia en que vivimos. Todo lo anterior enriquecerá los futuros análisis teóricos en estas materias en el campo de las ciencias sociales.

Índice de abreviaturas

ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal (México)

AM Amplitud modulada (radio)

AMARC Asociación Mundial de Radios Comunitarias

AMEDI Asociación Mexicana de Derecho a la Información

AMIC Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación

BBC British Broadcasting Corporation (Inglaterra)

CANACINE Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática

CANITEC Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable

CCE Consejo Coordinador Empresarial

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CENCOS Centro Nacional de Comunicación Social

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica

CIRT Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión

CNRT Consejo Nacional de Radio y Televisión

COFECO Comisión Federal de Competencia

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones

COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONEICC Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana

COTSA Compañía Operadora de Teatros

CPBT (Coalición por el bien de todos)

DAB Digital Audio Broadcasting (Estados Unidos)

DOF Diario Oficial de la Federación

DTV Televisión Digital

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAP Frente Amplio Progresista

FCH Felipe Calderón Hinojosa

FES Facultad de Estudios Superiores (UNAM)

FIDECINE Fondo de Inversión y de Estímulos al Cine

FM Frecuencia modulada (radio)

GPS Sistema de posicionamiento global

GSM Sistema de comunicación móvil

GTM Grupo Telecomunicaciones Mexicanas

HDTV Televisión de alta definición

IFE Instituto Federal Electoral

ILIC Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica

IMCINE Instituto Mexicano de Cinematografía

IMER Instituto Mexicano de la Radio

IMEVISION Instituto Mexicano de la Televisión

INI Instituto Nacional Indigenista (hoy CDI)

IPN Instituto Politécnico Nacional

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

LFC Ley Federal de Cinematografía

LFRT Ley Federal de Radio y Televisión

LFT Ley Federal de Telecomunicaciones

NPR National Public Radio (Estados Unidos)

OANUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

PAN Partido Acción Nacional (México)

PEMEX Petróleos Mexicanos

PRD Partido de la Revolución Democrática (México)

PRI Partido Revolucionario Institucional (México)

PT Partido del Trabajo (México)

PVEM Partido Verde Ecologista de México

RCTV Radio Caracas Televisión (Venezuela)

RMP Roberto Madrazo Pintado

RTC Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (Secretaría de Gobernación, México)

RTC Comisión legislativa de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República (México)

SACM Sociedad de Autores y Compositores de México

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación (México)

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes (México)

SDTV Televisión digital *estándar*

SEGOB Secretaría de Gobernación (México)

SIP Sociedad Interamericana de Prensa

SOGEM Sociedad General de Escritores de México

STIC Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica

STPC Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica

TIM Televisión Independiente de México

TRM Televisión Rural de México

TVN Televisión Nacional de Chile

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UIA Universidad Iberoamericana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (ONU)

XEW Siglas asignadas al Canal 2

XHGC Siglas asignadas al Canal 5

XHTV Siglas asignadas al Canal 4

ANEXO 1

Seguimiento de algunas radiodifusoras del CDI

La radiodifusión indigenista comenzó hace 26 años, en Tlapa de Comonfort, un municipio indígena enclavado en la montaña del estado de Guerrero. El 11 de marzo de 1979, inició transmisiones la XEZV “La Voz de la Montaña”. Con frecuencia de 800 kilohertz, en banda AM, inicialmente con 1000 watts de potencia, la XEZV comenzó con su propósito de dar servicio a la población de la zona en sus propias lenguas: náhuatl, mixteco y tlapaneco, además del español.

La cobertura radiofónica se amplió y para 1982 el INI contaba con 6 emisoras instaladas, producto de la demanda de los pueblos indígenas, éstas eran la XETLA “La Voz de la Mixteca”, en Tlaxiaco, Oaxaca; XETAR “La Voz de los Tarahumaras”, en Guachochi, Chihuahua; XEPUR “La Voz de los Purépechas”, en Cherán, Michoacán; y XEPET “La Voz de los Mayas”, en Peto, Yucatán.

En 1987, se inauguró la emisora XEVFS “La Voz de la Frontera Sur”, en las Margaritas, Chiapas. Dos años después, en 1989 entraron en operación las radiodifusoras XEGLO “La Voz de Sierra Juárez”, en Guelatao, Oaxaca; y XEANT “La Voz de las Huastecas”, en Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí.

Durante la década de los 90, el Sistema se extendió con 12 emisoras más. En 1991, inició el funcionamiento de la emisora XEOJN “La Voz de la Chinantla”, en San Lucas Ojitlán, Oaxaca; y XEZON “La Voz de la Sierra de Zongolica”, en Zongolica, Veracruz; mientras que la emisora XEJMN “La Voz de los Cuatro Pueblos”, fue inaugurada en Jesús María, Nayarit, en 1992. En 1994, fueron instaladas XEQIN “La Voz del Valle” en San Quintín, Baja California; XECTZ “La Voz de la Sierra Norte”, en Cuetzalan, Puebla; y XEJAM “La Voz de la Costa Chica”, en Jamiltepec, Oaxaca. Dos años después, en 1996, fueron instaladas XEXPUJ “La Voz del Corazón de la Selva”, en X’pujil, Campeche; y XEETCH “La Voz de los Tres Ríos”, en Etchojoa, Sonora.

En 1997 se instalaron las emisoras XECOPA “La Voz de los Vientos”, en Copainalá, Chiapas; y XETUMI “La Voz de la Sierra Oriente”, en Tuxpan de las Flores, Michoacán. Ese año también entraron en operación las radiodifusoras de baja potencia, XHCHX en Chemax, XHSAZ en San Antonio Zozzil, XHSMH en Samahil y XHYAX en Yaxcopoil, las cuatro fueron ubicadas en albergues indígenas del estado de Yucatán y representan una experiencia inédita en el país pues son operadas por niños indígenas.

En 1999, se inauguraron la radiodifusoras: XECARH “La Voz del Pueblo Hñahñu”, en Cardonal, Hidalgo y XENKA “La Voz del Gran Pueblo”, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

En 2003 el INI se transformó en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a partir de entonces el SRCI es parte de su patrimonio. En marzo de 2003 la SCT otorgó tres permisos más a la CDI para operar tres radios de baja potencia en las comunidades de Zacán, Tingambato y Huecorio en el estado de Michoacán.

ANEXO 2

Organizaciones civiles representadas en la *Mesa de diálogo*

Abogados y Asesores Pro Derechos Humanos, Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Acude-Hacia una Cultura Democrática, Alfredo B. Bonfil Asociación Agrícola Local, Alianza Cívica, Amigos de Radio Educación, Asociación de Ex Alumnos del CUEC, Asociación mexicana de Creadores e Investigadores de la Radio, A.C. – AMCIR, Asociación Mexicana del Derecho a la Información A.C., Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México, Ayuda en Acción México, Causa Ciudadana (APN), CDH Fray Bartolomé de las Casas, Centro cultural Driki, Centro de acompañamiento comunitario A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, Centro de Estudios Ecumenicos A.C., Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Reynosa, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos CAM, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Centro Para el Desarrollo de la Mujer A.C. Aguascalientes, Centro PRODH, CESEM, CHILTAC, Chimalapas Maderas del Pueblo del Sureste A.C., ciberfeministar.org, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité 68, Comunalidad Alterna, Comunicación Alternativa Mixe, Comunicación Comunitaria A.C., Comunicación e Información de la Mujer A.C., Comunicación Indígena S.C., Comunicación Plural Alternativa, Comunicadores por la Democracia, Comunidad A.C. Fundación para el Desarrollo de Morelos, Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPO RFM, Convergencia Organismos Civiles por la Democracia, Coordinadora de Radios Comunitarios de Madrid, Cultura Joven A.C., DECA equipo Pueblo, Delegación Sindical de Radio Educación, Desarrollo Rural de Guanajuato, Desconcentración Urbana Amigos del Medio Ambiente DUAMA, En Neza Radio, Enlace, Comunicación y Capacitación A.C., Espiral A.C., Estéreo Comunal (Fundación Comunalidad A.C.), Foro de Apoyo Mutuo-FAM- México, Frecuencia 99.1, Frente Campesino Morelense, Fundación Manuel Buendía A.C., Grupo de Tecnología Alternativa, Hijos del 68, Incide A.C., Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos AC, Integración para la Democracia Social A.P.N., Jen Poj, Radio de Santa María Tlahuitoltepec, La Nopalera Radio, La Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, La Voladora Radio, Laizquierda.net, Mexico.com, Misión Civil por la Paz, Movimiento Ciudadano en Defensa del Medio Ambiente de Morelos A.C., Movimiento por la Defensa del Patrimonio Familiar de los Morelenses “El Barzón del Sur”, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Mujeres en Frecuencia, Mujeres para el Diálogo México, Ojos por la Democracia, Opción SC, Periódico Zócalo Comunicación Política y Sociedad, Programa Agenda Política

México (Teleamerica Canal 44, Dallas, Texas), Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular AC PRODUSSEP, Promoción Salud Integral IAP, Proyecto Huicholes y Plaguicidas, Radio Bemba, Radio Calenda, Radio Guadalupe, Radio Teocelo, Radio Vallekas, Radioactividad Cheranatzicurin Michoacán, Red de aristas Visuales y Sonoros Colectivo F 69, Red de Comunicación de Morelos, Red de Mujeres Activistas de Durango, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio RMLAC, Salud Integral para la Mujer SIPAM, Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras DEAS-INAH, Servicios de Comunicación, Servicios Informativos Procesados (SIPRO) A.C., Taller de Investigación y Difusión Zapoteca “Uken Ke Uken” de Yalalog, Tupa Móvil Radio, Unión de Pueblos de Morelos, A.C., Voces Contra el Silencio (Video Independiente AC) Xochipilli A.C.

ANEXO 3

Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica

Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, 10 de octubre de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de diciembre de 1968 y cuya vigencia inició el 1 de julio de 1969, establece un impuesto que grava el importe total de los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas que funcionan al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la Nación, cuando la actividad del concesionario esté declarada expresamente de interés público por la ley;

Que entre las empresas a que se refiere la ley a que hace mención el considerando anterior se encuentran las concesionarias de estaciones de radio y televisión;

Que el 1 de julio de 1969 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión, el pago del impuesto que se indica, con algunas modalidades ;

Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece la necesidad de fortalecer la función social que les corresponde desempeñar a la radio y a la televisión en su calidad de medios concesionados y permisionados, así como el compromiso de promover una eficiente administración y utilización de los tiempos del Estado, por lo cual es necesario ajustar los llamados tiempos fiscales, a fin de que éste cumpla las funciones que le son propias;

Que en el esquema jurídico actual, existe incertidumbre en el alcance de audiencia efectiva que tienen los tiempos que administra el Ejecutivo Federal en los medios electrónicos de comunicación, lo que obliga a replantear su uso para que éstos puedan cumplir adecuadamente su propósito social;

Que es necesario emitir el presente Decreto que ofrece certeza y seguridad jurídicas a los concesionarios de estaciones de radio y televisión, al prever una nueva forma en la que, en el futuro y en atención a su función social, las concesionarias podrán dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que les impone el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 31 de diciembre de 1968,

he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo primero.- Los concesionarios de estaciones de radio y televisión podrán optar por realizar el pago del impuesto a que se refiere el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de diciembre de 1968, en la siguiente forma:

- I. Los concesionarios que tengan la calidad de responsables solidarios al pago de dicho impuesto y, por tanto, como terceros interesados en el cumplimiento de esa obligación, pagarán la contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones de televisión, y con treinta y cinco minutos diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de veinte a treinta segundos, sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan una competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial, a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice campañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y servicios, lo hará en forma genérica, en tanto que la industria de la radiodifusión comercial se ocupará de la publicidad y propaganda de marcas, servicios o empresas específicos.

Si el Ejecutivo Federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión.

- II. Los tiempos de transmisión a que se refiere la fracción anterior serán distribuidos de manera proporcional dentro del horario de las 06:00 a las 24:00 horas en cada radiodifusora o televisora de que se trate, en términos de los requerimientos que emita la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.

Artículo segundo.- Con el pago a que se refiere el artículo anterior, quedará cubierto íntegramente el impuesto establecido por el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las

Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de diciembre de 1968. Este pago liberará a los sujetos pasivos y a los responsables solidarios del impuesto a que se refiere el artículo anterior.

Artículo tercero.- Esta autorización subsistirá mientras esté en vigor el impuesto citado. En caso de que el concesionario no proporcione los tiempos de transmisión a que esté obligado o no cumpla con sus otras obligaciones, el impuesto será cubierto de acuerdo con las disposiciones fiscales relativas al pago de contribuciones y, en su caso, se exigirá a través del procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Para los efectos indicados en el párrafo anterior, la Secretaría de Gobernación informará al Servicio de Administración Tributaria de los casos en que el concesionario no proporcione los tiempos de transmisión a que esté obligado o no cumpla con sus otras obligaciones.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión, el pago del impuesto que se indica, con algunas modalidades, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 1 de julio de 1969.

TERCERO.- Se abroga el Acuerdo por el que se constituye una Comisión Intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que dispone el Estado en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 21 de agosto de 1969.

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de octubre de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada.-** Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda.-** Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz.-** Rúbrica.

ANEXO 4

Nueve argumentos en contra del CNRT

1.- Al conferirse al *Consejo* funciones regulatorias en materia de administración del espectro y de redes diversas a los sistemas de radiodifusión, se establece una medida contraria a la convergencia tecnológica y de servicios, debido a que, por una parte, ya existe un órgano regulador, que es la Cofetel; y por otra, que dicho Órgano ya es el administrador del espectro radioeléctrico en su conjunto, función que entonces no debe ser compartida con otra instancia atendiendo a criterios de orden y eficacia en la acción administrativa. La propuesta de fortalecer la fórmula de la Cofetel como órgano regulador exclusivo de ambas instancias, fomenta más la convergencia tecnológica entre telecomunicaciones y la radiodifusión.

2.- Antes de pensar en la creación del Órgano Consultivo de Radio y Televisión, se requiere reflexionar sobre la conveniencia de contar con un mismo Órgano Regulador del servicio de radio y televisión para todo el país, que sea una misma autoridad con facultades claras y objetivas. Para lograr esto, lo procedente sería fusionar en una sola ley el Órgano Regulador de la Radio y la Televisión abierta con el ya existente en el área de las telecomunicaciones, es decir, con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

3.- Al formularse el *Consejo de Radio y Televisión* como un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular el servicio de radio y televisión, se estaría creando una mega instancia con “súper funciones” que lo convierten en anticonstitucional. En éste sentido, es más conveniente crear un órgano desconcentrado de la SCT con autonomía técnica operativa y de gestión, así como de mantener las facultades estratégicas a cargo de la SCT y SEGOB. Un órgano con éstas características seguiría siendo parte del Poder Ejecutivo Federal y tendría relación de subordinación con este, aunque gozaría de autonomía regulatoria en aspectos técnicos y de gestión.

4.- El crear un Órgano Regulador independiente de la SCT duplicará funciones que incrementarán la burocracia, que de por si ya es muy grande, y representará un considerable aumento de gastos presupuestales en estructuras de control administrativo para la radiodifusión. En éste sentido, la creación del *Consejo* significa instaurar organismos de administración paralelos al gobierno, bajo la modalidad de Consejos Ciudadanos, cuyos consejeros cobran muy caro, y asumen funciones que legítimamente les corresponde a los funcionarios de las diferentes Secretarías del despacho del Ejecutivo ya establecidas. De seguir esta moda, no pasará mucho tiempo en que tengamos dos estructuras burocráticas paralelas:

una la del gobierno legítimamente constituido y otra la de los llamados Consejos Ciudadanos, atendiendo asuntos que deberían ser del Estado. Eso sí, ambas con cargo al presupuesto público.

5.- No es conveniente crear el *Consejo Nacional de Radio y Televisión* como Órgano independiente porque cuenta con un diseño inconstitucional. Esto debido a que si, por una parte, se contempla como un Órgano desconcentrado, por definición carente de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que formaría parte de la administración pública central; por otra, se le otorga una estructura “ciudadanizada” al integrarlo con Consejeros que no son parte de la administración pública, y que por lo tanto, no pueden ejercer funciones de autoridad de acuerdo con la Constitución Política Mexicana.

6.- El *Consejo* pretende concentrar facultades estratégicas que desempeña actualmente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que en realidad le daría una autonomía plena respecto del Poder Ejecutivo Federal y eso lo volvería inconstitucional.

7.- Se propone que se integre el *Consejo* por 5 consejeros nombrados por el Presidente y no objetados por el Senado, a efecto de que puedan ejercer funciones de autoridad. Sin embargo, el artículo 76 constitucional señala que el Senado de la República, en muy estricto sentido, no tiene facultades para la objeción del nombramiento de los Consejeros. Con el ejercicio de este tipo de autonomía, se garantizaría que la política en materia de radio y televisión no sea responsabilidad gubernamental, sino de otras instancias.

8.- El proyecto de Ley pretende acotar la discrecionalidad de la autoridad con el supuesto argumento de que transfiere atribuciones de un ámbito personal, esto es, del Secretario de Comunicaciones, a uno colegiado, el de los Consejeros del Órgano Regulador de Radio y Televisión. La verdad es que la aplicación de la discrecionalidad de una facultad no reside en si ésta es ejercida por una persona o por un conjunto de personas. Más bien reside en razón de que la facultad en cuestión se ejerza subjetivamente con amplios márgenes de decisión y valoración exclusiva de la autoridad.

9.- Finalmente, el *Consejo* no debe tener autonomía de gasto pues contravendría las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. (Esteinou, 2006: 8)

ANEXO 5

Extracto de la versión estenográfica de la sesión ordinaria del día jueves 1 de diciembre de 2005

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárrega: A esta Presidencia ha llegado un comunicado de la Junta de Coordinación Política que pido a la Secretaría dé lectura al mismo y, en su caso, solicite la aprobación de la asamblea.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

Junta de Coordinación Política, "Palacio Legislativo de San Lázaro a 1o. de diciembre del 2005.

"Diputado Heliodoro Díaz Escárrega, Presidente de la Mesa Directiva

H. Cámara de Diputados

P r e s e n t e.

"Con fundamento en el artículo 5o. del acuerdo de la Conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos relativo al orden del día de la sesión, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación solicitamos a usted atentamente que el dictamen que a continuación se señala y que fue publicado en el orden del día del 1o. de diciembre se turne lo antes posible y se le dispense la segunda lectura.

"Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la *Ley Federal de Radio y Televisión*.

"Sin más por e momento agradezco de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

"Atentamente

"Diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayfett Chamor, coordinador del PRI; diputado Jorge González Morfín, coordinador del PAN; diputado Jorge Kawhagi Macari, coordinador del Verde Ecologista, y diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador de Convergencia"

En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se aprueba y se dispensa la segunda lectura.

Esta Presidencia no tiene oradores registrados para fundamentar el dictamen.

En consecuencia, se considera suficientemente discutido en lo general.

Para efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no hay oradores registrados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un sólo acto de esta iniciativa.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un sólo acto.

Votación

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Diputado Presidente: Se emitieron 327 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 327 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la *Ley Federal de Radio y Televisión*.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ANEXO 6

Radios comunitarias que bajo las gestiones de la AMARC, obtuvieron su permiso de operación a partir del año 2004.

Radio	Localidad	Frecuencia	Potencia	Fecha de permiso
Radio Calenda	San Antonio Castillo Velasco, Municipio de Ocotlán, Oaxaca.	107.9 FM	1000 watts	22 de abril de 2005
Radio Jen Poj	Santa María Tlahuiltontepec, Mixe, Oaxaca	107.9 FM	1000 watts	6 de diciembre de 2004
Radio Nandia	Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca	107.9 FM	370 watts	22 de diciembre de 2004
Radio Uandarhi	Uruapan, Michoacán	107.9 FM	200 watts	6 de diciembre de 2004
Radio Erandi	Tangancícuaro, Michoacán	107.9 FM	500 watts	14 de marzo de 2005
Radio Cultural FM	Tepalcatepec, Michoacán	107.9 FM	300 watts	22 de diciembre de 2004
Radio Bemba FM	Hermosillo, Sonora	95.5 FM	4000 watts	31 de mayo de 2005
Ecos de Manantlán	Zapotitlán de Vadillo, Jalisco	107.9 FM	39 watts	22 de diciembre de 2004
La Voladora	Amecameca, Estado de México	97.3 FM	300 watts	9 de mayo de 2005
Omega Experimental	Texcoco, Estado de México	100.5 FM	700 watts	9 de agosto de 2005
Radio Huayacocotla ¹⁷⁹	Huayacocotla, Veracruz	105.5 FM	10,000 watts	14 de febrero de 2005

Fuente: (Calleja, 2008: 47-50)

¹⁷⁹ Esta radiodifusora adquirió su permiso bajo gestión directa.

ANEXO 7

Turno de la iniciativa de ley que reforma los artículos 17-D, 17-G, 28, y 28-A, de la LFRT a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos

-EL C. SENADOR BLAS RAFAEL PALACIOS CORDERO: (Desde su escaño.) Señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CHAURAND ARZATE: Ya terminó el orador.

-Se turna a las Comisiones...

-EL C. SENADOR BLAS RAFAEL PALACIOS CORDERO: (Desde su escaño.) Señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CHAURAND ARZATE: Senador Blas, no hay hechos ni rectificación de hechos, la única manera que en el capítulo de iniciativa se tiene de intervenir es cuando se hacen alusiones personales, ya sea alguno de los senadores o algún partido político. En este caso lo único que está solicitando es el turno a Comisiones.

-Se turna a las Comisiones Unidas...

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: (Desde su escaño.) Es sobre el turno suyo, Presidente, de lo que queremos saber, sobre el turno que acaba de dar.

-EL C. PRESIDENTE CHAURAND ARZATE: Todavía no termino de dar el turno, señor, todavía no lo termino de dar.

-Senador Bartlett.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: (Desde su escaño.) Nada más quiero señalar que esta iniciativa tiene que ver con lo que vamos a discutir después.

-EL C. PRESIDENTE CHAURAND ARZATE: En el momento de la discusión lo podrá hacer de referencia, Senador Bartlett.

-Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

-Sí, Senador Corral.

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: (Desde su escaño.) Señor Vicepresidente, quiero hacer una observación a su turno.

Usted está turnando una iniciativa de reformas al artículo que no existe en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Usted no puede turnar una iniciativa sobre artículos inexistentes. Estos artículos, las

fracciones que aquí se mencionan no existen en la Ley, en la Ley de Telecomunicaciones sólo existe el numeral 17, no las fracciones que aparecen en la iniciativa. Ese es un vicio de origen de inconstitucionalidad en este procedimiento de iniciación de la Ley.

-EL C. PRESIDENTE CHAURAND ARZATE: Señor Senador Corral, con el debito respeto a toda la Asamblea, esta presidencia ha tomado una determinación, el derecho constitucional de presentar iniciativas equivocadas o no, le asisten a todas y a todos los señores legisladores. Precisamente la Comisión determinará lo conducente.

-En el apartado... Sí, señor Senador Ortega.

-EL C. SENADOR JESUS ORTEGA MARTINEZ: (Desde su escaño.) Es verdad que cualquier legislador puede presentar la iniciativa que así considere, pero hay que hacer notar, señor presidente, que los que presentan esta iniciativa parten del hecho de que la minuta que envió la Cámara de Diputados va a ser aprobada por el Senado de la República, y están haciendo modificaciones a una minuta que no ha sido aprobada por el Senado de la República.

Ese procedimiento es absolutamente irregular, no tiene que ver con la inteligencia o la facultad de los legisladores. Se está planteando una reforma sobre una ley que aún no existe, que no está siendo aprobada por el Senado de la República aún, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CHAURAND ARZATE: Esa es una facultad de las Comisiones, no de esta presidencia. Esta presidencia tiene la obligación de darle el turno y las Comisiones resolverán lo conducente.

Anexo 8

Carta de la Secretaría de Gobernación al diario *La Jornada*

Carmen Lira Saade

Directora General del periódico "La Jornada"

P r e s e n t e

Con relación a la información que publica el diario La Jornada en su primera plana el día de hoy, donde señala "Se anuló la ley Televisa con el aval de Calderón", me permito precisar a usted lo siguiente:

1. Es falso que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, haya avalado el proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutido en sesión pública a partir del 28 de mayo pasado, sobre la inconstitucionalidad de las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones.
2. Es absolutamente falso que la Secretaría de Gobernación haya sido enlace entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Los Pinos como se afirma en la nota de su diario.
3. Es totalmente falso que la Secretaría de Gobernación haya tenido alguna participación con el propósito de "anular" la "ley Televisa" y mucho menos con el aval del Presidente Calderón, como lo publica su diario el día de hoy.
4. Resulta también falso que el secretario (Francisco) Ramírez Acuña haya sido el primero en recibir el dictamen elaborado por el magistrado Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y que Gobernación dio "señales de que no había problema con el sentido del dictamen", como se afirma en la nota de su diario.
5. Negamos categóricamente que el senador Santiago Creel Miranda haya tenido el aval del Gobierno Federal para cabildear con los ministros como se afirma en la nota.

La Secretaría de Gobernación reitera su profundo respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todas y cada una de sus decisiones en el libre ejercicio de sus atribuciones.

Lamentamos que la información que publica su diario este día con relación a la nota mencionada propicie desinformación y confusión ante la opinión pública y, particularmente, ante los lectores del diario.

Por último, pido a usted publicar la presente a fin de que sus lectores no permanezcan con información de fuentes imprecisas.

Lic. Fernando Arias Pérez.

Director General de Comunicación Social.

ANEXO 9

Comunicado de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desmiente categóricamente que la decisión tomada en la acción de inconstitucionalidad 26/2006, haya sido determinada, influenciada o avalada, previamente a su discusión pública, por cualquier instancia gubernamental.

Los ministros del Alto Tribunal son independientes y toman sus decisiones conforme a la Constitución; por ende, rechazan enérgicamente las imputaciones que se les hacen.

Cabe recordar que el proyecto elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue entregado a los ministros, a la Cámara de Senadores, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y al representante común de la minoría del Senado que presentó dicha acción, el 3 de mayo pasado. Por lo tanto, desde esa fecha se hizo del conocimiento de los interesados.

A partir del día 10 del mismo mes, estuvo a disposición de todas las personas a través del portal de la SCJN, y la construcción de la resolución se realizó a los ojos de todos, durante ocho sesiones públicas difundidas por televisión e Internet.

La sola insinuación de que hubo injerencia de otro tipo de intereses pretende cuestionar el proceso transparente e incluyente, ofendiendo, en principio, a la sociedad en su conjunto, en cuanto mina la credibilidad de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, así como a quienes participaron en esta definición constitucional.

ANEXO 10

Comité Ciudadano

Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Artículo 19 Sección México, Incide Social A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comunicación Comunitaria A.C., Comunicación e Información para la Mujer A.C. CIMAC, Servicios para la Educación Alternativa - EDUCA-Oaxaca, Fomento Cultural y Educativo A.C., Alianza Cívica A.C., Infancia Común A.C., Red por los Derechos de la Infancia en México, Presencia Ciudadana Mexicana A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. Enlace y Comunicación A.C., Red por la Participación Ciudadana A.C. (Chihuahua), Asociación de Abogadas Chihuahuenses A.C, Enlace y Comunicación A.C, Chan Tza Can S.S.S. (Yucatán), Coordinación Nacional de Mujeres de Organizaciones Civiles "Por un Milenio Feminista", CEP- Parras (Coahuila), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), DECA Equipo Pueblo A.C., Servicios para la Paz A.C. SERAPAZ, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de la UNAM, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (Mexicali, BC), Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C., Desarrollo Comunitario y Cultural Ma nguhe, A. C., Revista *Zócalo*, Revista La Guillotina, Revista Generación, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, La Forja - Tasqueña, Frente Cívico Taxco, Comité Ciudadano de Ixtapan de la Sal, Red Ciudadana de Puebla, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) , ADIVAC, Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular, A. C. (PRODUSSEP), Cauce Ciudadano A.C , Comité Cerezo México, Dinamismo Juvenil A.C., Alianza Cívica - Chiapas (Chiapas), Católicas por el Derechos a Decidir A.C., Centro de Atención a la Mujer A.C. Chihuahua (Chihuahua) Centro de Economía Social Julián Garcés, A.C. (Tlaxcala), Empresarios de los Medios de Comunicación, Fundación Vision México 2020 A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos:"Todos los Derechos para Todos y Todas": Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (Distrito Federal), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jalisco), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C.(Jacala, Hidalgo.), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlaxcala.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas), Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV)(Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH)(Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos "Don Sergio" (Jiutepec, Morelos), Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova". A.C. (Tapachula, Chiapas), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.), Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., (Tehuantepec, Oax), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Guanajuato.), Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", A. C. (Oaxaca, Oaxaca.), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chiapas), Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamaulipas.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jalisco), Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C. (Saltillo, Coahuila), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Guerrero), Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", A. C. (Oaxaca, Oaxaca), Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yucatán), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coahuila), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, Nuevo León), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C., (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas), Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Cayuca de Benítez, Guerrero.), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Puebla.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chihuahua.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Morelos), Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos "Martín de Tours", A.C. (Texmelucan, Puebla), Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oaxaca.), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), (Palenque, Chiapas), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal) Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chiapas.), Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Guerrero), Comité de Derechos Humanos "Sierra Norte de Veracruz", A.C., (Huayacocotla, Veracruz), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Colima.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tabasco), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tabasco), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Guanajuato), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo. AC (Tulancingo, Hidalgo), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), Foro de Jóvenes con Liderazgo A. C, Infancia Común A.C, Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yucatán.), Instituto Guerrerense de Derechos

Humanos, A. C. (Chilpancingo, Guerrero.), Inglobal A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jalisco), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jalisco.), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Puebla), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Guanajuato), Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, San Luis Potosí.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tabasco), No Grupo (Jalisco).

Ciudadanos y Ciudadanas Alma Rosa Alba de la Selva, Sergio Aguayo, Hugo Almada, Jorge Alonso, Silvia Alonso, Miguel Álvarez, John Ackerman, Ana María Argüelles, Juan Carlos Arjona Estévez , Rodrigo Ayala, Alberto Aziz Nassif, Miguel Bazdresch Parada, Laura Becerra, Selma Beraud, Kristian Bernal Moreno , Mario Bladimir Monroy Gómez, Carlota Botey, Laura Breña , Jaime Brito, Norma Bustamante Martínez, Aleída Calleja, Norma Castañeda Bustamante, Oscar Castro Soto, Alfonso Celestino Pérez , Guadalupe Cortes, J. Dionisio B. Córdova Tello, Yolanda Elia Calles, Susana Cruickshank, Carlos Cruz, Federico Campbell, Antonio Castañeda de Luna, Jaime Cuevas Mendoza , Gabriel Delgado, Alejandra Ezeta, Guillermo Fadanelli, Denise Dresser, Alfredo Figueroa, Felipe Fulop, Jesús Cantú, Sergio Cobo, Miguel Concha Malo, Héctor García, Magdalena García, Sergio García, Carlos Martínez Renteria, Karla González, Martha Delia González Aguilar, Miriam Gomezcésar, Carolina Grajales Valdespino, Miguel Ángel Granados Chapa, Témoris Grecko Berumen, Aidé García, Paulina Gutiérrez Jiménez, José Luis Gutiérrez Román, Alicia Ibarguengoitia, Cuauhtémoc López, Marusia López, Carlos Heredia, Octavio Hernández Lara, María Teresa Jardí Alonso, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva Madrid, Sergio López Menéndez, María López de la Rica, Irma Rosa Martinez, Paulina Mancebo Padilla, Andrea Márquez, Cristina Martín, José Manjarrez Medina, Rocío Mejía, Oscar Menéndez, Delfina Montaña, Consuelo Morales, Maricarmen Morales, Mara Muñoz, Sara Murua, Rosario Novoa Peniche, Josefina Pataky, Miguel Ángel Paz, Carlos Pérez, Enrique Pérez, Ivette Pérez Medina, Laura Elisa Pérez, David Peña Rodríguez, Gerardo Pimentel , Luis Pineda, Felipe Posadas, Raúl Ramírez Baena, Gloria Ramírez, Nashieli Ramírez, Darío Ramírez Salazar, Héctor Ramos Aguilar, Leonel Rivero, Rosa María Ruvalcaba , Ana Saiz, Armando Salgado, Arturo Saucedo, José Guadalupe Sánchez, Gabriel Sánchez Díaz, Miguel Sarre, Irma Eréndira Sandoval, Brisa Solis, Víctor Suárez Carrera, Alma Soto, Maria Vallarta Vázquez, Juan Antonio Vega Báez, Elsa Villalpando, Jenaro Villamil, Alfredo Zepeda, Teresa Zepeda Torres, Carlos Zetina, Verónica Stern, Francisco R. Dávila, Ivabelle Arroyo, Isabel Sepúlveda, Augusto Chacón, Enrique Valencia, Joaquín Osorio, José Bautista, Rubén Alonso, Jaime Preciado.

ANEXO 11

Primer comunicado del *Frente nacional por una nueva ley de medios*

La exigencia de una reforma democrática del modelo de comunicación que tenemos en México debe pasar por una nueva legislación de medios.

Los últimos acontecimientos en el país han dejado de manifiesto el rol que ocupan los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, en la vida democrática del país, convirtiéndose en un poder fáctico por encima de las instituciones, algunos ejemplos de ello son el proceso electoral del 2006, la llamada ley Televisa, y la cancelación del programa radiofónico de Carmen Aristegui.

Por ello la lucha por una reforma a la medida de las aspiraciones y los anhelos de la sociedad democrática, debe sumar los esfuerzos de todos al reconocer el derecho a la comunicación.

No puede seguirse soslayando el que las libertades de expresión y el derecho a la información son derechos de todos los ciudadanos y el acceso equitativo a los medios de comunicación para que se puedan debatir ideas es la forma concreta como se garantizan tales derechos.

La garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información obliga a nuestros representantes populares, la definición de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.

Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.

Frente a ese intento de despojo de una buena parte del espectro radioeléctrico, que se conoció como la Ley Televisa, la acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de senadores, acompañados

por importantes sectores de la sociedad, permitió que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara, por violentar la Constitución, los artículos más relevantes que se habían propuesto.

Esa histórica decisión de la Corte, sin cuyo impulso social no hubiera sido posible, contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que el año pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes.

La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión.

La ausencia de los derechos de las audiencias frente a los emisores pone de manifiesto la necesidad de la reforma democrática del modelo de comunicación en el país, pues los medios electrónicos utilizan un Bien del Dominio de la Nación que nos pertenece a todos.

Esta nueva ley, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la Ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México.

Es grande el reto, pues es una reforma como ésta, se enfrenta a la resistencia de enormes intereses económicos y al poder desmedido que tienen los actuales concesionarios no sólo sobre la clase política, sino sobre diversos actores sociales.

Lo que falta hoy es unirnos y organizar el esfuerzo de todos aquellos que compartimos los anhelos de una reforma democrática de los medios, hacer valer nuestra voz en el proceso de reformas legales, por ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), convoca a la conformación de un *Frente nacional por una nueva ley de medios*, que este siempre presente en las deliberaciones, exigiendo a los legisladores actuar con responsabilidad frente al interés general, demandar una legislación que garantice, al menos los siguientes aspectos:

1. Los Derechos de los Ciudadanos a una Comunicación Democrática.
2. El Servicio Público que deben prestar los medios electrónicos y los derechos de las audiencias.
3. La Rectoría de Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación
4. Aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad.
5. Una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital.
6. Un órgano regulador autónomo, con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas.

7. Acceso universal y Conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social, a los intereses empresariales.
8. Diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente.
9. Libertad, pluralidad, responsabilidad, de acuerdo a estándares democráticos de libertad de expresión, que permitan la pluralidad informativa, así como diversidad en la operación de los medios de comunicación: la privada-comercial, la pública-estatal y la comunitaria-sin fines de lucro.
10. Derecho de Réplica.
11. Integridad de los contenidos, que eviten la censura.
12. Defensa de intereses nacionales y transparentar la inversión extranjera en medios de comunicación electrónica.
13. Promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto la AMEDI, invita a su organización a que forme parte de este *Frente nacional por una nueva ley de medios*, conocedores de que en la defensa de los principios democráticos que ustedes enarbolan, se encuentra el derecho a la información, y porque es necesario que en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso se haga valer este asunto como uno de los esenciales para la democracia en nuestro país.

ANEXO 12

Organizaciones sociales miembros del *Frente nacional por una nueva ley de medios*

Academia Mexicana de Arte Teatral, Al Consumidor, A.C. (www.alconsumidor.org), Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), Artículo 19, Asociación de Documentalistas, Adoc, Asociación de Tecnología Apropiada, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC (www.AMICmexico.org), Asociación Mexicana de Comunicadores e Investigadores de la Radio. AMCIR, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) (www.AMEDI.org.mx), Asociación Mexicana de Productores Independientes, AMPI, Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, A.C., Asociación Nacional de Actores, ANDA, Asociación Nacional para la Reforma del Estado, Calacas y Palancas, Católicas por el Derecho a Decidir, Central de Organizaciones Campesinas y Populares A.C., Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Club de Periodistas A.C., Coalición Ciudadana Nacional, Colectivo 1060, Colegio Nacional de Economistas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité Nacional de los 63 Pueblos Indígenas, A.C., Comunicación Comunitaria (www.comunicacioncomunitaria.org), Congreso Ciudadano de Jalisco, Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres, Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, Conorp, Consejo Nacional para la Enseñanza y la investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional CNPA-MN, DECA, Equipo Pueblo, Forma (www.equipopueblo.org.mx), Despertar del Magisterio, Ecos Oax, Expresión Plural A.C., Federación Internacional de Periodistas, Federación Mexicana de Sociedades Cooperativas y Medios, Fomento Cultural y Educativo, A.C., Fray Francisco de Vitoria, Frente Nacional contra Wal-Mart (www.geocities.com/frentenacionalac), Frente por la Libertad de Expresión Alfredo Jiménez Mota / Revista Contralínea Sinaloa, Fundación Manuel Buendía, Fundación Prensa y Democracia (Prende), Fundar, GENES; Mujeres Pro Salud, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Hombres por la Equidad. Centro de Intervención con Hombres e Investigación sobre Género y Masculinidades, A.C., Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C., Instituto de Estudios para la Transición Democrática, A.C., Instituto Mexicano de Educación para el Consumo, A.C., Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana / Agencia de Información Notiese, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos,

Pacto de Grupos Ecologistas, Poder del Consumidor, (www.elpoderdelconsumidor.org), Por Paz con Democracia, Propuesta Cívica (APN), (www.propuestacivica.org.mx), Red Mexicana de Protección a Periodistas, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, Remuchemo Cultural, SHOTTAMA A.C., (www.shottama.org), Sindicato de Radio Educación, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Sipam, Salud Integral para la Mujer, Sociedad de ex alumnos del CUEC, Sociedad General de Escritores de México (Sogem), Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Bibliografía

Aguayo, Sergio

- 2009 *Democracia: Medios de comunicación y elecciones en México*, Fundar, México.

Aguilar, Luis F.

- 2007 “El papel de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas”, en: Secretaría de Gobernación, *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después del 2006*, Secretaría de Gobernación, México.

Alonso, Jorge

- 1998 *Democracia*, UNAM, México.

Arato, Andrew

- 2001 *Sociedad civil y teoría social*, Fondo de Cultura Económica, México.

Arditi, Benjamín

- 2005 *¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones*, Editorial Anthropos-UNAM, México.

Ávila Pietrasanta, Irma; Calleja Gutiérrez, Aleida; Solís Leere, Beatriz

- 2002 *No más medios a medias*, fundación Friederich Ebert-México, Senado de la República, México.

Calleja, Aleida

- 2008 “La radiodifusión comunitaria. Espacio de construcción ciudadana”, en: Vega Aimée; Portillo, Maricela; Repoll, Jerónimo (coord.) *Las claves necesarias de una comunicación para la democracia*, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco.

Calleja, Aleida & Solís, Beatriz

- 2007 *Con permiso. La radio comunitaria en México*, AMEDI-AMARC-Fundación Friedrich Ebert, México.

Cansino, César

- 2007 “Democracia y capital social. El papel de las organizaciones de la sociedad civil en el fomento de la participación ciudadana en México” en *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después del 2006*, págs. 283-310, Secretaría de Gobernación, México.

Cantú, Maria Elena

- 2005 *Medios y poder. El papel de la Radio y la Televisión en la Democracia Mexicana*, Grupo Editorial Norma, México.

Castells, Manuel

- 1999 *La era de la información II. El poder de la identidad*, Siglo XXI Editores, México.

Castro Leal, Antonio

- 1969 “Radio y televisión”, en: *Los medios de comunicación de masas en México*, Serie Estudios 10, UNAM, México.

Corral, Javier & Arredondo, Pablo

- 2007 *La Ley Televisa: balance y perspectiva*, Universidad de Guadalajara-AMEDI, México.

Cremoux, Raúl

- 1982 *La legislación mexicana en radio y televisión*, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México.

Crouch, Colin

- 2004 *Posdemocracia*, Editorial Taurus, México.

Chávez Carlos

- 2005 “Sociedad civil y tercer sector en la discusión del segundo circuito de la política”, en: Ardití, Benjamín (ed) *¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones*, Editorial Anthropos-UNAM, México.

Dahl, Robert

- 1993 *La poliarquía. Participación y oposición*, Editorial Tecnos, Madrid.

Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto, Panfichi, Aldo

- 2006 *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, Fondo de Cultura Económica-Ciesas-Universidad Veracruzana, México.

Durand, Víctor Manuel

- 2007 “Cultura política y participación ciudadana” en *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después del 2006*, págs. 155-190 Secretaría de Gobernación, México.

Elster Jon (compilador)

- 1998 *La democracia deliberativa*, Gedisa Editores, España.

Fernández Christlieb, Fátima

- 1982 *Los medios de difusión masiva en México*, Juan Pablos Editor, México.

Fuentes, Raúl

- 2005 “El campo académico de la Comunicación en México como objeto de análisis auto-reflexivo” En: Lozano, José (ed) *La comunicación en México: Diagnósticos, Balances y Retos*, ITESM/CONEICC, México.

Gutiérrez López, Roberto

- 2005 *Información y democracia. Los medios de comunicación social y su influencia sobre la política, el caso mexicano*, UAM-Ediciones Pomares, México.

Habermas, Jurgen

1998 *Facticidad y validez*, editorial Trotta, Barcelona, España.

Held, David

2002 *Modelos de democracia*, Alianza ensayo, Madrid, España.

Hernández, Francisco & Orozco, Guillermo

2007 *Televisiones en México, un recuento histórico*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.

Jensen, Bruhn

2007 “Por qué lo virtual puede ser bueno para la democracia” en *Comunicación, Diálogos Forum Universal de las Culturas*, págs. 65-86, Fondo Editorial de Nuevo León, Monterrey, México.

Lay Arellano, Israel Tonatíuh

2005 *Análisis del proceso de la Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica*, Universidad de Guadalajara, México.

Mejía Barquera, Fernando

1989 *La industria de la radio y la televisión y la política del Estado Mexicano (1920-1960)*, Fundación Manuel Buendía, México.

Nino, Carlos

2003 *La construcción de la democracia deliberativa*, Gedisa Editores, Barcelona, España.

O'Donnell, Guillermo

2004 (I) *La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. El debate conceptual de la democracia*, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, Perú.

2004 (II) *La Democracia en América Latina. El debate conceptual de la democracia. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Ideas y aportes*, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, Perú.

2004 (III) *La Democracia en América Latina. El debate conceptual de la democracia. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Bases empíricas del informe*, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, Perú.

Olguín, Francisco

2007 *Democracia y Medios de Comunicación en América Latina*, Secretaría de Gobernación, México.

Ortega, Patricia

- 2006 *La otra televisión, por qué no tenemos televisión pública*, UAM-Editorial E, México.

Piñón, Francisco

- 2003 *Filosofía y fenomenología del poder*, UAM-Plaza y Valdés, México.

Roitter, Mario

- 2005 “El tercer sector como representación topográfica de la sociedad civil”, en: Ardite, Benjamín (ed) *¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones*, Editorial Anthropos-UNAM, México.

Romo, Cristina

- 1990 *La otra radio, voces débiles, voces de esperanza*, Fundación Manuel Buendía - IMER, México.

Sánchez, Enrique

- 2005 *Medios de Comunicación y Democracia*, Grupo Editorial Norma, Colombia.

Sánchez, Enrique; Aceves, Francisco; Cortés, Marco Antonio; Ibarra, Armando

- 2007 *Gobernabilidad democrática, cultura política y medios de comunicación en México*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México

Santos, Boaventura

- 2005 *Reinventar la democracia, reinventar el Estado*, Editorial Clacso, Buenos Aires, Argentina.

Sartori, Giovanni

- 1992 *Elementos de teoría política*, Alianza Editorial, Madrid.

-
- 1997 *Homo Videns, televisione e post-penseiro*, Laterza, Roma, Italia.

-
- 2000 *Homo Videns, la sociedad teledirigida*, Editorial Taurus, México.

Secretaría de Gobernación

- 2007 *Los nuevos retos de la gobernabilidad democrática*, Fondo de Cultura Económica-SEGOB, México.

Schumpeter, Joseph

- 1947 *Capitalismo, socialismo y democracia*, Editorial Harper, Nueva York.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

- 2007 *¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

- 2007 (b) *Las Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Libertad de Expresión*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.

Tocqueville, Alexis de

- 1998 *La democracia en América*, Fondo de Cultura Económica, México, Novena reimpresión.

Touraine, Alain

- 2000 *¿Qué es la democracia?*, Fondo de Cultura Económica, México.

Toussaint, Florence

- 1998 *Televisión sin fronteras*, Siglo XXI Editores, México.

Trejo Delarbre, Raúl

- 2004 *Poderes salvajes: Mediocracia sin contrapesos*, Editorial Cal y Arena, México.

Vega, Aimée; Portillo Maricela; Repoll Jerónimo (Coordinadores)

- 2008 *Las claves necesarias de una comunicación para la democracia*, AMIC-UJAT, México.

Villamil, Jenaro

- 2007 “Poder-dinero-medios y elecciones” en Vázquez Federico & Moritz Jürgen, *El triángulo de las bermudas: el financiamiento de la política en México*, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México.

Weldon, T.H.

- 1953 *The vocabulary of politics*, Penguin Books, Harmondsworth.

Versiones estenográficas

Cámara de Diputados

- 2005 “*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía*”, Cámara de Diputados, 29 de noviembre de 2005, México.

Cámara de Diputados

- 2005 (b) “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de Diputados, 1 de diciembre de 2005, México.

Cámara de Diputados

- 2007 “*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*”, en: www.camaradediputados.gob.mx

Cámara de Diputados

- 2008 “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de Diputados, 9 de enero de 2008, México.

Cámara de Diputados

- 2009 “Boletín 8639”, Cámara de Diputados, 6 de febrero de 2009, México.

Cámara de Senadores

- 1995 “*Versión estenográfica de la sesión de pleno*”, Cámara de senadores, 24 de abril de 1995, México.

Cámara de Senadores

- 2006 “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de senadores, 30 de marzo de 2006, México.

Cámara de Senadores

- 2006 (II) “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de senadores, 6 de abril de 2006, México.

Cámara de Senadores

- 2006 (III) “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de senadores, 20 de abril de 2006, México.

Cámara de Senadores

- 2006 (IV) “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de senadores, 12 de septiembre de 2007, México.

Cámara de Senadores

- 2008 (I) “*Informe del Secretario Técnico*”, Cámara de senadores, 6 de mayo de 2008, México.

http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/content/Informe_secretario_tecnico.pdf

Cámara de Senadores

- 2008 (II) “*Informe final*”, Cámara de senadores, 6 de mayo de 2008, México.

http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/content/Informe_final_GP.pdf

- 2008 (III) “*Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno*”, Cámara de senadores, 28 de mayo de 2008, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

- 2007 (I) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 24 de mayo de 2007, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

- 2007 (II) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 28 de mayo de 2007, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2007 (III) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 29 de mayo de 2007, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2007 (IV) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 de junio de 2007, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2007 (V) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 de junio de 2007, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2007 (VI) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6 de junio de 2007, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2008 Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 de mayo de 2008, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2008 (II) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 24 de junio de 2008, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

2008 (III) Versión estenográfica de la sesión ordinaria de pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26 de junio de 2008, México.

Ponencias

Aceves, Francisco

2007 “Campañas políticas y configuración del voto electoral en el 2006: Encuestas electorales y publicidad política”, ponencia presentada en el *XV Encuentro Nacional CONEICC*, 17-18 octubre de 2007, Universidad Veracruzana, Boca del Río, Veracruz.

Cisneros, José

2006 “Legalidad, legitimidad y bloque histórico en medios electrónicos: Una lectura teórica sobre la ley Televisa”, Ponencia, Mesa: Estudios sobre medios, *XVIII Encuentro Nacional AMIC 2006*, 31 mayo, 1 y 2 de junio, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán.

Corral, Javier

- 2007 “Las claves necesarias para una comunicación para la democracia”, Panelista, *XIX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC)*, 2 de mayo de 2007, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco.

Esteinou, Javier

- 2006 “La Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y la defensa del Consejo Ciudadano de Comunicación”, Ponencia, Mesa: Estudios sobre medios, *XVIII Encuentro Nacional AMIC 2006*, 31 mayo, 1 y 2 de junio, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán.

-
- 2008 “Políticas públicas en comunicación”, Ponencia, panel: Políticas Públicas en Comunicación, *XX Encuentro Nacional AMIC 2008*, 8 de mayo, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León.

Hernández, Francisco

- 2008 “González Camarena, la innovación interrumpida”, Ponencia, Mesa: Historia y Comunicación, *XX Encuentro Nacional AMIC 2008*, 6-9 mayo de 2008, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León.

Martell, Lenin

- 2006 “¿Por qué la Ley Televisa se ha olvidado de la otra radio?”, Ponencia, Mesa: Estudios sobre medios, *XVIII Encuentro Nacional AMIC 2006*, 31 mayo, 1 y 2 de junio, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán.

Peschard, Jacqueline

- 2006 “La democracia ayer y hoy. A cuarenta años de *La democracia en México* de Pablo González Casanova”, Ponencia presentada en el homenaje a Pablo González Casanova, abril, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Puente, Margarita

- 2006 “La dimensión Jurídica de las políticas de Comunicación”, Ponencia, Mesa: Políticas de comunicación, *XVIII Encuentro Nacional AMIC 2006*, 31 mayo, 1 y 2 de junio, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán.

Romo, Cristina

- 2005 “La discusión del proyecto de reforma a la ley federal de Radio y Televisión”, Ponencia, *Foro: La discusión del proyecto de reforma a la Ley Federal de Radio y TV*, ITESO, mayo de 2005.

Sosa, Gabriel

- 2006 “La Ley Televisa y la convergencia tecnológica”, Ponencia, Mesa: Estudios sobre medios, *XVIII Encuentro Nacional AMIC 2006*, 31 mayo, 1 y 2 de junio, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán.

Artículos en revistas especializadas

Alonso, Jorge

- 2007 “Partidocracia VS mediocracia: importante escaramuza” en *Revista Envío*
<http://www.emvio.org.ni/articulo/3663>

Casar, María Amparo

- 2006 “Nuevo mapa del poder político”, en: *Revista Nexos* 334, México, D.F., agosto de 2006.

Fernández, Fátima

- 2007 “¿Cómo se constituyó Televisa en un poder fáctico?”, en: *Revista Nexos* 352, México, D.F., abril de 2007.

Francoz, Antonio

- 1997 “Urge una nueva ley de aviación, en Derechos humanos”, en *Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México*, Número 23, enero-febrero, páginas 165-168, Toluca, Estado de México.

Luna, José

- 2008 “Defiende la SCJN a la sociedad y a la libertad de expresión”, en *Revista Vértigo*, Número 375, mayo, México, DF.

Sánchez Ruiz, Enrique

- 1991 “Hacia una cronología de la televisión mexicana”, en *Revista Comunicación y Sociedad*, febrero de 1991, Universidad de Guadalajara, México.

Serrano, Enrique

- 2000 “En torno al dispositivo simbólico de la democracia”, en *Revista Metapolítica*, Número 4, CEPCOM, México.

Trejo, Raúl

- 2002 “15 mentiras del Gobierno y la CIRT”, en *Revista Zócalo*, noviembre de 2002, México, DF.

Trejo, Raúl

- 2008 “Azcárraga Jean, protegido de Zedillo”, en *Revista Zócalo*, marzo de 2008, México, DF.

Toussaint, Florence

- 2008 “AM-FM” en *Revista Proceso* No. 1665, México.

Velázquez, Rosalía

- 2007 “El Estado y la radiodifusión” en *Connotaciones* No. 1, páginas 79-118, AMIC, México.

Otras fuentes

Larrain, Horacio

2005 “Sobre el concepto de democracia en el fin de siglo”, en http://www.robertexto.com/archivo3/democ_finsiglo.htm

Pardo, Gastón

2007 “La violencia política y la política de los medios”, en: [www.unidad.org.mx](http://www.unidad.org.mx/secciones/opinion/medios.html)
<http://www.unidad.org.mx/secciones/opinion/medios.html>

Calleja, Aleida

2007 “Acción de inconstitucionalidad ¿qué es y por qué se presentó?”, archivo de audio, <http://sonoridades.amarcMexico.org/>

Canal del Congreso

Canal Judicial

Páginas Web

www.javiercorral.org.mx

www.AMEDI.org.mx

www.camaradediputados.gob.mx

www.senado.gob.mx

www.scjn.gob.mx

<http://www.youtube.com/watch?v=KMYTtMR5eiE>

<http://www.youtube.com/watch?v=C8PCNb3fOUE>

<http://www.youtube.com/watch?v=2ukIAli8a3s>

www.radiojenpoj.org

<http://www.iddt-lat.org/>

www.asambleapopulardeOaxaca.com

http://www.wikilearning.com/los_grupos_de_interes_y_los_movimientos_sociales-wkccp-6273-42.htm

<http://html.rincondelvago.com/gobernabilidad.html>

www.wikipedia.org

<http://fi.uaemex.mx/lestergr/GGC.htm>

<http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=26060>

<http://fi.uaemex.mx/lestergr/GGC.htm>

<http://www.quien.com/quien/2007/142/los-75-anos-de-miguel-aleman/>

<http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc83/expansion.html>
<http://www.dialogosfelafacs.net/articulos/pdf/53ValerioFuenzalida.pdf>
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-31941188_ITM
www.alcamarc.org
<http://portal.unesco.org.ci>
www.parlamento.gub.uy
<http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/oct98/09oct98.html>
<http://electionresources.org/mx/diputados.php?election=1997>
http://www.cofetel.gob.mx/cofetel/radio_tv/doctos/diarioof3.pdf
<http://www.esmas.com/noticierostelevisa/old/693661.html>
http://www.radiodigitalterrestre.com/radio/radio_ppal.htm
<http://tecnicaaudiovisual.kinoki.org/radio/dab.htm>
<http://www.tnsglobal.com/news/news-D8C86F7EC723450A921D3102EF6F63C6.aspx>
http://www.coneicc.org.mx/noticias/2005.02_ley_radioytv.htm
<http://www.coneicc.org.mx/noticias/desplegado.html>
www.radioinsurgente.org
www.ife.org.mx
www.jornada.unam.mx
<http://www.wradio.com.mx/nota.asp?id=436827>
<http://www.area.com.mx/market/anatocismo.html>
<http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020906posiciones.htm>
<http://www.ibope.com.mx/hgxp001.aspx?1,1,50,O,S,0,MNU;E:13;2:MNU>
<http://www.cencos.org/es/node/16862>

Entrevistas

Entrevista a Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, senador de la República (LIX Legislatura), 2005, Guadalajara.

Entrevista a Raúl Trejo Delarbre, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 4 de mayo de 2006, México.

Entrevista a Aleida Calleja, Representante jurídica de la AMARC, 8 de mayo de 2006, México.

Entrevista a Dulce María Sauri Riancho, senadora de la República (LIX Legislatura), 17 de mayo de 2006, México.

Entrevista a Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, senador de la República (LIX Legislatura), 27 de agosto de 2006, Guadalajara.

Entrevista a Alma Rosa Alva de la Selva, Catedrática de la FCPyS de la UNAM, 15 de mayo de 2007, México.

Entrevista a Andrea Zambrana, Secretaria de Estudio y Cuenta del Ministro Salvador Aguirre Anguiano, 4 de enero de 2007, SCJN, México.

Entrevista a Santiago Creel, Senador de la República (LX Legislatura) Foro La Ley de Medios: ¿Esperando a Godot?, 3 de diciembre de 2008, Guadalajara.

Entrevista a Rubén Alonso, experto en temas de acceso a la información pública, 31 de diciembre de 2008, Guadalajara.

Material hemerográfico

Diario *La Crónica de Hoy*, México, D.F. (meses diciembre 2005-junio 2008)

Diario *Excélsior*, México, D.F. (Meses diciembre 2005-junio 2008)

Diario *La Extra*, México, D.F. (2008)

Diario *Impacto*, México, D.F. (2008)

Diario *La Jornada*, México, D.F. (meses diciembre 2005-junio 2008)

Diario *Mural*, Guadalajara, Jalisco (meses diciembre 2005-junio 2008)

Diario *Público*, Guadalajara, Jalisco (meses diciembre 2005-junio 2008)

Diario *Reforma*, México, D.F. (meses diciembre 2005-junio 2008)

Diario Oficial de la Federación, México, D.F.

Revista Etcétera, No. 66, abril de 2006, México, D.F.

Revista Etcétera, No. 80, junio de 2007, México, D.F.

Revista Proceso, No. 1575, 6 de enero de 2007, México, D.F.

Revista Proceso, No. 1576, 14 de enero de 2007, México, D.F.

Revista Vértigo No. 322, 20 de mayo de 2007, México, D.F.

Revista Zócalo, No. 74, abril de 2006, México, D.F.

Revista Zócalo, No. 88, junio de 2007, México, D.F.

Revista Zócalo, No. 97, marzo de 2008, México, D.F.

Gaceta parlamentaria, No. 311, 9 de diciembre de 2008, México, D.F.